



# **Ministerio de Igualdad y Equidad**

## **ESTUDIO TÉCNICO Estructura y Planta de Personal**

## Tabla de contenido

<b>1.</b>	<b>5</b>	
<b>1.1</b>	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>	
<b>1.1.2</b>	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>	
<b>1.1.3</b>	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>	
<b>1.1.4</b>		<b>49</b>
<b>1.2</b>	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>	
<b>1.2.1</b>		<b>57</b>
<b>1.2.2</b>	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>	
<b>1.2.3</b>	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>	
<b>1.2.4</b>	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>	
<b>2.</b>	<b>105</b>	
<b>2.1</b>	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>	
<b>2.2</b>	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>	
<b>2.3</b>	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>	
<b>2.3.1</b>	<b>Tecnológicas</b>	<b>74</b>
<b>2.3.2</b>	<b>Presupuestales</b>	<b>76</b>
<b>2.3.3</b>	<b>Estructura Organizacional</b>	<b>80</b>
<b>2.3.4</b>	<b>Talento Humano</b>	<b>89</b>
<b>ANEXOS</b>		<b>94</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>		<b>95</b>

## Índice de ilustraciones

Figura 1. Trámite legislativo	15
Figura 2. Población Objetivo del Ministerio de Igualdad y Equidad	23
Figura 3. ODS con relación directa e indirecta con el alcance y objetivo del Sector Administrativo y del Ministerio de Igualdad y Equidad	51
Ilustración 4. Modelo de operación del Ministerio de Igualdad y Equidad	74
Figura 5. Cadena de Valor del Ministerio de Igualdad y Equidad	76
Figura 6. Mapa de Procesos	76
Figura 7. Estructura organizacional	83
Figura 8 - Caracterización de la población en situación de discapacidad por género, Ene-May 22	85
Figura 9 - Situación del empleo de las personas en situación de discapacidad, Feb – Abr 22	85
Ilustración 10 – Número de nacimientos según grupos de edad quinquenal de la madre (Total, nacional, Años 2018-2022pr)	87
Figura 11 – Proyección poblacional nacional para Colombia, por grupos de edad	88

## Índice de Tablas

Tabla 1. Funciones de sectores y entidades relacionadas con el objeto de Ministerio de Igualdad y Equidad	6
Tabla 2. Instancias de articulación intersectorial lideradas por Sectores Administrativos relacionados directamente con el objeto del Ministerio de Igualdad y Equidad	9
Tabla 3. Dimensiones de la Protección de Derechos	17
Tabla 4. Sujetos de Especial Protección Constitucional	18
Tabla 5. Oferta Principal de Sectores Administrativos relacionados con temas de Educación y Primera Infancia	36
Tabla 6. Oferta Principal de Sectores Administrativos relacionados con temas de Seguridad Alimentaria	39
Tabla 7. Oferta Principal de Sectores Administrativos relacionados con temas de Desarrollo Económico y Productividad Rural	40
Tabla 8. Oferta Principal de Sectores Administrativos relacionados con temas de Justicia, Convivencia y Cultura de Paz	43
Tabla 9. Oferta Principal de Entidades de la Rama Ejecutiva y de otras Ramas del Poder Público relacionadas con temas de Migración	46
Tabla 10. Principales programas por sector de interés	47
Tabla 11. Principales programas relacionados con disminución de brechas de desigualdad	49
	3

Tabla 12. Metas globales de los ODS directamente relacionados con el Sector Administrativo de la Igualdad y la Equidad y con el Ministerio de la Igualdad y la Equidad (Ley 2281 de 2023)	52
Tabla 13. Detalle de los ODS directamente relacionados con el Sector y el Ministerio de Igualdad y Equidad	52
Tabla 14. Estructura orgánica vs Presupuesto asignado	60
Tabla 15. Habilitadores tecnológicos identificados	61
Tabla 16. Recursos identificados para Igualdad y Equidad por sector, monto y participación porcentual (cifras en pesos corrientes)	63
Tabla 17. Recursos identificados para Igualdad y Equidad por población principal o temática (cifras en pesos corrientes)	64
Tabla 18. Recursos identificados para Igualdad y Equidad por ejes temáticos (Cifras en pesos corrientes)	65
Tabla 19. Población que requiere cuidado o apoyo para su desarrollo diario	71
Tabla 20. Estimación de gastos de funcionamiento	80
Tabla 21. Descripción de operaciones presupuestales en el marco del PGN	81
Tabla 22. Estructura interna del Ministerio de Igualdad y Equidad	88
Tabla 23. Planta de personal – Ministerio de Igualdad y Equidad	92
Tabla 24. Discriminación Planta de personal – Ministerio de Igualdad y Equidad	93

## **1. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL**

### **1.1 ANÁLISIS DE CONTEXTO EXTERNO**

#### **1.1.1 Análisis Sectorial**

Para desarrollar el diagnóstico institucional se hizo una revisión de la administración pública en el orden nacional, a partir de la cual se identificaron las entidades y dependencias que tienen relación directa con la misionalidad del Ministerio de Igualdad y Equidad. Lo anterior, con el objetivo de evaluar si actualmente existe una dispersión de funciones entre sectores y entidades para la provisión de políticas públicas que responden al objeto del Ministerio creado.

Para su elaboración, se analizaron 23 de los 24 Sectores Administrativos existentes (a excepción del Sector de Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia), conformados por 18 Ministerios y 5 Departamentos Administrativos, 112 entidades y sus dependencias, y 121 instancias de coordinación y asesoría.

Para adelantar el análisis mencionado, se identificaron funciones, objetivos generales y poblaciones de competencia de cada entidad. Así mismo, se usaron como fuentes de información los Decretos Únicos Reglamentarios, los decretos de estructura y los de funciones generales.

#### **Sectores con Oferta Social Relacionada**

Son Sectores Administrativos y entidades asociadas cuya oferta tiene como objetivo aportar, desde diferentes visiones, a la lucha contra la desigualdad y la inequidad. En este grupo, se encuentran 13 Sectores que se pueden clasificar a su vez en dos grupos, cuya relación puede ser directa o indirecta:

**Relación Directa:** Aquellos Sectores que presentan oferta institucional cuyo objetivo está directamente relacionado con la misionalidad del Ministerio de Igualdad y Equidad:

- Presidencia de la República.
- Inclusión Social y Reconciliación.
- Interior.
- Relaciones Exteriores.
- Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.
- Educación Nacional.

Estos sectores se caracterizan por contar con dependencias que incorporan los enfoques diferenciales (de género, étnico y territorial) a los proyectos propios del sector. Tal es el caso de las dependencias con denominaciones como *de Promoción Social, de Poblaciones, o de Asuntos Sociales*, entre otras. Si bien estas dependencias tienen capacidades especializadas de acuerdo con la misionalidad de su sector, también se encuentran en estos sectores programas o dependencias dirigidas a atender a las poblaciones objeto del ámbito de competencia del Ministerio de Igualdad y Equidad.

En el entendido de que en esta categoría es dónde se concentra la mayor oferta relacionada con la competencia administrativa del Ministerio de Igualdad y Equidad, en el cuadro a continuación se relacionan las funciones con mayor nivel de coincidencia:

**Tabla 1. Funciones de sectores y entidades relacionadas con el objeto de Ministerio de Igualdad y Equidad**

Presidencia de la República	Consejería Presidencia para la Equidad de la Mujer	<p>Las descritas en el artículo 11 del Decreto 2647 de 2011, en particular:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asesorar (...) en el diseño de las políticas, planes, programas y proyectos destinados a la promoción de los derechos de las mujeres en su diversidad, prevención de los diversos tipos de violencia contra ellas, atención de sus demandas y necesidades incorporando la perspectiva de género.</li> <li>2. Coordinar el diseño e implementación de los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la legislación interna y de los tratados, convenios y acuerdos internacionales que se relacionen con la igualdad de género para las mujeres, procurando que se logre la interseccionalidad, la transversalización y la territorialización de las políticas públicas para las mujeres en su diversidad.</li> </ol>

Nº	Descripción de la actividad	Descripción de la actividad
		<p>3. Apoyar, acompañar y promover las diferentes formas de asociación de mujeres en el territorio nacional, impulsando su empoderamiento productivo.</p> <p>4. Dirigir el Observatorio de Asuntos de Género conforme lo establecido en la normativa vigente.</p> <p>5. Establecer alianzas estratégicas con otros sectores de Gobierno, con el sector privado, organizaciones de mujeres, organismos internacionales, Organizaciones No Gubernamentales, universidades y centros de investigación, para la implementación de la política pública de género.</p> <p>6. Impulsar acciones tendientes a la eliminación de toda forma de violencia y discriminación contra la mujer.</p> <p>7. Impulsar estrategias culturales y de comunicación para promover la igualdad de género para las mujeres y su empoderamiento.</p> <p>8. Representar al Presidente de la República, a la Vicepresidenta o al Secretario General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en las instancias de coordinación intersectorial o participación que le sean delegadas, entre ellas, el Sistema Nacional de las Mujeres.</p> <p>9. Adelantar las gestiones para obtener cooperación internacional de acuerdo con las necesidades y los lineamientos establecidos por el Secretario General, en coordinación con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores.</p>

	Agencia de Renovación del Territorio	<p>Las descritas en el artículo 1 del Decreto 1223 de 2020, en particular:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adoptar los planes de acción para la ejecución de las políticas del Gobierno nacional para la intervención de las zonas rurales de conflicto priorizadas.</li> <li>2. Liderar el proceso de coordinación intra e intersectorial a nivel nacional y territorial, para la estructuración y ejecución de planes y proyectos de intervención territorial, que permitan desarrollar la estrategia de intervención de las zonas rurales de conflicto priorizadas.</li> </ol>
Interior	Ministerio del Interior	<p>Las descritas en el artículo 2 del Decreto 1140 de 2018, en particular:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Formular, promover y hacer seguimiento a la política de los grupos étnicos para la materialización de sus derechos, con un enfoque integral, diferencial, social y de género, en coordinación con las demás entidades competentes del Estado.</li> <li>11. Formular, promover y hacer seguimiento a la política de atención a la población LGBTI para la materialización de sus derechos, con un enfoque integral, diferencial y social en coordinación con las demás entidades competentes del Estado.</li> <li>12. Formular, promover y hacer seguimiento a la política de atención a la población en situación de vulnerabilidad, para la materialización de sus derechos, con un enfoque integral, diferencial, social y de género, en coordinación con las demás entidades</li> </ol>



	Estrategia	Descripción de la estrategia
		<p>competentes del Estado.</p> <p>13. Actuar como rector del Sistema Nacional de Discapacidad, con un enfoque integral, diferencial, social y de género, en coordinación con las demás entidades competentes del Estado.</p>
Inclusión Social y Reconciliación	Prosperidad Social	<p>Las descritas en el artículo 4 del Decreto 2094 de 2016, en particular:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formular, dirigir, coordinar, ejecutar y articular las políticas, planes, programas, estrategias y proyectos para la inclusión social y la reconciliación en términos de la superación de la pobreza y pobreza extrema, la atención de grupos vulnerables y la atención y reparación a víctimas del conflicto armado a que se refiere el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011.</li> <li>2. Formular, dirigir, coordinar y articular las políticas, planes, programas, estrategias y proyectos para la atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia.</li> <li>4. Adoptar y ejecutar planes, programas, estrategias y proyectos para gestionar y focalizar la oferta social de las entidades del orden nacional en el territorio, con criterios de eficiencia y eficacia, para garantizar el mejoramiento de las condiciones de vida.</li> </ol>
	Unidad para la Atención y	Las descritas en el artículo 3 del Decreto 4802

	Reparación Integral a las Víctimas	<p>de 2011, en particular:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aportar al Gobierno Nacional los insumos para el diseño, adopción y evaluación de la Política Pública de Atención y Reparación a las Víctimas, garantizando el enfoque diferencial.</li> <li>2. Promover y gestionar con las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la flexibilización y articulación de la oferta institucional para la atención, asistencia y reparación de las víctimas.</li> <li>3. Implementar los mecanismos y estrategias para la efectiva participación de las víctimas, con enfoque diferencial, en el diseño de los planes, programas y proyectos de atención, asistencia y reparación.</li> </ol>
Relaciones Exteriores	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia	<p>Las descritas en el artículo 4 del Decreto 4062 de 2011, en particular:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoyar al Ministerio de Relaciones Exteriores y demás instituciones del Estado en la formulación y ejecución de la Política Migratoria.</li> </ol>
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	<p>Las descritas en el artículo 3 del Decreto 1985 de 2013, en particular:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Formular y hacer seguimiento a la política agropecuaria, pesquera y de desarrollo rural para la atención de la población en situación de vulnerabilidad con el objetivo de contribuir a la materialización de sus derechos con enfoque integral y diferencial, en coordinación con las demás entidades competentes del Estado.</li> <li>11. Participar en la definición de la política</li> </ol>

Sector	Entidad adscrita	Funciones relacionadas
		macroeconómica y social y en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, con el objeto de lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores rurales y el crecimiento económico del Sector Agropecuario. Pesquero y de Desarrollo Rural.
Vivienda, Ciudad y Territorio	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	<p>Las descritas en el artículo 3 del Decreto 1604 de 2020, en particular:</p> <p>10. Diseñar y promover programas especiales de agua potable y saneamiento básico para el sector rural, en coordinación con las entidades competentes del orden nacional y territorial.</p> <p>13. Contratar el seguimiento de los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo que cuenten con el apoyo financiero de la Nación.</p> <p>16. Articular las políticas de vivienda y financiación de vivienda con las de agua potable y saneamiento básico y, a su vez, armonizarlas con las políticas de ambiente, infraestructura, movilidad, salud y desarrollo rural.</p>

Fuente: elaboración propia con base en los decretos enunciados.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familia-ICBF, el Instituto Nacional para Ciegos y el Instituto Nacional para Sordos, dado que su funciones están directamente y completamente relacionadas con el objeto, misionalidad, funciones y poblaciones objeto del Ministerio de Igualdad y Equidad, pero son entidades adscritas a el sector de prosperidad social y educación, respectivamente, van a cambiar de asdcripción para integrarse al sector de Igualdad y Equidad.

**Indirecta:** Aquellos sectores que, de manera indirecta, contribuyen a la misionalidad planteada por el Ministerio de Igualdad y Equidad, es decir que, en algunos casos, cuentan con oferta social explícita para los grupos descritos en la Ley, lo que

necesariamente representa la prestación de una atención integral para la población sujeta de las intervenciones. Estos son:

- Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- Cultura.
- Justicia y del Derecho.
- Salud y de la Protección Social.
- Comercio, Industria y Turismo.
- Trabajo.
- Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Para los anteriores Sectores Administrativos, se requerirá, en una etapa posterior a la que se presenta en este documento, la definición de un arreglo institucional para la integración y armonización de políticas con el sector de Igualdad y Equidad en general y con el respectivo Ministerio en particular, de manera que se evite la duplicidad de funciones, se delimiten competencias y se garantice el principio de eficiencia y eficacia de la función pública (ver documento Anexo de Duplicidades).

#### Instancias de Coordinación

Una vez analizadas las funciones de los Sectores Administrativos y de sus principales entidades adscritas o vinculadas que tienen oferta relacionada con el Ministerio de Igualdad y Equidad, se realizó un mapeo de las instancias de coordinación intersectoriales existentes dentro de dichos sectores y que tienen como propósito orientar, articular y/o coordinar acciones de política pública relacionada con el quehacer del Ministerio, las cuales se presentan en la Tabla 2.

***Tabla 2. Instancias de articulación intersectorial lideradas por Sectores Administrativos relacionados directamente con el objeto del Ministerio de Igualdad y Equidad***

Sector	Instancias de articulación
Presidencia de la República	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia (CIPI)</li> <li>2. Mesa del Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia</li> <li>3. Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados – CIPRUNNA</li> <li>4. Consejo Nacional de Políticas Públicas de la</li> </ol>

Sector	Instancias de articulación
	<p>Juventud</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Comisión Intersectorial de la Política Nacional de Cuidado</li> <li>6. Comisión Intersectorial de las Mujeres del Sistema Nacional de Mujeres</li> <li>7. Comisión Intersectorial “Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres”</li> <li>8. Comisión Intersectorial para la implementación de la Política Pública Nacional de Equidad de Género</li> <li>9. Comisión intersectorial de alto nivel para la protección inmediata de las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas awá y eperara-siapidaara que habitan el Pacífico nariñense</li> </ol>
Interior	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema Nacional de Discapacidad Consejo Nacional de Discapacidad</li> <li>2. Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Líderesas y Defensoras de los Derechos Humanos</li> <li>3. Grupo Técnico para la garantía en el Goce Efectivo de los Derechos de los Sectores Sociales LGBT del Subsistema de Igualdad, no Discriminación y Respeto por las Identidades, del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario</li> <li>4. Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Afrocolombiana, Palanquera y Raizal</li> <li>5. Comisión Consultiva de Alto Nivel y Comisiones Consultivas Departamentales y del Distrito Capital de Bogotá para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras</li> <li>6. Comisión Mixta para el Desarrollo Integral de la Política Pública Indígena del departamento del Cauca</li> <li>7. Mesa Regional Amazónica</li> <li>8. Mesa de Concertación para el Pueblo Awa</li> <li>9. Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas</li> <li>10. Comisión Nacional de Prevención y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas en</li> </ol>

Sector	Instancias de articulación
	Aislamiento
Inclusión Social y Reconciliación	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comisión Intersectorial de la Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema Unidos</li> <li>2. Mesa de Equidad</li> <li>3. Consejo Nacional de Política Social</li> <li>4. Sistema Nacional de Bienestar Familiar</li> <li>5. Comité Nacional de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA)</li> </ol>
Educación Nacional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comité Nacional de Convivencia Escolar del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar</li> <li>2. Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades Negras</li> <li>3. Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas</li> </ol>
Relaciones Exteriores	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comisión intersectorial para el retorno.</li> <li>2. Comisión Nacional Intersectorial de Migración.</li> <li>3. Comisión Intersectorial de Lucha contra el Tráfico de Migrantes.</li> </ol>
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comité Interinstitucional de Seguimiento al Plan de Revisión, Evaluación y Seguimiento de los programas y leyes que favorecen a las mujeres rurales.</li> <li>2. Comisión Nacional de Territorios Indígenas.</li> </ol>
Justicia y Derecho	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SNCRPA</li> </ol>
Salud y Protección Social	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comité Interinstitucional consultivo para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas del abuso sexual</li> <li>2. Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos.</li> <li>3. Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria</li> </ol>

Sector	Instancias de articulación
	y Nutricional (CISAN) 4. Consejo Nacional de Personas Mayores (CNPM) 5. Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género, de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, como estrategia de gestión en salud pública
Trabajo	1. Comité interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Menor Trabajador - CIETI
Industria y Turismo	1. Comisiones regionales de competitividad.

Fuente: elaboración propia

En relación con las anteriores instancias de coordinación intersectorial es pertinente señalar lo siguiente:

**Los arreglos institucionales actuales operan mediante cadenas de gestión dirigidas a poblaciones específicas.** Las cadenas de gestión asociadas con grupos etarios o por ciclo de vida, involucran a instancias que se adscriben o cuya presidencia se atribuye a los Sectores directamente relacionados con el objeto del Ministerio de Igualdad y Equidad, como Inclusión Social y Reconciliación, Presidencia de la República, Trabajo, y Educación Nacional. Por su parte, la cadena de gestión de Pobreza/Inequidad se identifica a cargo del Sector de Inclusión social y Reconciliación. Además, las cadenas de gestión de Población con Discapacidad y de Pueblos Afrodescendientes, Negros, Raizales y Palenqueros, Indígenas, y Rrom, se adscriben y operan con la dirección del Ministerio del Interior, la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, y en coordinación con Sectores como Educación Nacional y Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. Así mismo, las cadenas de gestión de Mujeres y población LGBTIQ+, y de Cuidado se adscriben y se dirigen principalmente desde la Presidencia y Vicepresidencia de la República, y el sector Interior, en conjunto con otros sectores, como el Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. Finalmente, la cadena de gestión relacionada con población migrantes, retornados y refugiados se adscribe y dirige principalmente por el Sector de Relaciones Exteriores.

**La tendencia de especialización de las nuevas políticas públicas sociales ha generado dispersión y fragmentación en la conformación de organismos de coordinación.** Entre las políticas con proceso de especialización más reciente se encuentra el caso de la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera

Infancia (Estrategia Nacional de Cero a Siempre) acorde a lo establecido por la Ley 1804 de 2016 que, en su esquema de operación, asigna a la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia (CIPI), competencias de coordinación en la gestión intersectorial a nivel nacional en la materia, y no así de forma especializada para el desarrollo técnico. En esta situación se observa una ruptura y duplicidad frente al arreglo y liderazgo con alcance al Sistema Nacional de Bienestar Nacional (SNBF) y del Código de la Infancia y la Adolescencia de la Ley 1098 de 2006, así como para la orientación de lineamientos y los recursos y capacidades del ICBF.

Esta situación tuvo origen en las prioridades programadas en el PND 2014-2018, su financiación y la priorización establecida en el Documento CONPES 3918 de 2018, correspondiente a la Estrategia para la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia, en función del tamaño de las metas de cobertura y tiempos de ejecución, lo que implicó articular un esquema de responsabilidad y seguimiento desde la Presidencia de la República. Además, este proceso de especialización de política no realizó una transferencia horizontal del fortalecimiento de capacidades estratégicas y operativas hacia las demás políticas, organismos y agentes o integrantes de los organismos relacionados, quedando limitado al entorno institucional de la política especializada.

En este mismo sentido, la constitución del Sistema Nacional de Juventud implica la necesidad de avanzar en modelos de articulación con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) y la CIPI en una ruta integral y progresiva de realizaciones; no obstante, la modificación más reciente a la estructura del ICBF integró esta temática de jóvenes en su gestión, lo que podría favorecer la coordinación, a pesar de que su liderazgo permanecerá a cargo de la Presidencia de la República.

Otro ecosistema de coordinación de estos organismos con alta especialización gira en torno a la temática de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, cuya especialización involucra la gestión de cuatro organismos: (i) el Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la Violencia Sexual y Atención Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas del Abuso Sexual; (ii) la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Armados al Margen de la Ley y por Grupos Delictivos Organizados (CIPRUNNA); (iii) el Comité Nacional Interinstitucional de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA); y (iv) el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.



En relación con el Sistema Nacional de Discapacidad, se crea el Consejo para la Inclusión de la Discapacidad, precisamente en atención a que la Ley 1346 de 2009 aprobó la *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*, y la Ley Estatutaria 1618 de 2013 estableció las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, entre ellas la obligación del Ministerio del Interior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio del Trabajo de disponer de los mecanismos necesarios para la integración de un Consejo. Sin embargo, se evidencia que dicho consejo no se ha puesto en funcionamiento, de tal suerte que no es operativo, a lo que se adiciona el hecho que algunas funciones que le son asignadas son asumidas por otros organismos o entidades del orden nacional.

En materia de protección de poblaciones migrantes, retornadas y refugiadas, en el contexto de la Comisión Nacional Intersectorial de Migración (creada mediante el Decreto 1239 de 2003), que integra temáticas de población migrante y retornada, no es clara su articulación con la Comisión Intersectorial para el Retorno (establecida en el Decreto 1000 de 2013) ni con la Comisión para la Lucha contra el Tráfico de Migrantes (definida en el Decreto 1692 de 2016).

El arreglo intersectorial asociado con la atención de Mujeres especializa en dos comisiones intersectoriales las temáticas de violencia por sexo, género y discriminación contra ellas. Por otra parte, se cuenta con el establecimiento de la Comisión Intersectorial para la Implementación de la Política Pública Nacional de Equidad de Género (establecida en el Decreto 1930 de 2013) y el Sistema Administrativo Nacional de Mujeres (creado mediante el Decreto 1106 de 2022), que coordina esta política pública a través de la Comisión Intersectorial de Mujeres, y en articulación con la Comisión Intersectorial de la Política Nacional de Cuidado.

Sobre la constitución de organismos de coordinación relacionados con los Pueblos Afrodescendientes, Negros, Raizales y Palenqueros, e Indígenas, Rrom, en su mayoría, su objeto responde al tipo de organismos consultivos, como espacios de concertación y diálogo entre el Gobierno nacional y estas comunidades para el diseño de políticas. Para estos Pueblos, la gestión de coordinación intersectorial presenta grandes retos para avanzar en el fortalecimiento y desarrollo del ciclo de políticas y, en especial, en la coordinación para la entrega de una oferta institucional integral.

Por último, sobre las poblaciones del ámbito de competencias señalado en la Ley 2281 de 2023 no se identifican acciones de gestión intersectorial dirigidas a campesinos y campesinas. Por su parte, para las personas habitantes de calle, el Ministerio de Salud y Protección Social está liderando la creación de la Comisión Intersectorial para el

Desarrollo de la Política Pública Social para Habitantes de la Calle, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.9.2.8.2 del Decreto 1285 de 2022.

**El propósito de los organismos de coordinación, acorde con sus objetos de constitución, se orienta más a la planeación de política, que a la entrega de la oferta.** Los objetos de las instancias se establecen en torno al impulso del diseño de políticas públicas, de su ciclo de gestión de formulación, implementación, seguimiento y evaluación, y de planes y estrategias de programas y servicios que se dirigen, desde el ámbito nacional hacia el territorial. De forma específica, los objetos de constitución desarrollan el marco de acciones de: (i) protección integral de las poblaciones por grupo etario o ciclo de vida (primera infancia, niños, niñas y adolescentes, jóvenes, adultos y familias, y adultos mayores); (ii) promoción social y manejo del riesgo social de familias en situación de pobreza, vulnerabilidad e inequidad; y (iii) del goce de derechos y la inclusión social e igualdad de las personas con discapacidad; migrantes, retornados y refugiados; personas cuidadas y cuidadores; mujeres; población LGTBIQ+; y Pueblos Afrodescendientes, Negros, Raizales y Palenqueros, Indígenas, Rrom y campesinado.

Además, en los objetos de los sistemas administrativos nacionales se busca propender por la participación social alrededor de la protección de estas poblaciones con especial protección constitucional, mediante el seguimiento y creación de espacios o instancias en el orden territorial, como parte del diseño de su estructura de gobernanza. En general, se constituye una gestión con grandes retos para lograr una efectiva y necesaria coordinación orientada a la entrega de una oferta institucional integral entre los agentes y para consolidar resultados a largo plazo.

**La efectividad de la gestión intersectorial para la igualdad y equidad requiere la construcción y posicionamiento del liderazgo del Ministerio de la Igualdad y Equidad como autoridad social.** Construir el adecuado liderazgo en la gestión intersectorial es clave para que contribuya de forma significativa a la coordinación de los participantes hacia el desarrollo de objetivos comunes y orientados a metas y resultados. La naturaleza multidimensional que caracteriza la protección integral e inclusión social y el goce de derechos de las poblaciones representa grandes retos de gestión que, en términos de modelos de colaboración exige un rol de liderazgo visible con capacidades estratégicas para orientar acciones, recursos y capacidades, y para promover la adaptación frente a los retos y cambios en un entorno complejo y con multiplicidad de agentes dispersos. Implica contrarrestar que en algunos casos, la falta de claridad en las responsabilidades de los integrantes en el acto de constitución, y motivar a los agentes que sostienen posiciones en relación con una responsabilidad que se reconoce como mínima, parcial, periférica o de soporte frente al objeto del

organismo de coordinación, o que se señala que recae en quien preside o realiza la secretaría técnica; o que prefieren mantenerse en el arraigo del trabajo sectorial y no intersectorial, aduciendo que las funciones las ejercen desde su autonomía institucional; así como por otras visiones de los agentes o integrantes que se identifican con un espacio funcional solo para coordinar la articulación territorial en la implementación de las políticas sectoriales.

**Afianzar el trabajo en red entre los integrantes de los organismos incidiría positivamente en el liderazgo, coordinación e implementación de políticas públicas y su oferta de programas y servicios.** Los actos de constitución de las comisiones intersectoriales refuerzan en mayor medida las acciones para la planeación, mediante la gestión de formulación de políticas y sus planes de acción sobre la protección integral y la inclusión social para el goce de derechos. En el caso de los Sistemas Administrativos Nacionales, sus estructuras internas integran espacios denominados instancias, mediante los cuales se organizan los flujos de trabajo para la dirección y coordinación, el desarrollo técnico de las temáticas entre los participantes, o para impulsar la cooperación y participación en los niveles nacional, departamental y municipal. Si bien, en estos espacios o instancias no se determina el establecimiento de redes formales, contribuyen significativamente a la socialización y acuerdos sobre lineamientos técnicos, aunque se observa en los actos de constitución que la responsabilidad recae en la Secretarías Técnicas de los organismos.

**El trabajo intersectorial en la gestión de igualdad y equidad requiere fortalecer redes de trabajo en torno a una oferta programática de estrategias y servicios para la atención integral.** En la estructura de los sistemas administrativos nacionales y las comisiones intersectoriales identificados en el mapeo institucional, si bien se observa la organización de espacios o instancias para el trabajo técnico entre los integrantes, este debe avanzar en el establecimiento de redes formales, de forma que en el cumplimiento de los objetivos se afiance el trabajo conjunto para la igualdad y equidad. Adolecer de formalidad en las redes internas en las líneas de acción de los organismos, repercute sobre las funciones de programación y ejecución del ciclo de gestión, pues ante la baja claridad de los objetivos y responsabilidades entre los agentes, se presentan barreras para consolidar la eficacia organizacional en el trabajo conjunto, tanto a nivel sistémico, como inter-sistémico. Como consecuencia, se encuentra disminuida la imagen o percepción de que estos modelos de trabajo sean efectivos como espacio para la gestión de prioridades de gobierno o la formulación de políticas nacionales. Es muy importante resaltar que los acuerdos intersectoriales y redes de trabajo deben procurarse en torno a la programación e implementación de programas y servicios de atención integral como oferta institucional de las políticas públicas.

**El proceso de dirección y asesoría para el diseño y formulación de políticas públicas concentra la mayor dimensión del trabajo de los organismos de coordinación.** La formulación y actualización de las políticas públicas ha concentrado el espacio para generar inclusividad y alineación entre los integrantes de los organismos. En esta tarea, se hace necesario avanzar en la identificación de la cadena de valor que integre la gestión y actividades, su oferta y procesos que la generan, la movilización de recursos e integración de agentes sobre las poblaciones, su ciclo de vida y acciones para la protección, cuidado y goce de derechos e inclusión social. Es necesario avanzar en los lineamientos técnicos que delimiten la articulación de la gestión de estas, los fines de la oferta institucional y de sus efectos y resultados, a través de una ruta de implementación de las intervenciones y de la gobernanza interinstitucional. El alcance multidimensional de los problemas sociales debe reunir y no dispersar esfuerzos de sectores y entidades. Las políticas públicas son el principal instrumento para la organización de redes de agentes a nivel sistémico e inter-sistémico y las redes pueden potenciar su rol como mecanismo de enlace, y maximizar la asignación transversal y no particular de los recursos y las capacidades de gobierno.

**Existe dispersión en la definición de la oferta institucional para la igualdad y equidad que gestionan los organismos de coordinación relacionados.** La especialización actual de las políticas públicas de política social sobre las poblaciones y su ciclo de vida, se desarrolla desde el diseño de cada política, sin mecanismos que logren alinear el diseño y la formulación de programas, o incrementar la intensidad de una gestión de estrategias y servicios concretos hacia las poblaciones objetivo. En sí mismo, la dispersión y fragmentación del número de organismos de coordinación existentes y la especialización de las políticas impiden la gestión de una oferta institucional integral en materia de igualdad y equidad, sumado al incremento de las necesidades de coordinación inter-sistémicas, debido al mayor número de organismos en operación y las debilidades y limitados incentivos para el trabajo intersectorial.

El Ministerio de Igualdad y Equidad tiene a cargo el diseño, dirección e implementación del Sistema Nacional de Igualdad y Equidad, de acuerdo con el artículo 71 de la ley 2294 de 2023 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida”. Este sistema definirá los mecanismos de articulación interinstitucional a los cuales el Ministerio de Igualdad y Equidad entraría y en qué condición participaría.

En el marco de la conformación e integración del Sector Administrativo de Igualdad y Equidad es necesario incluir a la cabeza de sector, el Ministerio de Igualdad y Equidad, en las diferentes instancias de coordinación y articulación institucional e intersectorial para integrar el Sector a todo el gobierno nacional y sus otros 24 sectores administrativos y que fueron conformadas a través de normas con rango de ley. Estos

mecanismos de articulación definidos por leyes son los siguientes: el Consejo Nacional de Política Social (el artículo 206 de la Ley 1098 de 2006), el Comité Interinstitucional consultivo para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas del abuso sexual (artículo 3 de la Ley 1146 DE 2007), el Comité Nacional de Discapacidad (el artículo 10 de la Ley 1145 de 2007), el Comité Nacional de Convivencia Escolar (el artículo 7 a la Ley 1620 de 2013), el Consejo Nacional del Adulto Mayor (el artículo artículo 29 de la Ley 1251 de 2008), el Consejo Nacional de Políticas Públicas de la Juventud (el artículo 18 de la ley 1622, de 2013), el Comité Nacional Interinstitucional (el artículo 27 de la Ley 1336 de 2009) y la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia (artículo 11 de la Ley 1804 de 2006).

A través del uso de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República en el artículo 12 de la ley 2281 de 2023 para incluir a la cabeza del Sector Administrativo de Igualdad y Equidad en cada una de las instancias, la integración de Sector Administrativo también incluyó su participación del nuevo Ministerio en las instancias creadas por leyes y que fueron descritas anteriormente. Esta integración permite la coordinación y articulación con otros sectores administrativos para el desarrollo de las políticas públicas de su competencia pero que tienen participación interinstitucional e intersectorial.

### **1.1.2 Análisis Jurídico Legal**

Antecedentes: las Propuestas de la Campaña – Programa de Gobierno 2022:  
“Colombia Potencia Mundial de la Vida”

La Constitución Política de 1991 eligió como modelo el Estado Social de Derecho que se centra en la garantía efectiva de la dignidad humana. Los artículos 1 y 2 de la Constitución, que consagran el modelo de Estado y sus fines, muestran el profundo compromiso de la Constitución con la dignidad humana dado que la pone en el centro del ordenamiento jurídico y en los fines del Estado.

La dignidad humana, a su vez, requiere de que la cláusula de igualdad consagrada en el artículo 13 de la Constitución trascienda su carácter formal para que se convierta en una realidad material. La Corte Constitucional, consiente del papel e importancia de la igualdad para el Estado Social de Derecho, ha sido enfática al afirmar que la igualdad es un principio, un valor y un derecho fundamental.

Por principio, la Corte entiende que la igualdad es, esencialmente, un mandato de optimización, es decir es un fin que se debe alcanzar en la mayor medida posible atendiendo a las posibilidad fácticas y jurídicas. La igualdad tiene una dimensión

formal que buscaba, únicamente, que todos fueran iguales ante la ley. Este objetivo, aunque importante para el Estado liberal decimonónico, es en sí mismo insuficiente en la medida que cuando la ley es el parámetro único con que se mide la igualdad se pierden de vista las diferencias sociales, económicas y políticas que determinan la vida de las personas y profundizan brechas de desigualdad.

Por las deficiencias en términos de igualdad formal, se integró el concepto de igualdad material o equidad que es consciente de que las condiciones materiales pueden generar importantes restricciones efectivas y que entiende, en consecuencia, que no basta una igualdad formal o meramente enunciativa sino que es necesario alcanzar una igualdad material que sirve como mínimo para el desarrollo de todas las personas. Es la igualdad material la que se debe garantizar en la mayor medida posible y es una obligación jurídica en cabeza del Estado que establece la misma Constitución. Para hacer efectiva la igualdad material, entre otras cosas, se requiere de que el Estado tenga las capacidades institucionales suficientes para eliminar progresivamente las brechas de desigualdad que persisten en la sociedad colombiana. La igual como principio y su materialización progresiva depende, en consecuencia, de las capacidades del Estado y de su diseño institucional.

Por valor, la Corte entiende que la igualdad constituye un ideal político de alta importancia constitucional. En esa medida, el artículo 13 de la Constitución no solo constituye un clausula jurídica, sino que es también un elemento trascendental en el horizonte político que busca desarrollar la Constitución. Corresponde no solamente a algo que buscamos garantizar en mayor medida posible, sino a uno de los valores fundantes que inspira nuestra vida en sociedad y el ordenamiento político y jurídico que la acompaña. Como valor, la igualdad es siempre parte del horizonte político e interpretativo de nuestra Constitución.

Y como derecho fundamental, la igualdad implica que el Estado debe abstenerse de realizar cualquier tipo de tratos discriminatorios a los ciudadanos en todas sus actuaciones. Es decir, tratos desiguales que no persiguen un fin legítimo y amparado constitucionalmente o que se basan en las categorías sospechosas que establece el mismo artículo 13 superior. En este sentido, la Corte ha establecido que: “(e)s claro que la Constitución no prohíbe el trato desigual sino el trato discriminatorio porque de hecho el trato distinto puede ser obligatorio para ciertos supuestos, siendo el trato discriminatorio aquel que establece diferencias sin justificación constitucionalmente válida”.

Estas tres dimensiones de la igualdad, como principio, valor y derecho, que fundamentan su entendimiento dentro del Estado Social de Derecho son el marco constitucional en el que se inscriben las medidas legislativas y administrativas que

buscan superar las persistentes brechas de desigualdad que presenta la sociedad Colombiana.

Por supuesto, el diseño orgánico del Estado, lo que incluye los ministerios como parte fundamental del gobierno nacional se inscribe dentro de este marco constitucional, ya que la garantía de un derecho como la igualdad depende también de la estructura del Estado.

Los Programas de Gobierno constituyen un mecanismo de participación y regulación democrática<sup>1</sup> para que los votantes puedan exigir a la persona candidata que fue elegida el cumplimiento de sus propuestas en campaña. También, constituyen una herramienta de planeación y de gobierno porque contienen la ruta de realizaciones en el período de administración, son sus apuestas y sus metas.

En el capítulo introductorio del Programa de Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez 2022 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” se lee expresamente la voluntad política de generar condiciones de igualdad y equidad por medio de la garantía de derechos y con mecanismos democráticos que busquen la convergencia de los diferentes sectores de la sociedad<sup>2</sup>. Para lograr esto, en el mismo Programa de Gobierno se consignó el compromiso de crear el Ministerio de Igualdad y Equidad, la generación y articulación de políticas públicas y recursos para asegurar la eliminación de todo tipo de desigualdad en todas sus diversidades y la eliminación de todas las violencias contra las mujeres, la población LGBTQ+, la infancia, juventud y los adultos mayores. De igual forma, se consignó el compromiso de trabajar por la transversalización de las políticas de igualdad con enfoque interseccional en todo el accionar estatal bajo el liderazgo de un Sistema Nacional de Cuidado.

#### El Proyecto de Ley Presentado al Congreso de la República y su Trámite: Normativa Constitucional y Legal

El Ministerio de Igualdad y Equidad se creó como respuesta a una necesidad urgente de salir de una condición crónica de Colombia como uno de los países más desiguales del mundo. Colombia es un país de una enorme riqueza y potencial cultural, natural y social; a pesar de ello, tiene uno de los niveles de movilidad social más bajos en el mundo. Por esta razón, un gran desafío es lograr que la riqueza del país sea aprovechada por toda la población en las mismas condiciones. En ese sentido, es deber

---

<sup>1</sup> El cual se encuentra regulado partir del Art. 259 de la CP, Leyes 131 y 134 de 1994, Ley 741 de 2002 y sentencias C-1258/01, C-179/02, C-150/15 y la sentencia T-116/04 de la Corte Constitucional

<sup>2</sup> Programa de Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez 2022 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

del Estado proporcionar todos los elementos necesarios para eliminar las brechas de desigualdad e inequidad.

De acuerdo con los estudios y análisis del Banco Mundial<sup>3</sup> para el caso de Colombia en 2022, son tres las principales causas que dificultan que nuestra economía se caracterice por un crecimiento equitativo e inclusivo.

1. La violencia.
2. La inequidad, especialmente en el nivel de ingresos de los grupos poblacionales.
3. La calidad de las instituciones.

Esto, se refleja en las principales preocupaciones de los colombianos y colombianas que, de acuerdo con la encuesta de opinión en 2021 del Barómetro de las Américas<sup>4</sup>, son la violencia, la economía, la desigualdad, la corrupción, la salud y la educación. En cuanto a la desigualdad en Colombia esta ha sido persistente a lo largo de nuestra historia. Los ingresos y el escaso acceso a oportunidades han hecho que nos ubiquemos como uno de los países más desiguales en el mundo y el segundo en Latinoamérica.

Lo anterior, sumado a situaciones particulares que se han venido presentando en los últimos años, como la migración masiva de extranjeros, la agudización del cambio climático y la pandemia, han exacerbado la desigualdad y afectado gravemente el acceso a derechos de la población colombiana en los términos establecidos por la Constitución Política del país. Así, por ejemplo, la pandemia, al igual que en la mayor parte de países del mundo, representó para Colombia una caída en sus niveles de producción del 7%, lo que impactó el mercado laboral y la situación de pobreza en el país. De acuerdo con los datos proporcionados por el DANE y la medida del coeficiente de Gini, la desigualdad de ingresos en el total nacional en 2021 fue de 0,523 y en 2020 fue de 0,544, alcanzando su nivel más alto desde 2011.

En pocos países la brecha entre ricos y pobres es más amplia que en Colombia. En 2021, en el total nacional, la pobreza monetaria fue del 39.3% (equivalente a unos

---

<sup>3</sup> Banco Mundial (2022). Juntos Para Un Futuro Mejor, Actualización del Diagnóstico Sistemático de COLOMBIA. <https://www.bancomundial.org/es/country/colombia/publication/juntos-para-un-futuro-mejor-actualizacion-del-diagnostico-sistematico-de-colombia>

<sup>4</sup> Plata C., Juan Camilo, J. Daniel Montalvo, Juan Carlos Rodríguez Raga y Miguel García Sánchez. (2021). Cultura política de la democracia en Colombia y en las Américas 2021: Tomándole el pulso a la democracia. Nashville, TN: LAPOP. <https://www.vanderbilt.edu/lapop/colombia/ABCOL2021-Country-Report-Spanish-Final-220408.pdf>



20,3 millones de personas) y la pobreza monetaria extrema fue del 12,2%, (equivalente a unos 6,3 millones de personas), siendo La Guajira el departamento con mayor índice de pobreza monetaria con 67,4% y seguida por el Chocó con 63,4%.

Así mismo y en consideración de lo indicado por Banco Mundial<sup>5</sup> esto es el resultado de 3 factores: (i) la desigualdad de oportunidades en los niños y niñas, (ii) la escasa oportunidad de un empleo bien remunerado y (iii) el descuido histórico de políticas en las áreas rezagadas del territorio nacional y la falta de presencia estatal en algunas regiones o territorios del país.

Las amplias variaciones de pobreza y pobreza extrema entre los distintos departamentos del país evidencian diferencias significativas en términos de desigualdad. Para 2016, los departamentos menos desiguales (según el índice de Gini de ingresos) fueron Cundinamarca (0,428) y Atlántico (0,449) mientras que los más desiguales fueron Chocó (0,605) y La Guajira (0,552)<sup>6</sup>. Para poner en contexto estos resultados, si el Chocó y La Guajira fueran países (el primero sería casi tan extenso como República Dominicana y el segundo más extenso que El Salvador), ellos ocuparían el segundo y el cuarto lugar entre los países más desiguales del mundo, después de Suráfrica (Gini de ingresos de 0,62 en 2017<sup>7</sup>) y Namibia (0,589 en 2015<sup>8</sup>), respectivamente.

Estas diferencias entre departamentos y dentro de los departamentos sugiere la necesidad de analizar la desigualdad de manera compleja, con enfoques territoriales diferenciados y diferenciales.

### **El costo económico de la desigualdad**

La desigualdad en una sociedad crea un círculo vicioso que termina generando altos costos en las economías, según lo ha descrito Sánchez-Arcochea para las economías latinoamericanas<sup>9</sup>. El ciclo se puede describir comenzando por su efecto temprano en los individuos desde su educación. Los sistemas educativos se ven afectados por la

---

<sup>5</sup> Banco Mundial, Op. Cit. p. 14.

<sup>6</sup> Sánchez-Torres, R. M. (2017). Desigualdad del ingreso en Colombia: un estudio por departamentos. *Cuadernos de Economía*, 36(72), 139-178.

<sup>7</sup> OECD (2022), Income inequality (indicator). doi: 10.1787/459aa7fi-en (Accessed on 02 December 2022).

<sup>8</sup> UNDP 2019. Namibia National Human Development Report 2019. Disponible en: <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/na/National-Human-Development-Report-2019.pdf>

<sup>9</sup> Sánchez-Arcochea, D. 2022. El costo de la desigualdad. Editorial Ariel.

desigualdad. Las condiciones desiguales en la disponibilidad de cupos educativos de calidad resultan en que los más acomodados le aseguran a sus hijos educación de calidad privada y pierden el interés en invertir en un sistema educativo público de calidad. Los jóvenes de menores recursos reciben menos herramientas para expandir y desarrollar su potencial, quedando en desventaja para competir por oportunidades laborales y empresariales. Por ejemplo, a principios de siglo, los jóvenes de 21 años habían recibido 11 años de educación si pertenecían al 10% de mayores recursos y solo 6 años de educación si pertenecían al 30% de menores recursos<sup>10</sup>.

Las dificultades que tienen las personas de menores recursos para acceder a una educación de calidad redundan en la dificultad de estar en espacios de poder privado o público. De este modo, los escenarios de toma de decisiones tienden a ocuparse por personas ya cercanas a instancias de poder<sup>11</sup>. La concentración de poder genera muchas veces puertas giratorias que les permiten saltar entre los entes reguladores y los sectores regulados, lo que le dificulta al Estado desarrollar sistemas productivos eficientes y aumenta a su vez la misma desigualdad<sup>12</sup>.

Un ejemplo de las consecuencias de la desigualdad en acceso a oportunidades de formación es el bajo dinamismo de las economías latinoamericanas producido por una baja tasa de formalidad laboral. Las brechas entre los escasos empleos formales y la mayoría informal crean una carga pública en los sistemas subsidiados de salud y cuidado –costosos para el Estado–, lo cual termina reduciendo en un ciclo las inversiones que se puedan realizar para la formalización laboral.

El crecimiento económico se reduce por bajos incentivos para el emprendimiento. Cuando hay dificultades para la entrada de nuevos actores en los mercados, bajos niveles educativos y escasos empleos formales, son pocos los incentivos para crear empresas e invertir en el desarrollo a mediano y largo plazo de nuevos conocimientos. Ante las pocas oportunidades para la innovación, se presentan fugas de cerebros y de emprendimientos locales. Este escenario es particularmente preocupante ante el panorama actual de envejecimiento poblacional global, donde la fuerza laboral colombiana está siendo constantemente invitada a la inmigración a países desarrollados con déficits de trabajadores en algunos oficios.

---

<sup>10</sup> Wolf, C. & Moura, C. 2003. Education and training: The task ahead. En: Pedro-Pablo Kuczynski & John Williamson (eds). *After the Washington Consensus: Restarting growth and reform in Latin America*.

<sup>11</sup> Bértola, L., Williamson, J. (eds). 2017. *Has Latin American inequality changed direction?* Springer.

<sup>12</sup> Manish, G.P., O'Reilly C. 2019. Banking regulation, regulatory capture and inequality. *Public Choice* 180:145–164.

Por otro lado, la desigualdad se asocia con evasión fiscal y fugas de capitales. Es desigual el acceso de la población a análisis contables que permitan usar exenciones tributarias o a depositar excesos de capital en paraísos fiscales. De este modo, en la práctica, los sistemas tributarios tienden hacia la regresividad, especialmente al acercarse a tope de ingresos y patrimonios.

La desigualdad tiende a aumentar los déficits fiscales al resultar en menores ingresos tributarios, lo que resulta en crisis financieras recurrentes. Por ejemplo, se ha asociado el estancamiento salarial con los niveles desmedidos de endeudamiento de las clases medias que terminaron en la crisis financiera de 2008. En las crisis, las personas y empresas mejor preparadas para afrontarlas son las que ya cuentan con mayores capitales, exacerbando las desigualdades en un ciclo que se retroalimenta indefinidamente.

Estos análisis del costo de la desigualdad se han realizado para otros países del mundo. El mismo hecho que este tipo de análisis no esté disponible para nuestro país demuestra la necesidad de una cartera que esté atenta a promover este tipo de investigaciones. Es necesario conocer la magnitud de la relación costo beneficio que el país puede obtener al invertir en reducir los niveles de desigualdad en distintas dimensiones, como la económica, la política, el acceso a recursos y, en general, a las oportunidades que ofrece la nación.

### **La desigualdad mata**

Existe un gran cantidad de información que demuestra la relación entre las desigualdades socioeconómicas y raciales y mayores tasas de mortalidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, los estados con mayor desigualdad de ingresos presentan mayores tasas de mortalidad de maternas afrodescendientes<sup>13</sup>. La tasa de mortalidad (medida en muertes por cada 1000) aumenta dos puntos por cada punto porcentual de informalidad en países latinoamericanos; es decir, en Latinoamérica la informalidad laboral está asociada con el recorte en la expectativa de vida<sup>14</sup>. Usando los datos de 15126 pacientes de 54 países del mundo, se encontró que los pacientes de países con mayores desigualdades de ingresos (medidas como coeficiente de Gini a escala país) presentaron mayores tasas de falla cardíaca, incluso después de tener en cuenta los

---

<sup>13</sup> Vilda, D., Wallace, M., Dyer, L., Harville, E., Theall, K. 2019. Income inequality and racial disparities in pregnancy-related mortality in the US. *SSM - Population Health* 9:100477.

<sup>14</sup> Silva-Peñaherrera, M., López-Ruiz, M., Merino-Salazar, P., Gomez, A. R., Benavides, F. 2021. Association between informal employment and mortality rate by welfare regime in Latin America and the Caribbean: an ecological study. *BMJ Open* 2021;11:e044920.

efectos de otros factores socioeconómicos<sup>15</sup>. En Finlandia, las personas en condiciones socioeconómicas menos favorecidas fallecieron antes o en momentos más inesperados que las personas de mayores recursos<sup>16</sup>.

La reciente pandemia del COVID-19 reveló la estrecha relación entre desigualdad y riesgo de morir; en una revisión de 95 artículos científicos se encontraron mayores tasas de mortalidad por COVID-19 en comunidades empobrecidas, un resultado consistente entre países de cinco continentes<sup>17</sup>. Específicamente para el caso colombiano, el riesgo de morir por COVID-19 en Colombia fue mayor para personas viviendo en comunidades indígenas, en personas del régimen subsidiado y en personas de estatus socioeconómico bajo y muy bajo<sup>18</sup>.

### **Colombia merece una institucionalidad para la igualdad**

La Constitución Política consagra la facultad del Presidente de la República en cabeza del Gobierno nacional para presentar iniciativas legislativas (Art. 154 de la Constitución Política –CP–) que permitan la creación, función y re-estructuración de instancias al interior del Gobierno (Art. 189 de la CP). Estas iniciativas son gestionadas en su trámite legislativo por el Congreso de la República en virtud de su competencia legislativa (núm. 7 del Art. 150 de la CP).

Estos mandatos constitucionales fueron desarrollados por la Ley 489 de 1998<sup>19</sup>, en su Capítulo XI: Creación de Ministerios y demás Organismos y Entidades Administrativas: Corresponde a la ley, por iniciativa del Gobierno (Art. 49). **Contenido de los Actos de Creación.** La ley que cree un organismo o entidad administrativa debe determinar sus objetivos, su estructura orgánica, y el soporte presupuestal de conformidad con los lineamientos fiscales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **La estructura orgánica de un organismo o entidad administrativa comprende** (Art. 50) la denominación, la naturaleza jurídica y el

---

<sup>15</sup> Dewan P, Rørth R, Jhund P, et al. Income Inequality and Outcomes in Heart Failure. *J Am Coll Cardiol HF*. 2019 Apr, 7 (4) 336–346.

<sup>16</sup> Van Raalte, A., Sasson, I., Martikainen, P., 2018. The case for monitoring life-span inequality. *Science* 362: 1002–1004.

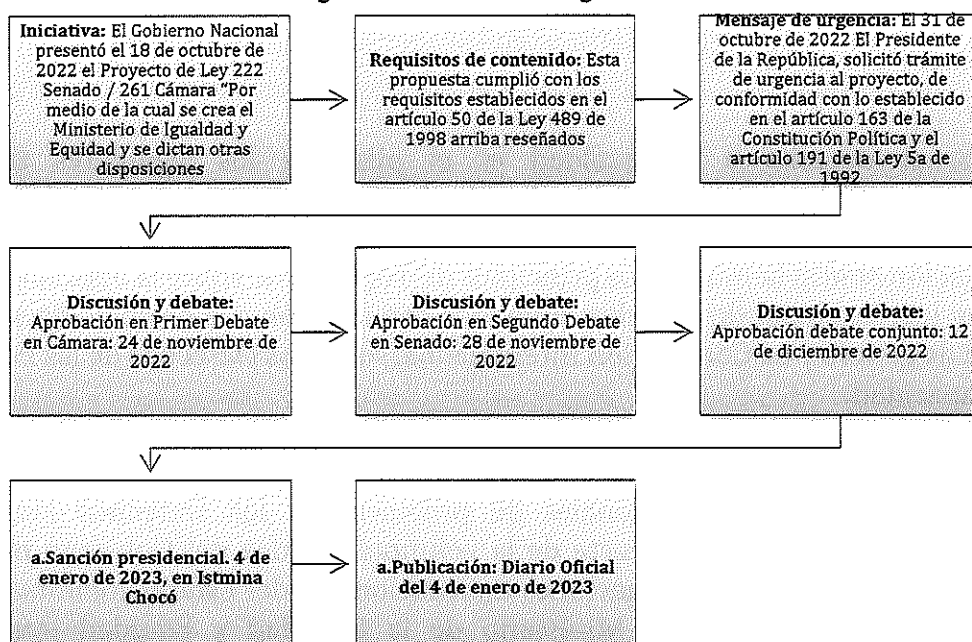
<sup>17</sup> McGowan, V.J., Bamba, C. 2022. COVID-19 mortality and deprivation: pandemic, syndemic, and endemic health inequalities. *Lancet Public Health* 2022 7:e966–75.

<sup>18</sup> Cifuentes MP, Rodríguez-Villamizar LA, Rojas-Botero ML, et al. *J Epidemiol Community Health* 2021;75:610–615.

<sup>19</sup> Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

consiguiente régimen jurídico, la sede, la integración de su patrimonio, el señalamiento de los órganos superiores de dirección y administración y la forma de integración y de designación de sus titulares, y el Ministerio o el Departamento Administrativo al cual estarán adscritos o vinculados, si se trata de entidades descentralizadas. Lo anterior, también se soporta en conceptos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP<sup>20</sup> y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional<sup>21</sup>.

**Figura 1. Trámite legislativo**



Fuente: elaboración propia.

Marco Jurisprudencial e Internacional: Marco de Normas Internacionales de Derechos Humanos

El mandato de especial protección se encuentra reforzado por el bloque de constitucionalidad (art. 93 de la CP). El derecho humano a la igualdad también está previsto en múltiples instrumentos internacionales que ha ratificado Colombia tales como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos<sup>22</sup>, la Carta de las Naciones

<sup>20</sup> Concepto del DAFP del 28 de octubre del 2020, Radicado No. 20206000531921.

<sup>21</sup> Sentencia C-047/2021, 4 de marzo de 2021.

<sup>22</sup> Artículo 1, 2, 4, 7, 13, 17, 21, 23 y 26

Unidas<sup>23</sup>, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales<sup>24</sup>.

La propuesta del Ministerio de Igualdad y Equidad llega en un momento oportuno y favorable a nivel internacional toda vez que fue declarado el Decenio Internacional de Afrodescendientes, se creó recientemente el Foro Permanente Afrodescendiente, y se han gestado múltiples avances en la lucha contra la violencia policial racista que han puesto el tema de la eliminación del racismo estructural como prioridad en las agendas internacionales.

Asimismo, el derecho a la igualdad es el pilar de los siguientes tratados internacionales: La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Los principios de Yogyakarta: sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual e identidad de género y La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La creación de un Ministerio para la concreción de este pilar que se encuentra en diversos instrumentos internacionales de protección a los Derechos Humanos, constituye una manifestación directa de la voluntad política del Gobierno nacional para el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano. En otras palabras, la creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad implica la materialización de las acciones que conducen al cumplimiento de las normas internacionales sobre Derechos Humanos y dota al Estado de instrumentos para la protección de diversos grupos poblacionales y territorios.

En este sentido, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, definió un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en virtud de los cuales se busca garantizar un marco de protección sobre los derechos humanos y el derecho al desarrollo de los grupos más marginados, orientado a cerrar brechas y eliminar desigualdades; por lo tanto, para avanzar en la agenda del desarrollo sostenible la participación efectiva de las poblaciones más excluidas es fundamental. De igual forma, la no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la protección de los derechos sin discriminación alguna, constituyen un principio básico y general relativo a los derechos humanos.

---

<sup>23</sup> Artículo 1, 2, 8 y 55

<sup>24</sup> Artículo 1, 2, 3, 8, 9, 12, 14, 17, 20, 23, 25, 26 y 27

Teniendo en cuenta que Colombia tiene un rezago crítico en el cumplimiento de los ODS 1, 5 y 10, según el Índice ODS 2021 para América Latina y el Caribe, el Ministerio de Igualdad y Equidad tendrá la misión de revertir dichos resultados. La asociación directa del Ministerio de la Igualdad y Equidad con los ODS se presentará en la sección de análisis del marco estratégico de este documento.

La igualdad como derecho en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos - DIDH exige al Estado colombiano garantizar que toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción sea reconocida como un igual ante la ley y que disfrute de todos sus derechos, sin discriminación por motivo de nacionalidad, raza o creencias. Por ello, en este marco, el derecho a la igualdad es un conjunto de obligaciones asociadas a la prohibición de la discriminación. No es suficiente que Colombia se abstenga de tratar a ciertos grupos de forma desfavorable, porque el país tiene el deber internacional de tomar medidas positivas para reparar la discriminación.

### La Constitución Política y la Jurisprudencia Constitucional Colombiana

La Constitución Política de 1991 ha integrado el mandato de igualdad en su preámbulo como uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho. Adicionalmente, según se consagra en su artículo 13, la igualdad tiene un triple rol como valor, principio y derecho fundamental (sentencia C-104 de 2016). Por esta razón, la Corte Constitucional ha reconocido en su jurisprudencia que el mandato de igualdad “presenta una estructura compleja que comprende diversas facetas” (Sentencias C-221 de 1992, C-040 de 1993, C-022 de 1996). En este orden de ideas, se pueden identificar las dimensiones de protección de derechos a lo largo de la Constitución Política, en la cual se aborda el principio y derecho a la igualdad en diversas esferas de lo público y lo privado en el Estado colombiano, tal como se muestra a continuación:

**Tabla 3. Dimensiones de la Protección de Derechos**

Dimensiones				
Identificación de los límites que tiene el legislador	Tratamiento	Necesidad de dar un trato especial a personas y grupos	Condensa un ámbito de protección en lo concerniente	La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
Es la identificación de los límites que tiene el legislador	Todos los ciudadanos merecen el mismo tratamiento	Necesidad de dar un trato especial a personas y grupos	Condensa un ámbito de protección en lo concerniente	La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se

Principios				
Principio Fundamental	Como principio	Como política	Como política económica y política	Como política social y política
<p>respecto de los derechos de las personas.</p> <p>Es una obligación constitucional impuesta a las ramas y órganos del poder público.</p>	<p>ante la ley</p> <p>Prohíbe cualquier tipo de discriminación o exclusión arbitraria en las decisiones públicas.</p>	<p>históricamente excluidos para superar la desigualdad que existe en la realidad.</p> <p>Ejecución de políticas públicas enfocadas en la distribución de bienes escasos y cargas públicas.</p>	<p>a las relaciones familiares basadas en la igualdad de derechos y respeto recíproco de sus integrantes (Art. 42 de la CP); en lo relativo a la igualdad de oportunidades para las y los trabajadores (Art. 53 de la CP); El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades (Art. 70 de la CP).</p>	<p>desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones (Art. 209 de la CP).</p>

Fuente: elaboración propia.

Determinación de los Sujetos de Especial Protección Constitucional



La Corte Constitucional, en las Sentencias T-068 de 2021, T-084 de 2018 y T-376 de 2012, ha mencionado la existencia de patrones históricos de discriminación que impiden a los sujetos de especial protección constitucional el pleno ejercicio de sus derechos. En algunos casos, son patrones culturales generados por la presión social ejercida ante las diferencias y su concepción de lo aceptable. Dentro de las personas y/o grupos que son considerados sujetos de especial protección constitucional, encontramos los listados en la Tabla 4.

**Tabla 4. Sujetos de Especial Protección Constitucional**

Grupos de sujetos de especial protección constitucional	Grupos de sujetos de especial protección constitucional	Grupos de sujetos de especial protección constitucional
En razón de la edad	Los niños, niñas y adolescentes, adulto mayor y tercera edad.	Sentencia T-468 de 2018, Sentencia C-177 de 2016
En virtud de alguna limitación física	Las personas con una discapacidad física o capacidades diferentes	Sentencia T-575 de 2017
En el grupo por sus condiciones psicológicas	las personas con alguna limitación mental o capacidades diferentes	Sentencia T-662 de 2017
En el grupo de las víctimas de violencia generalizada	Los desplazados, torturados, secuestrados, desaparecidos, refugiados, exiliados, líderes políticos y miembros de partidos políticos, periodistas y habitantes en zonas con problemas de orden público	Sentencias SU 599 de 2019 T-488 de 2017 T-025 de 2004
En el grupo de los sujetos tradicionalmente discriminados, por el sexo	Las mujeres, madres cabeza de familia, mujeres en estado de embarazo	Sentencia T-084 de 2018, Sentencia T-088 de 2008, Sentencia C-667 de 2006
Por grupo de etnia o raza	Indígenas, Gitanos o Room, Negritudes, Afrocolombianos, Raizales, Palenqueros	Sentencia T-235 de 2008, Sentencia C-359 de 2013, Sentencia T-414 de 2015, Sentencia T-680 de 2016, Sentencia SU-097 de 2017, Sentencia T-276 de 2022
Por el lenguaje	Minorías lingüísticas	Sentencia C-025 de 2021
Por orientación sexual	LGTBIQ+	Sentencia T-068 de 2021

Por la nacionalidad	Extranjeros, inmigrantes y migrantes colombianos	Pendiente
Por el estado de salud	Personas que padecen una enfermedad grave, incurable o ruinoso y las personas con discapacidad	Sentencia C-233 de 2021
Por la situación jurídica	Las personas privadas de la libertad; por la calidad de trabajador, según el tipo de empleo	Sentencia T-143 de 2017 y Auto 217 de 2018
En el grupo de los sujetos en condiciones de pobreza, inferioridad, subordinación, dependencia, marginalidad, territorio y precariedad económicos	Personas en condición de pobreza, personas con dependencia a las drogas, trabajadores, desempleados, campesinos, mendigos, habitantes de calle y los damnificados por asuntos ambientales	Sentencia T-167 de 2011, Sentencia C-077 de 2017, Sentencia C-062 de 2021, Sentencia T-696 de 2013

Fuente: elaboración propia.

#### Alcance Jurídico de la Ley 2281 de 2023

La iniciativa legislativa del Gobierno nacional fue respondida por el legislativo a través de la Ley 2281 de 2023, mediante la cual el Congreso de la República creó el Ministerio de Igualdad y Equidad como un organismo principal del sector central de la Rama Ejecutiva en el orden nacional y como entidad cabeza del sector administrativo de Igualdad y Equidad. El Congreso dotó a la entidad de objeto, estructura orgánica, funciones, ámbito de competencias, sede, domicilio y patrimonio.

##### ● *Objeto de la Ley (Art. 1)*

El objeto de la ley es crear el Ministerio de Igualdad y Equidad en el marco de la Constitución y la normativa vigente. Especialmente, teniendo en cuenta el artículo 50 de la Ley 489 de 1998, donde se establece que el acto de creación debe especificar sus objetivos y funciones y su estructura orgánica, los cuales se definieron como se indica a continuación.

- *Objeto del Ministerio (Art. 3)*

El Ministerio de Igualdad y Equidad tiene por objeto diseñar, formular, adoptar, dirigir, coordinar, articular, ejecutar fortalecer y evaluar las políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y medidas, enfocadas a:

1. Contribuir en la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales
2. Impulsar el goce del derecho a la igualdad
3. El cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad
4. Defender los sujetos de especial protección constitucional, de población vulnerable y de grupos históricamente discriminados o marginados

Lo anterior, vinculando y adoptando los enfoques de derechos, de género, diferencial, étnico-racial, interseccional y territorial.

- *Funciones (Art. 4)*

Las funciones del Ministerio de Igualdad y Equidad son las siguientes:

1. Formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y articular las políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y medidas para el cumplimiento del objeto del Ministerio y ámbito de competencias.
2. Adoptar y ejecutar planes, programas, estrategias y proyectos para definir, gestionar y focalizar acciones dirigidas a la eliminación de todas las violencias contra las mujeres así como la eliminación de barreras económicas, sociales y políticas o de discriminación contra ellas.
3. Formular, adoptar y ejecutar planes, programas, estrategias y proyectos para definir, gestionar y focalizar la oferta social de las entidades del Orden Nacional en el territorio, con criterios de eficiencia y eficacia, priorizando territorios y poblaciones históricamente excluidas.
4. Coordinar, articular e impartir directrices a las entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal sobre la intervención de grupos y poblaciones en el ámbito de sus competencias.
5. Promover herramientas de participación y organización ciudadana para fortalecer la incidencia de los grupos poblacionales, históricamente discriminados o marginados y sujetos de especial protección constitucional en las agendas de política pública, procesos de autogobierno y derechos étnicos territoriales de los pueblos étnicos, en coordinación con las demás entidades competentes.

6. Fomentar la innovación social a través de la identificación e implementación de iniciativas privadas y locales, entre otras, para poner en funcionamiento las políticas de igualdad y equidad bajo los enfoques de derechos, de género, diferencial, étnico racial e interseccional en el accionar estatal y promover condiciones de igualdad política, económica y social a todas las poblaciones vulnerables focalizadas.
7. Dirigir y orientar la planeación del Sector Administrativo de Igualdad y Equidad para el cumplimiento de las funciones a su cargo.
8. Gestionar y generar alianzas con actores del sector público, privado, organizaciones de la sociedad civil, autoridades y formas organizativas propias de los pueblos étnicos, organismos de carácter internacional y otros gobiernos que faciliten e impulsen las políticas y el logro de los objetivos del Sector Administrativo de Igualdad y Equidad y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado, en coordinación con las demás entidades estatales competentes. Asimismo, se gestionarán, en coordinación y articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, alianzas con organismos internacionales y otros gobiernos al tiempo de dar seguimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado.
9. Establecer esquemas de seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución de las políticas, planes, proyectos y oferta social de competencia del Sector de Igualdad y Equidad, en coordinación con otras entidades competentes, y rendir cuentas a la ciudadanía. Para este efecto, se promocionarán y adoptarán mecanismos participativos de control social
10. Dirigir, coordinar, hacer seguimiento y evaluar los sistemas e instancias de asesoría, coordinación y articulación relacionados con sus competencias creados o que se creen normativamente y que así lo indiquen.
11. Generar información periódica que permita visibilizar las características, contextos y condiciones de vida que impiden a las personas superar las condiciones de inequidad y desigualdad; plantear alternativas para la elaboración de políticas públicas que garanticen el cierre de brechas, el avance en la superación de la desigualdad y la inclusión y visibilización de las acciones por la igualdad y equidad en las agendas públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal.
12. Dirigir, coordinar, orientar, hacer seguimiento y evaluar el Sistema Nacional de Cuidado. Así como formular, implementar y evaluar políticas relacionados con ayudas, generación de ingresos, capacitación y formación, y demás acciones que permitan retribuir las labores de cuidado que desempeña la población cuidadora.
13. Formular, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar planes, programas, estrategias y proyectos que promuevan condiciones de igualdad real para las personas y comunidades especialmente afectadas por la crisis climática, de conformidad

con los compromisos adquiridos por Colombia en materia de adaptación al cambio climático.

14. Adoptar, coordinar y ejecutar en articulación con las demás entidades y organismos del Estado competentes, un programa de seguridad alimentaria que permita combatir el hambre y la malnutrición en los territorios y poblaciones del ámbito de sus competencias.
15. Crear, fomentar, promover y formular estrategias y políticas en conjunción con las entidades públicas idóneas para estimular cambios culturales y educativos profundos en búsqueda de la reducción y eliminación de la discriminación en la sociedad a corto, mediano y largo plazo, teniendo como objetivo la aceptación y reconocimiento de la pluralidad, diversidad y multiculturalidad del Estado Colombiano.
16. Formular, coordinar y articular políticas, planes, programas y proyectos orientados a reducir las brechas de desigualdad existentes entre zonas urbanas y rurales.
17. Implementar un sistema de indicadores que permita evaluar los impactos de las políticas, planes, programas, proyectos y estrategias que se implementen hacia los territorios priorizados, hacia las poblaciones históricamente excluidas y que tengan un enfoque de derechos, de género, diferencial e interseccional.
18. Las demás que le asigne la Ley.

- *Estructura Orgánica*

Anteriormente se incluyeron los temas, que según el artículo 50 de la Ley 489 de 1998, debe contener la estructura orgánica de las entidades, aspectos que debe contemplar su acto de creación y que son considerados en el articulado de la Ley 2281 de 2023, como se indica a continuación:

- ***La denominación, naturaleza y régimen jurídico del Ministerio:*** “Créase el Ministerio de Igualdad y Equidad, como un organismo principal del sector central de la Rama Ejecutiva en el orden nacional, rector del Sector administrativo de Igualdad y Equidad y de sus entidades adscritas o vinculadas, los órganos de asesoría, coordinación y articulación señalados legal o reglamentariamente” (artículo 2 - Naturaleza y Denominación).
- ***La sede y el domicilio:*** “El Ministerio de Igualdad y Equidad tendrá como sede y domicilio la ciudad de Bogotá. D.C., ejercerá sus funciones a nivel nacional y contará con Direcciones departamentales a través de las cuales se adaptarán e implementarán las políticas del Sector en el territorio nacional, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley” (artículo 7 - Sede y Domicilio).

- **La composición del patrimonio:** “El patrimonio del Ministerio de Igualdad y Equidad estará conformado por:
  1. Las sumas que se apropien en el Presupuesto General de la Nación
  2. Los bienes muebles e inmuebles que adquiriera a cualquier título
  3. Las sumas y los bienes muebles e inmuebles que le sean donados o cedidos por entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales” (artículo 8 – Patrimonio).
- **Los órganos superiores de dirección y administración:** se encuentran establecidos en el artículo 10 (Dirección del Ministerio) y en el artículo 11 (Estructura Interna) de la Ley 2281 de 2023.
- **Población Objetivo (Art. 5)**

Para desarrollar su objeto, el Ministerio de Igualdad y Equidad debe proteger los derechos de los sujetos de especial protección constitucional, teniendo en cuenta especialmente los territorios excluidos y marginados del país. Por ello, en la ley se identificaron catorce (14) poblaciones vulnerables, que son las que se detalla en la siguiente ilustración: .

**Figura 2. Población Objetivo del Ministerio de Igualdad y Equidad**

## Ministerio de Igualdad y Equidad

Alcance Jurídico Ley 2281 de 2023



### ¿Con qué enfoques?

- Territorial      ▸ Diferencial      ▸ Intersectorial
- De Derechos   ▸ Étnico-racial   ▸ De Género



### ¿Para quiénes trabajará?

Para desarrollar su objeto, el Ministerio debe proteger los derechos de los sujetos de especial protección constitucional:



Mujeres en todas sus diversidades



Jóvenes



Familias



Población LGBTQ+



Habitantes de calle



Pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palanqueros, indígenas y Room



Mujeres cabeza de familia



Campesinas y campesinos



Adultos Mayores



Miembros de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema



Niñez



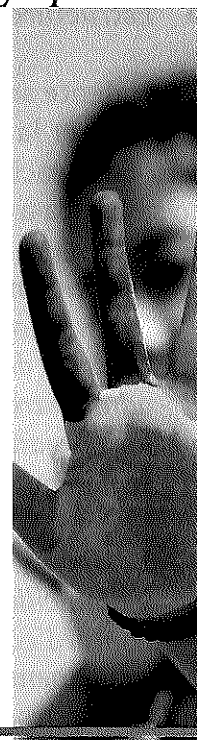
Personas con discapacidad



Población en territorios excluidos



Población migrante regular, irregular, refugiado, en tránsito y retornado



**Fuente:** Elaboración propia con base en lo dispuesto por la Ley 2281 de 2023

- *Creación del Sistema Nacional de Cuidado (Art. 6)*

El Sistema Nacional de Cuidado busca articular servicios, regulaciones, políticas y acciones técnicas e institucionales existentes y nuevas para responder a las demandas de cuidado de los hogares de manera corresponsable entre la Nación, el sector privado, y la sociedad civil. Con este Sistema se busca promover una nueva organización social de los cuidados del país y garantizar los derechos humanos de las personas cuidadoras. Así, se busca reconocer, reducir, redistribuir, representar y recompensar el trabajo de cuidado, remunerado y no remunerado, a través de un modelo corresponsable entre la Nación, las entidades territoriales, el sector privado, y la sociedad civil.

- *Sector Administrativo de Igualdad y Equidad (Art. 9) y Facultades Extraordinarias del Presidente de la República (Art. 12)*

El Sector estará integrado por el Ministerio y las entidades que adscriba o vincule la ley. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 489 de 1998, y que desarrolla el Concepto 486261 de 2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública, al explicar que un Sector Administrativo está integrado por el Ministerio o Departamento Administrativo, las superintendencias y demás entidades que la ley o el Gobierno nacional definan como adscritas o vinculadas, según corresponda la competencia de cada área.

Por otro lado, teniendo en cuenta el mandato constitucional del numeral 10 del artículo 150, en el artículo 12 de la Ley 2281, el Congreso otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República para integrar el Sector Igualdad y Equidad, con las entidades que decida adscribir o vincular. Las facultades fueron otorgadas por el término de 6 meses, contados a partir de la fecha de publicación de la ley, esto es hasta el 3 de julio de 2023.

De otra parte, el artículo 14 de la misma Ley creó una Comisión en el Congreso de la República (integrada por 5 Senadores y 9 Representantes), encargada de hacer seguimiento permanente a las facultades conferidas al Presidente de la República. Esta comisión y sus miembros serán quienes reciban los informes del Gobierno y los presenten al Congreso.

Es importante destacar que el párrafo transitorio del artículo 9 de la Ley 2281 establece que el proceso de integración del Sector debe salvaguardar la memoria institucional y las buenas prácticas de las distintas entidades que lo integrarán. Esto significa que la integración institucional de los sectores está orientada a la optimización de acciones que se venían desarrollando a cargo de entidades de

diferentes sectores y este objetivo exige que se preserven acciones que tuvieron un impacto positivo y se ajusten o adecúen aquellas que dejaron lecciones aprendidas. En otras palabras, la ley no desconoce el esfuerzo institucional del Estado e impulsa las buenas prácticas para la mejora del trabajo operativo y la respuesta institucional de las entidades de Gobierno.

- *Orden de precedencia (Art. 15)*

Finalmente, el artículo 15 de la Ley 2281 de 2023 modifica el artículo 17 de la Ley 1444 de 2011, modificado por el artículo 20 de la Ley 2162 de 2021, el cual incorpora el Ministerio de Igualdad y Equidad en la posición decimonovena (19) en la lista de denominación, orden y precedencia de los Ministerios.

- *Estructura Interna (Art. 11)*

Mediante la Ley 2281 de 2023 el legislador modificó la Estructura de la Administración Nacional al crear el Ministerio de Igualdad y Equidad y en la misma norma adoptó su Estructura Orgánica, pero también se refirió de manera inicial a su Estructura Interna en el artículo 11, con las dependencias de dirección, asesoría, coordinación, gestión y apoyo, las cuales deben ser armónicas con los procesos de planeación y gestión, como la ley indicó y se muestra a continuación:

1. Despacho de la Ministra o el Ministro.
  - 1.1. Oficina de Control interno.
  - 1.2. Oficina Asesora de Planeación.
  - 1.3. Oficina Asesora Jurídica.
  - 1.4. Oficina Asesora de Comunicaciones.
  - 1.5. Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario.
  - 1.6. Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información.
  - 1.7. Direcciones Departamentales
2. Despacho de la Viceministra o el Viceministro.
3. Despacho de la Viceministra o el Viceministro.
4. Despacho de la Viceministra o el Viceministro.
  - Direcciones misionales.
5. Secretaría General.
  - 5.1. Subdirección de Talento Humano.
  - 5.2. Subdirección Administrativa y Financiera.
  - 5.3. Subdirección de Contratación.
6. Órganos de Asesoría y Coordinación.
  - Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
  - Comité de Control Interno.



- Comisión de Personal.

Es importante señalar que la estructura definitiva del Ministerio debe responder a las necesidades de diseñar, formular, adoptar, dirigir, coordinar, articular, ejecutar y evaluar las políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y medidas para contribuir en la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales en el país.

- *Derechos laborales y Mínimo impacto fiscal (Art. 13)*

La Ley estableció que el Gobierno nacional deberá garantizar los derechos de las y los servidores públicos, especialmente, los de aquellos que se encuentren en la carrera administrativa. Adicionalmente, deberá garantizar la paridad de género y la inclusión de personas con discapacidad, todo esto, en el marco de la austeridad presupuestal. Por ello, los estudios que se generen sobre el funcionamiento de la entidad deberán garantizar el mínimo impacto fiscal.

- *Integración de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional – CISAN (Art. 16)*

La Ley 2281 de 2023 modificó el artículo 16 de la Ley 1355 de 2009, el cual establece los miembros que integran la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional – CISAN, vinculando la participación del Ministerio de Igualdad y Equidad. Adicionalmente, estableció que dicha comisión será presidida de manera rotativa por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Salud y Protección Social para periodos de 2 años. Finalmente, se reiteró que en aras de cumplir con los objetivos y funciones de la CISAN, se puede invitar a funcionarios representantes de las entidades, expertos y académicos cuyo aporte se considere de utilidad.

### **1.1.3 Análisis de Casos de Éxito**

Lograr la igualdad y equidad de los pueblos es una tarea que pasa por la comprensión, el reconocimiento y el abordaje de los factores que generan pobreza y desigualdades en los distintos territorios. En esta sección, se presentan sólo dos casos de países que por haber demostrado un avance significativo y sostenible en la reducción de la pobreza de sus ciudadanos y por haber generado estrategias para su integración institucional, diseñado políticas sociales o haber introducido cambios normativos para disminuir las desigualdades de sus habitantes han sido catalogados como casos exitosos. Sin embargo, adjuntamos un documento anexo con una lista de países que

tienen institucionalidad que se asemeja a la del Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia.

El primer caso focal es Uruguay, país al que se reconoce su esfuerzo sostenido e innovador en materia de diseño de políticas públicas incluyentes y se destaca la creación del Ministerio de Desarrollo Social como organizador de políticas públicas centradas en atender las disparidades existentes en materia de género, étnico – raciales y territoriales.

El segundo caso es Chile, que tiene una larga historia en materia de políticas públicas sociales y protección social. Es el primer país latinoamericano con el mayor índice de desarrollo humano y posee un marco jurídico orientado a proteger la inclusión y equidad de sus poblaciones.

#### Caso 1. Uruguay

Uruguay es un país con una institucionalidad similar a la relacionada con el nuevo Sector Administrativo de Igualdad y Equidad y con el Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia. La experiencia uruguaya muestra la sólida matriz de políticas públicas que pone en el centro de su accionar a la inclusión social, principalmente a través de reformas para poblaciones trans, personas con discapacidad y afrodescendientes, acompañado de un alto gasto social público.

De acuerdo con el Banco Mundial, en lo que va transcurrido de las dos últimas décadas, Uruguay redujo la pobreza en tres cuartos de manera constante, logrando disminuirla en 24 puntos (de 32,5% a 7,95%) entre 2006 y 2017. Los salarios mínimos se duplicaron en términos reales entre el 2006 y el 2017, mientras que el índice de salarios reales aumentó cerca del 50%. De igual forma, el desempleo, la informalidad y el subempleo<sup>25</sup> también experimentaron bajas durante este período, dicho país tuvo mejoras en educación y logró expedir normatividad para proteger y visibilizar grupos históricamente discriminados. En materia de servicios básicos, Uruguay logró la ampliación del acceso a agua corriente, electricidad y saneamiento, abarcando casi al 100% de la población.

En relación con el contexto, Uruguay se destaca por tener una clase media sólida, contar con ausencia de pobreza extrema y acceso universal a los servicios básicos. En tal sentido, dicho país ha logrado combinar el crecimiento económico sostenido con

---

<sup>25</sup> El subempleo es la situación de las personas ocupadas, residentes en todo el territorio nacional, de 15 años y más que, trabajando menos de 40 horas por semana, manifiestan el deseo de trabajar más horas y están disponibles para hacerlo, pero no encuentran horas disponibles en el mercado. En Tasa de subempleo. Total país | Ministerio de Desarrollo Social ([www.gub.uy](http://www.gub.uy))

la implementación de políticas redistributivas que lo han llevado a ser reconocido como el más igualitario de América Latina.

La experiencia uruguaya pone de manifiesto el hecho de comprender que el avance en procesos de inclusión pasa por varios momentos en la construcción de políticas públicas, que van acompañados de cambios en su arquitectura institucional, de tender redes de protección y de crear estrategias que buscan lograr la integralidad.

Un primer momento de esta experiencia puede ser ubicado hacia la mitad del Siglo XX, donde se dio un proceso de desarrollo de políticas novedosas, centradas en la mejora de acceso a servicios y las redes de seguridad, aprobando una legislación laboral de largo alcance, que universalizó el acceso a la educación primaria, extendió la cobertura en educación secundaria y la salud, modernizó la infraestructura, despenalizó las relaciones entre personas del mismo sexo, legalizó el divorcio y formuló políticas contra el desempleo.

Un segundo momento de la experiencia se da hacia el año 2002, con la creación de un marco institucional para atender riesgos sociales y hacer frente a la crisis financiera que ese año había elevado la tasa de pobreza del país a un 40%; este marco también dio origen al Ministerio de Desarrollo Social, que entró en funcionamiento en el año 2005, dando paso al crecimiento del gasto social para programas sociales universales que mejoraran el acceso a servicios y seguridad en beneficio de los más vulnerables. Este momento estuvo focalizado en los hogares que presentaban una mayor vulneración, tomando como parámetro aquellos que se encontraban en pobreza extrema.

La estructura que actualmente tiene el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, es la siguiente:

- Ministro de Desarrollo Social.
- Subsecretaría.
- Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad.
- Dirección General de Secretaría.
- Dirección Nacional de Desarrollo Social.
- Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos.
- Dirección Nacional de Protección Social.
- Dirección Nacional de Gestión Territorial.
- Instituto Nacional de la Juventud.
- Instituto Nacional de Alimentación.
- Instituto Nacional de las Mujeres.
- Instituto Nacional de Personas Mayores.

El Ministerio de Desarrollo Social actualmente lidera los siguientes temas: integración laboral, población vulnerable, derechos humanos y cultura, juventud, género, personas mayores, egresados del sistema penitenciario, sistema de cuidados, discapacidad, primera infancia, alimentación y nutrición, evaluación y monitoreo, y medición en el territorio.

Con posterioridad al año 2002 se dio origen a una nueva generación de programas, basados en el concepto de acompañamiento (abordaje integral de apoyo dirigido a los hogares más vulnerables). Estos programas, fungían como redes de seguridad social, organizados alrededor de un Plan que buscó la Equidad, denominado “Plan de Equidad 2008”<sup>26</sup>, creando lo que se llamó “Matriz de Protección Social”, una herramienta que fue más allá de atender la pobreza en términos de ingresos y dio inicio a la formulación de políticas públicas centradas en atender las disparidades existentes en materia de género, étnico – raciales y territoriales.

La Matriz de Protección Social constituye un esfuerzo por articular programas y entidades, que abordó los siguientes frentes:

- Diseño de estrategias transversales (incluye políticas de vivienda, salud, laborales, educación y tributarias) para hacer frente a disparidades.
- Generación de igualdad de oportunidades y mejoramiento de la dignidad de los grupos excluidos, mediante la articulación de políticas universales con programas que corregían las coberturas deficientes.
- Favorecimiento de la descentralización y participación departamental y municipal.
- Generación de un marco normativo incluyente.

En materia de población que presenta algún tipo de discapacidad, se destacan varias acciones, dentro de las cuales se puede resaltar la creación, en el año 2010, de la ley que protege a dicha población, donde se creó la Comisión Nacional Honoraria de Discapacidad y la ley para el establecimiento de cuotas de contratación por parte del sector privado, en el marco de la cual se destacan las siguientes acciones: i) establecimiento de una cuota de empleo de población en discapacidad del 4% en el sector público, ii) autorización al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social para proponer incentivos y beneficios para que las entidades para-estatales y el sector privado contrate a personas con discapacidad, y iii) la especificación de la obligación

---

<sup>26</sup> Tomado de Banco Mundial. 2020. Inclusión Social en Uruguay. Washington, DC: Banco Mundial. Licencia: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGOs (Pags 61 y 62).

del Estado en cuanto a las acciones adicionales relativas a programas educativos, empleo y formación profesional.

También, vale la pena resaltar la Ley 19.159 del año 2013 para apoyar la inserción de personas con discapacidad al mercado laboral, mediante capacitación en habilidades laborales ofrecidos en talleres de producción protegida, liderados por organizaciones sin fines de lucro. De manera similar, se expidieron leyes para personas afrodescendientes, así como para personas trans y se ha venido dando una mayor visibilidad a la agenda de inclusión étnico- racial en los debates públicos.

Dentro de los factores de éxito de la experiencia uruguaya, cabe destacar los siguientes:

- El gasto social altamente progresista ha sido el elemento destacado que le ha permitido a Uruguay sostener su desempeño durante las últimas décadas. El gasto social realizado por Uruguay fue determinante para alcanzar su éxito entre 2005 y 2012, puesto que aumentó en un 87%, mientras que para el año 2020 representaba el 21,5% del PIB.
- La continuidad de políticas con enfoques a largo plazo. De hecho, Uruguay tiene establecido como meta para el año 2050, mapear escenarios potenciales y estrategias de desarrollo, donde se identifiquen oportunidades y riesgos, diseñando un plan integral para atender: i) cambios demográficos, ii) transformaciones laborales, iii) disparidades persistentes en relaciones de género, y iv) desarrollo territorial desigual.
- La creación y uso de la Matriz de Protección Social, que contiene estrategias combinadas para abordar tanto la pobreza crónica como para enfrentar sesgos y actitudes discriminatorias y/o barreras estructurales que limitan el acceso a los servicios por parte de una minoría excluida.
- La combinación del uso de cuotas (asignaciones familiares y programas de alimentación), con generación de políticas de inclusión espacial para el acceso a servicios básicos, programas tendientes al fortalecimiento de capacidades y la creación de un marco normativo para lograr la igualdad, han sido claves en los esfuerzos por disponer de políticas sociales universales, inclusivas, y con derechos para todos.
- Así mismo, se ha encontrado que la participación ciudadana constituye un aspecto clave para garantizar el éxito a la hora de priorizar los desafíos que

enfrentan las comunidades, identificando intervenciones y asegurando la sostenibilidad de los programas de inclusión social.

## Caso 2. Chile

Chile ha logrado conjugar el crecimiento económico con el desarrollo humano, lo cual se ha visto reflejado en aspectos como la ampliación de servicios básicos y la disminución de pobreza. La pobreza en Chile disminuyó en los últimos años y el país hoy se ubica como uno de los países con menor pobreza de la región. La pobreza por ingresos alcanzaba al 29% de las personas en 2006, mientras que en 2017 cayó a poco menos del 9%, según los datos de la encuesta oficial del Ministerio de Desarrollo Social de Chile<sup>27</sup>.

En materia de políticas públicas sociales, estas se caracterizan por los siguientes períodos institucionales que influyeron sobre el tipo de Estado en Chile<sup>28</sup>:

- Desde el siglo XIX y hasta los años 40s del Siglo XX el país fue un Estado proteccionista, durante este periodo las políticas, programas y las entidades encargadas de su formulación e implementación se enfocaron en proveer seguridad social y atender las necesidades de la población más desfavorecida en materia de salud y educación.
- Entre los años 40s del Siglo XX y hasta 1973 se apostó por el bienestar y en materia de políticas se emplearon los subsidios y se hizo énfasis en el empleo, buscando una cobertura universal de servicios básicos. No obstante, la pobreza no fue abordada desde las políticas formuladas durante este período.
- Durante 1973 y hasta 1989, Chile se caracterizó por políticas generales de corte neoliberal, en las que los programas sociales se vieron relegados por la búsqueda de crecimiento y productividad económica, disminuyendo el gasto social. Se adelantaron estrategias de focalización para la asignación de subsidios y transferencias monetarias, se privatizaron servicios sociales dirigidos a las clases más favorecidas. Igualmente, se centraron las acciones en

---

<sup>27</sup> Tomado de:

<https://www.bing.com/search?pglt=2081&q=comportamiento+de+la+pobreza+en+chile+en+la+ultima+decada&cvid=70e2a3d53c9641809f799cb7d06b2dd3&ags=edge>.

<sup>28</sup> Los periodos fueron tomados con base en los siguientes documentos: Gobierno de Chile – Ministerio de Planificación (n.d.). Políticas Sociales y los Objetivos del Milenio. Rovira, R. (2016). La pobreza en Chile y su superación como problema de Estado: Un análisis de los discursos presidenciales de la concertación. Palma, J. y Urzúa, R. (2005). Políticas contra la pobreza y ciudadanía social: el caso de “Chile Solidario”.

la erradicación de la pobreza extrema y en asegurar el acceso a servicios y bienes mínimos.

- En los años 1990s y hasta el 2010 se desarrollaron políticas bajo una visión de Estado integrador, que buscó balancear las políticas económicas y las sociales, con un consecuente aumento del gasto social. Con la terminación de la dictadura militar en el año 1990, las políticas se concentraron inicialmente en reducir la pobreza y atender factores que ocasionaban la vulnerabilidad de la población de menores recursos, empleando como instrumento para su medición una matriz de riesgo social, para definir cuál era el riesgo principal al que se enfrentaban las familias de extrema pobreza, las condiciones mínimas para evitarla y los factores protectores que permiten asegurar dichas condiciones por medio del desarrollo de capacidades definidas como fundamentales<sup>29</sup>.

Como efecto de las medidas señaladas anteriormente se encuentra que la población pobre disminuyó de un 25,7% en 1990 al 17,5% en 1996 y al 14,9% en el año 2000, mientras que la población en pobreza extrema disminuyó de un 12,9% en 1990 al 5,7% en 1996. Sin embargo, entre 1998 y 2000 el porcentaje de población indigente se estabilizó.

- Hacia mediados de la primera década del Siglo XXI se transitó hacia un enfoque de derechos con énfasis en la eficiencia y focalización del gasto. Las políticas redistributivas que se implementaron y la asignación de subsidios se dieron de manera diferencial, lo que permitió una disminución en la tasa de pobreza y la cobertura de necesidades básicas de la población más vulnerable. Este proceso estuvo acompañado de la creación de nuevas entidades gubernamentales con el apoyo de organizaciones civiles. Hubo una complementariedad de acciones y propuestas entre el Ministerio de Hacienda y los responsables de diseño de política pública para generar un sistema de protección social dirigido a familias en situación de pobreza extrema o indigencia, que tomó a la familia como centro de su accionar bajo el entendido de que la pobreza es un problema multidimensional que no pasa solamente por la falta de recursos monetarios.

La intervención tuvo en cuenta cuatro componentes, a saber: apoyo psicosocial, bono de protección a la familia, subsidio monetario garantizado y acceso preferente a programas de promoción social, prestaciones laborales y de previsión. En este modelo, la coordinación del programa opera a nivel local, la

---

<sup>29</sup> Serrano y Raczynski 2004 en Rovira, R. (2016).

articulación de servicios públicos a nivel provincial y regional con carácter subsidiario y a disposición de las redes locales.

De acuerdo con lo anterior, se generó un tránsito del asistencialismo a la inversión social intersectorial y participativa, buscando a la par el desarrollo de capital humano, no solo en términos productivos o de desarrollo de capacidades sino también en su desarrollo emocional y experiencias vitales. Según Rovira (2016), se articuló un cambio en la definición de las problemáticas sociales, pasando de un enfoque que focalizaba los programas sociales según indicadores de carencia de recursos materiales, diferenciados según la condición de no pobre, pobre y extremo pobre (ámbito predominante por más de 15 años), a otro que focaliza las acciones desde un marco de diferenciación entre vulnerables y no vulnerables.

Este tránsito estuvo acompañado de un marco normativo (inclusión de personas con discapacidad, ley de inclusión laboral, género e inclusión social y medidas contra la discriminación) para mejorar la calidad de vida de los grupos prioritarios que atiende la política social, generando programas multisectoriales integrados. Las poblaciones que se atendieron fueron: infancia, jóvenes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, mujeres jefas de hogar, adultos mayores, y familias en extrema pobreza. Desde el año 2010 se observa un esfuerzo por generar recursos de manera sostenida y creciente para financiar el gasto social.

- En el año 2022, el Banco Mundial dio la recomendación a Chile de fortalecer el rol del sector privado en la vía de una sociedad más inclusiva, que incluye también el tránsito hacia una economía verde que privilegia la inversión en innovación productiva y la formación de capacidades, impulsando el desarrollo a través del impulso al hidrógeno verde, a la economía digital y a la agricultura climáticamente inteligente<sup>30</sup>.

Dentro de los factores de éxito de la experiencia chilena cabe destacar los siguientes:

- El uso del ciclo de políticas sociales, dando paso a ajustes y nuevas intervenciones para transitar de una visión de pobreza, a la de pobreza multidimensional y a la desigualdad, introduciendo bases conceptuales e instrumentos para su medición e intervención.

---

<sup>30</sup> Fuente: Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y David Tinel en: Chile, fortalecer al sector privado es clave para lograr una sociedad más inclusiva y productiva: informe del Grupo Banco Mundial. Comunicado de Prensa Junio 24, 2022.



- El trabajo articulado entre diferentes ministerios y equipos técnicos para el seguimiento, evaluación y formulación de políticas públicas.
- La participación de la sociedad civil y organismos internacionales en los procesos técnicos para la formulación de políticas sociales.

En relación con las experiencias internacionales analizadas en esta sección, se identifican las siguientes lecciones aprendidas que derivan en recomendaciones para el caso colombiano:

- Es necesario adelantar diagnósticos que incluyan la revisión, diseño y uso de instrumentos que permitan la recolección de información para la formulación de políticas públicas.
- El camino para lograr la inclusión e igualdad de las poblaciones más empobrecidas y excluidas requiere de una condición imprescindible y es la planeación estratégica que permita generar políticas de largo plazo, bajo la interacción y articulación entre entidades al interior del aparato administrativo del Estado y de éste con la sociedad civil, pasando por una activa participación de la ciudadanía que se encuentre informada sobre el ciclo de políticas públicas y el involucramiento de los territorios.
- Asegurar una inversión social constante y creciente, que sostenga los esfuerzos de las políticas públicas sociales a largo plazo. Para ello, es deseable promover reformas económicas y fiscales que brinden un marco institucional para fortalecer el gasto social así como la inversión social a mediano y largo plazo.

Las experiencias tanto de Uruguay como de Chile muestran un proceso evolutivo en el diseño de políticas públicas, que pasan por momentos iniciales de acciones asistencialistas (transferencias condicionadas, subsidios, bonos, etc) que permiten hacer frente a factores asociados con la pobreza. Dichas acciones de corte asistencial deben, en una visión progresista y flexible, integrarse a iniciativas de política pública social más amplias que incluyan elementos tanto conceptuales como de modelos de intervención que puedan hacer frente a las transformaciones y retos que se presentan como el cambio climático, los cambios demográficos, económicos, entre otros.

#### **1.1.4 Análisis de Fuentes Externas**

Desde hace casi 10 años, en un ejercicio académico liderado por la Universidad de los Andes sobre equidad e inclusión social, y luego de un proceso de identificación de

necesidades, de un diagnóstico y de un listado de lecciones aprendidas, se hizo una serie de propuestas que incluyeron la creación de una institucionalidad para el monitoreo y promoción de la equidad y la diversidad social, la cual propusieron como una “Superintendencia de Seguimiento a la Equidad y la Diversidad (SUPERSED)”<sup>31</sup>. La propuesta de una SUPERSED tenía como objetivos la generación de conocimiento, la divulgación sobre las brechas de igualdad y discriminación, un monitoreo preventivo de la discriminación, la capacidad de sancionar casos de discriminación y el diseño de programas de inclusión.

Sobre el primer objetivo, inspirados en la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y en el Servicio Nacional del Consumidor de Chile, se propuso contar con un equipo técnico para la recoger datos e investigar rigurosamente “el desempeño de los diferentes sectores de la sociedad frente al respeto por la igualdad y la diversidad”.

En esta propuesta se propuso recoger experiencias de institucionalidad vigente a la fecha en varios sectores, como la “Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura, la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rrom y la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, y programas presidenciales como la Alta Consejería para la Mujer”. Para los autores, dentro de la institucionalidad presente podría existir parte de la planta y el conocimiento técnico necesarios para la nueva Superintendencia.

La Superintendencia de Equidad y Diversidad podría generar información para promover o sancionar actores según su accionar en lo referente a la inclusión y el cierre de brechas de desigualdad o a la discriminación o aumento de estas brechas. Sin embargo, otra institucionalidad se requeriría para orientar las políticas de igualdad y equidad para las poblaciones que requieren especial protección constitucional por sus exclusión y discriminación históricas. Así mismo, se requeriría una institucionalidad distinta, más operativa, para ejecutar planes, programas y proyectos que puedan cerrar directamente brechas de desigualdad e inequidad para los grupos poblacionales vulnerados y constitucionalmente protegidos de manera especial.

## 1.2 ANÁLISIS DE CONTEXTO INTERNO

Dado que el Ministerio de Igualdad y Equidad y su respectivo sector no se han puesto en marcha, no existe un ciclo de gestión asociado a su misionalidad y a su naturaleza

---

<sup>31</sup> Cárdenas, J. C., Ñopo, H., Castañeda, J. L. 2014. Capítulo 8. Equidad en la diferencia: políticas para la movilidad social de grupos de identidad. En: Montenegro, A., Meléndez, M. (eds). Equidad y Movilidad Social. Universidad de los Andes, Facultad de Economía. Departamento Nacional de Planeación.

jurídica, expresable en términos de la cadena de resultados de los productos o servicios que entrega, y los efectos e impactos que se generan por esa intervención constante. No obstante lo anterior, en esta sección se presenta un análisis de cadena de valor público alrededor de la organización y funcionamiento existente de los sectores administrativos de la Rama Ejecutiva del poder público en el orden nacional.

Sin embargo, entidades del nivel nacional como el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social han contribuido de manera significativa para la atención de algunas de las poblaciones sujetas de atención del Ministerio. Igual situación se presenta en algunas ciudades que con programas locales han impulsado la atención para la igualdad.

Esta sección se compone de dos análisis: Un primer análisis que evidenciará los planes, programas y proyectos dirigidos a las poblaciones ámbito de competencia del sector y un segundo análisis que mostrará la oferta para temáticas referentes al sector del asunto.

**Planes, programas y proyectos para la población sujeta de atención:**

**Atención a mujeres:**

Servicio responsable	Programa	Producto
Presidencia	Impulsar el desarrollo integral de las poblaciones con enfoque diferencial desde el sector Presidencia	Servicio de orientación a casos de violencias contra las mujeres
		Servicio de asistencia técnica para la educación, emprendimiento y empoderamiento en posiciones de poder y toma decisiones de mujeres

**Atención a jóvenes:**

Servicio responsable	Programa	Producto
Presidencia	Impulsar el desarrollo integral de las poblaciones con enfoque	Servicio de asistencia técnica para la transferencia

Eje temático	Estrategia	Actividades
	diferencial desde el sector Presidencia	<p>metodológica de estrategias que promueven el desarrollo integral de los jóvenes.</p> <p>Servicio de gestión de alianzas para la garantía de los derechos de los jóvenes</p> <p>Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el desarrollo de los jóvenes</p>
Inclusión Social y Reconciliación	Desarrollo integral de la Primera Infancia a la Juventud y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes	<p>Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social</p> <p>Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos</p> <p>Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos</p> <p>Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos</p> <p>Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes</p> <p>Servicio de protección</p>

		integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes

### Atención a poblaciones y territorios excluidos y la superación de la pobreza:

Sector responsable	Programa	Producto
Inclusión Social y Reconciliación	Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad	Servicio de asistencia técnica a las entidades territoriales en la formulación de sus marcos de lucha contra la pobreza
		Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza
Inclusión Social y Reconciliación	Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad	Servicio de apoyo financiero para el adulto mayor
		Servicio de atención y protección integral al adulto mayor
		Centros de protección social de día para el adulto mayor
		Servicio de educación informal a los cuidadores del adulto mayor
Inclusión Social y Reconciliación	Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar	Servicio de caracterización demográfica y socioeconómica de las personas habitantes de la calle
		Servicio de articulación de oferta social para la

		población habitante de calle
		Servicio de atención integral al habitante de la calle
		Centros de atención de habitantes de la calle
Trabajo	Protección Social	Servicio de apoyo financiero para el adulto mayor
Trabajo	Formación para el trabajo	Servicio de apoyo para la población migrante laboral

Atención de las diversidades:

Presidencia	Impulsar el desarrollo integral de las poblaciones con enfoque diferencial desde el sector Presidencia	Servicio de asistencia técnica territorial para gestión e implementación de la política pública de discapacidad
Educación	Cierre de brechas para el goce efectivo de derechos fundamentales de la población en condición de discapacidad	Servicio de desarrollo de contenidos educativos para la educación inicial, preescolar, básica y media de personas con discapacidad
Inclusión Social y Reconciliación	Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar	Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad
		Centros de atención integral para personas con discapacidad adecuados
Interior	Fortalecimiento institucional a los procesos organizativos de concertación, garantía, prevención y respeto de los derechos humanos	Servicios de educación informal en derechos y normatividad de discapacidad
		Servicios de asistencia técnica territorial para la

	como fundamento para la paz	implementación de medidas afirmativas y ajustes razonables orientadas a personas con discapacidad. Servicio de apoyo financiero en la implementación de proyectos de discapacidad Servicios de divulgación y promoción del Sistema Nacional de Discapacidad
Salud	Salud Pública	Servicio de certificación de discapacidad para las personas con discapacidad
TICS	Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones	Servicio de difusión para la inclusión de personas con discapacidad en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Servicio de educación informal para la inclusión de personas con discapacidad Softwares y hardware para la inclusión de las personas con discapacidad en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Atención a pueblos étnicos y campesinos:

Sector	Programa	Producto
Agricultura y Desarrollo	Inclusión productiva de	Espacios comunitarios

Rural	pequeños productores rurales	campesinos para intercambio de productos, reuniones y alojamiento.
		Becas para cursos y carreras técnicas, tecnológicas y profesionales relacionadas con el agro a jóvenes campesinos de todo el país
Interior	Fortalecimiento institucional a los procesos organizativos de concertación, garantía, prevención y respeto de los derechos humanos como fundamento para la paz	Servicio de educación informal para Comunidades Indígenas
Agricultura y Desarrollo Rural	Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural	Servicio de caracterización de los territorios indígenas ocupados o poseídos ancestralmente
Inclusión Social y Reconciliación	Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas	Servicio de acompañamiento a la implementación de planes de prevención, protección y atención a las comunidades étnicas
Interior	Fortalecimiento institucional a los procesos organizativos de concertación, garantía, prevención y respeto de los derechos humanos como fundamento para la paz	Servicio de apoyo financiero para la implementación de proyectos en materia de etnias

Por su parte, desde algunas entidades territoriales se evidencia un grado de desarrollo y especialidad para la superación de brechas de desigualdad e inequidad. En el caso de Bogotá, la Secretaría de Integración Social cuenta con políticas públicas para:



- Infancia y Adolescencia
- Juventud
- Adultez
- Envejecimiento y Vejez
- Familias
- Habitantes de calle y,
- Discapacidad

Adicionalmente, dentro de este mismo sector distrital se encuentra el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON que atiende las dinámicas de calle, barrismo social, entre otros asuntos.

Lo anterior evidencia la multiplicidad de oferta existente para la poblaciones objeto de atención, su dispersión y la necesidad de contar con un órgano rector que garantice la interseccionalidad en la atención.

#### **1.2.1 Cadena de Valor: Resultados**

A través del análisis e identificación de los Sectores Administrativos del nivel nacional que tienen relación directa e indirecta con la misionalidad del Ministerio de Igualdad y Equidad se puede evidenciar que tanto algunas dependencias como otros mecanismos o instancias, están enfocados a resultados para atender problemáticas como la reducción de la desigualdad, la pobreza y la inequidad. Los resultados que se relacionan directa o indirectamente con los objetivos del Ministerio, descritos en la Ley 2281 de 2023, se encuentran dispersos en estas entidades.

A partir del análisis de la misionalidad de dichas entidades y de las estrategias y programas que actualmente se encuentran desarrollando desde el orden nacional para mitigar las problemáticas mencionadas anteriormente, a continuación, se presentan las principales estrategias que actualmente se desarrollan desde el Gobierno nacional, ya sea a través de proyectos de inversión o como rectores de política pública, alrededor de las siguientes categorías asociadas con el alcance y funciones del Ministerio de Igualdad y Equidad:

- Educación y Primera Infancia.
- Seguridad Alimentaria – Derecho a la Alimentación.
- Desarrollo Económico y Productividad Rural.
- Acceso a la Justicia, Convivencia y Cultura de Paz.
- Migración.

## Educación y Primera Infancia

Los sectores con mayor compromiso en esta temática son el Sector de Educación Nacional y el Sector de Inclusión Social y Reconciliación. En particular, entidades como el Ministerio de Educación, el ICBF y el DPS, orientan las políticas públicas de educación y primera infancia, niñez y adolescencia; prestan servicios y ejecutan proyectos para beneficio de la población mencionada, a partir de estrategias integrales o dirigidas con un fin específico. Las principales categorías que resumen la oferta alrededor de educación e infancia son las siguientes (ver detalle en Tabla 5):

- Atención integral a la primera Infancia.
- Cobertura, calidad y pertinencia de educación para preescolar básica y media.
- Infraestructura educativa.
- Educación para adultos.
- Cobertura calidad y pertinencia de la educación técnica tecnológica y universitaria.

**Tabla 5. Oferta Principal de Sectores Administrativos relacionados con temas de Educación y Primera Infancia**

No.	Categoría	Subcategoría	Sectores	Entidades / Otros
1	Atención integral a la primera Infancia Modalidades de atención: Familiar, comunitaria e institucional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción / dotación CDI</li> <li>• Estrategia Cero a siempre</li> <li>• Modalidad familiar: desarrollo infantil en medio familiar</li> <li>• Hogares comunitarios dotación/ madres comunitarias</li> <li>• Programa Familias y comunidades</li> <li>• Programa Más familias en acción.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclusión Social y Reconciliación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ICBF</li> <li>• DPS</li> <li>• Entidades Territoriales (E.T.)</li> </ul>
2	Cobertura, calidad y pertinencia de educación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planta docente, nombramiento de maestros o de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Educación Nacional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerio de Educación Nacional</li> </ul>

No.	Categoría	Subcategoría	Sectores	Entidades / Otros
	para prescolar básica y media	<ul style="list-style-type: none"> <li>personal orientador y auxiliares.</li> <li>Transporte escolar</li> <li>Alimentación escolar</li> <li>Mejoramiento de los currículos PEI</li> <li>Desarrollo de competencias ej. Huertas escolares, programas de formación ambiental.</li> <li>Educación media apertura de programas – creación de media técnica – Formación a la ciudadanía. Cátedras de paz.</li> <li>Dotación de bibliotecas.</li> <li>Formación a los docentes (diplomados, seminarios, cursos o programas con titulación.</li> <li>Permanencia escolar: oferta en educación secundaria</li> <li>Programas de alimentación escolar.</li> <li>Dotación equipos e insumos tecnológicos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusión Social y Reconciliación</li> <li>Salud y Protección Social</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerio de Salud</li> <li>DPS</li> <li>Secretarías de Educación de E.T. Certificadas</li> </ul>

No.	Categoría	Subcategoría	Sectores	Entidades / Otros
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotación para estudiantes (útiles y uniformes).</li> <li>• Programa de prevención de SPA (plan decenal de salud pública).</li> </ul>		
3	Infraestructura educativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción de espacios deportivos y recreativos</li> <li>• Mejoramientos sedes o establecimientos educativos</li> <li>• Construcción restaurante escolar</li> <li>• Construcción nuevas sedes educativas</li> <li>• Construcción albergues o internados</li> <li>• Construcción nuevas aulas</li> <li>• Mejoramiento / adecuación suministro agua potable</li> <li>• Mejoramiento / adecuación espacios deportivos y recreativos</li> <li>• Mejoramiento / adecuación espacios de cocina y restaurantes</li> <li>• Construcción biblioteca escolar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Educación Nacional</li> <li>• Presidencia de la República</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerio de Educación Nacional</li> <li>• DAPRE</li> <li>• Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa</li> <li>• DPS</li> <li>• Fondo Paz</li> <li>• Entidades Territoriales (E.T.)</li> </ul>

No.	Categoría	Subcategoría	Sectores	Entidades / Otros
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción aulas múltiples</li> <li>• Mejoramiento / adecuación aulas sistemas o laboratorios</li> <li>• Mejoramiento / adecuación albergues o internados.</li> </ul>		
4	Educación para adultos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alfabetización</li> <li>• Formación para el trabajo y desarrollo humano (cursos talleres); cursos y talleres para mujeres.</li> <li>• Educación ciclos para adultos en básica y media ciclos del 3 al 6.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Educación Nacional</li> <li>• Presidencia de la República</li> <li>• Trabajo Social y Reconciliación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAPRE</li> <li>• Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer</li> <li>• SENA</li> <li>• Ministerio de Trabajo</li> <li>• Ministerio de Educación Nacional</li> <li>• DPS</li> <li>• E.T.</li> </ul>
5	Cobertura calidad y pertinencia de la educación técnica tecnológica y universitaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Becas, créditos y subsidios de sostenimiento (ej. Jóvenes en acción)</li> <li>• Apertura de programas del SENA</li> <li>• Programas de educación superior</li> <li>• Creación de Instituciones de educación superior</li> <li>• Dotación o infraestructura educación superior.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Educación Nacional</li> <li>• Trabajo Social y Reconciliación</li> <li>• Presidencia de la República</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAPRE – Consejería Juventud</li> <li>• Ministerio de Educación Nacional</li> <li>• SENA</li> <li>• DPS</li> <li>• ICETEX</li> </ul>

Fuente: elaboración propia.

Asimismo, se identifican las siguientes estrategias transversales con enfoques diferenciales y de género que involucran otras entidades como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio del Interior, el SENA, el Ministerio de Cultura, y el Ministerio del Deporte:

- Enfoque étnico en educación y primera infancia (Sistema Educativo Indígena Propio –SEIP).
- Atención a población con discapacidad.
- Ciencia, tecnología e innovación (CTI): fortalecimiento de la política de CTI, ejecución de proyectos de CTI.
- Recreación, cultura y deporte: programas e infraestructura en materia de cultura, recreación y deporte.

Además, programas como el de Más Familias en Acción, a cargo del DPS, tiene impacto en esta temática al promover, mediante subsidios condicionados, el cumplimiento de los controles nutricionales de los niños en primera infancia y el de promover la permanencia de los niños niñas y adolescentes en el ciclo escolar en primaria y secundaria.

Por su parte, el programa de Mi Familia del ICBF, con las modalidades urbano y rural, busca fortalecer a las familias para promover la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y contribuir a la prevención de violencia, negligencia o abusos en su contra. El programa en mención tiene tres componentes: i) Capacidades Familiares, a través del cual se desarrollan sesiones con las familias que permiten el fortalecimiento de capacidades parentales, relacionales y de resiliencia a partir de visitas domiciliarias, encuentros familiares y acompañamiento no presencial; ii) Convergencia de oferta y gestión de redes, el cual tiene la intención de facilitar el acceso a servicios sociales y promover la participación de las familias en espacios sociales y comunitarios y; iii) Capacidades Comunitarias, este componente, exclusivo para Mi Familia Rural, busca fortalecer a la comunidad como agente y garante de derechos, a través de encuentros comunitarios y conformación de redes locales.

#### Seguridad Alimentaria – Derecho a la Alimentación

Frente a las estrategias para la erradicación del hambre en el país, es importante mencionar que con el Decreto 2055 de 2009 se creó la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria (CISAN), conformada por los Ministerios de Agricultura Desarrollo Rural, Salud y Protección Social, Comercio, Industria y Turismo, Educación Nacional, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Ciudad y Territorio, por el

Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), la Agencia Nacional de Tierras, y la Asociación Colombiana de Facultades de Nutrición. Adicionalmente, en virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 2281 de 2023, el Ministerio de Igualdad y Equidad también hace parte de la CISAN.

Por medio de la CISAN se coordinan la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PLAN SAN) y la estrategia Colombia Vive Saludable, con énfasis en la orientación y decisión sobre el desarrollo e implementación de estrategias para la prevención de las Enfermedades No Transmisibles con especial atención en niños, niñas y adolescentes.

Tanto la instancia como las entidades el Gobierno nacional que componen a la CISAN, se enfocan en desarrollar y articular programas y proyectos alrededor de las siguientes categorías (ver detalle en Tabla 6):

- Acceso a alimentos.
- Comercialización.
- Diseño institucional de Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación – SGPDA (Punto 1 del Acuerdo Final de Paz).
- Estrategias de atención integral en nutrición.

**Tabla 6. Oferta Principal de Sectores Administrativos relacionados con temas de Seguridad Alimentaria**

No.	Categoría	Subcategoría	Sectores	Entidades / Otros
1	Acceso a alimentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Granjas familiares integrales.</li> <li>• Huertas caseras.</li> <li>• Implementación de nuevos programas de alimentación y nutrición.</li> <li>• Mejoramiento de la calidad y la cobertura de programas de alimentación y nutrición.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclusión Social y Reconciliación</li> <li>• Presidencia de la República</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ICBF</li> <li>• DPS</li> <li>• ART</li> <li>• E.T.</li> </ul>

No.	Categoría	Subcategoría	Sectores	Entidades / Otros
2	Comercialización	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mercados campesinos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural</li> <li>• Comercio, Industria y Turismo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural</li> <li>• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</li> <li>• ADR</li> <li>• Esquemas Asociativos Regionales – RAPE</li> </ul>
3	Diseño institucional de Sistema para la garantía progresiva del Derecho a la alimentación SGPDA (punto 1 del Acuerdo de paz)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comités y veedurías del Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación (SPGDA)</li> <li>• Política pública del SGPDA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CISAN</li> <li>• E.T.</li> <li>• Procuraduría General de la Nación</li> </ul>
4	Estrategias de atención integral en nutrición	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrategia de atención integral adulto mayor</li> <li>• Estrategia integral para la desnutrición aguda – primera infancia</li> <li>• Programas de capacitación en buenas prácticas de manufactura</li> <li>• Programas de educación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclusión Social y Reconciliación</li> <li>• Comercio, Industria y Turismo</li> <li>• Educación Nacional</li> <li>• Salud y Protección Social</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ICBF</li> <li>• INVIMA</li> <li>• Ministerio de Educación Nacional</li> <li>• Ministerio de Salud y Protección Social</li> </ul>



No.	Categoría	Subcategoría	Sectores	Entidades / Otros
		alimentaria y nutricional		

Fuente: elaboración propia.

Uno de los programas con mayor cobertura en el país, relacionado con acceso a alimentos, es el programa ReSA (Red de Seguridad Alimentaria) del DPS. Dicho programa tiene como objetivo principal mejorar el acceso a alimentos para el autoconsumo así como los hábitos y estilos de vida saludables, mediante la implementación de huertas caseras o comunitarias y educación nutricional.

Por medio de la metodología de "Aprender Haciendo" se busca que las familias cuenten con un espacio en el cual se construyan, fortalezcan y compartan conocimientos en torno a la seguridad alimentaria y nutricional. En desarrollo del programa, se brinda un acompañamiento técnico que promueve la sostenibilidad y el desarrollo de sus participantes. El programa ha tenido varias versiones a lo largo de las diferentes vigencias, con focalizaciones poblacionales mediante el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), o con coberturas territoriales a partir de los indicadores del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), llegando a las zonas más apartadas del país, y trabajando bajo la modalidad de hogares. El programa ReSA se ha enfocado principalmente en el contexto rural pero también ha implementado propuestas para las áreas urbanas.

### Desarrollo Económico y Productividad Rural

En relación con las estrategias asociadas con el desarrollo económico inclusivo y sostenible, así como respecto de los esfuerzos por mejorar la empleabilidad, el emprendimiento y el trabajo decente, se identifican diversos esfuerzos provenientes de varios sectores. Estos se pueden resumir en las siguientes categorías (ver detalle en Tabla 7):

- Proyectos productivos integrales (cultivos de circuito corto o largo y proyectos con enfoque de cadena de valor por las líneas productivas de acuerdo con la vocación y aptitud del territorio).
- Acceso a activos.
- Extensión agropecuaria (asistencia técnica).
- Cooperativas y asociaciones.
- Financiamiento y aseguramiento.
- Servicios de comercialización.
- Actividades no agropecuarias.

- Política pública agropecuaria e instituciones.
- Protección al trabajador y empleabilidad.

**Tabla 7. Oferta Principal de Sectores Administrativos relacionados con temas de Desarrollo Económico y Productividad Rural**

No	Categoría	Subcategoría	Sectores	Entidades / Otros
1	Proyectos productivos integrales (cultivos de circuito corto o largo; proyectos con enfoque de cadena de valor por las líneas productivas de acuerdo con la vocación y aptitud del territorio)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agrícolas</li> <li>• Forestal</li> <li>• Pecuarios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural</li> <li>• Presidencia de la República</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural</li> <li>• DAPRE</li> <li>• DPS</li> <li>• ADR</li> <li>• ART</li> <li>• ARN</li> <li>• AUNAP</li> <li>• URT</li> </ul>
2	Acceso a activos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción /mejoramiento/dotación centros de acopio y plantas de transformación de materia prima</li> <li>• Maquinaria verde</li> <li>• Soluciones agua intrapredial</li> <li>• Análisis y estudios de suelos y aguas</li> <li>• Provisión de activos para beneficio animal</li> <li>• Mejoramiento de la infraestructura para post cosecha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural</li> <li>• Presidencia de la República</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural</li> <li>• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</li> <li>• DAPRE</li> <li>• ADR</li> <li>• ART</li> <li>• UPRA</li> <li>• E.T.</li> </ul>

No	Categoría	Subcategoría	Sectores	Entidades / Otros
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herramientas y equipos agropecuarios</li> <li>• Construcción / mejoramiento de infraestructura para el beneficio animal</li> </ul>		
3	Extensión agropecuaria (asistencia técnica)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicio de extensión agropecuaria</li> <li>• Estrategias para la promoción conservación y uso de semillas</li> <li>• Investigación agropecuaria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural</li> <li>• ICA</li> <li>• UPRA</li> <li>• AGROSAVIA</li> </ul>
4	Cooperativas y asociaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Creación y fortalecimiento de cooperativas y asociaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural</li> <li>• Inclusión Social y Reconciliación</li> <li>• Trabajo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UAEOS</li> <li>• ADR</li> <li>• DPS</li> <li>• SENA</li> </ul>
5	Financiamiento y aseguramiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Créditos agropecuarios</li> <li>• Capital semilla reembolsable o no reembolsable</li> <li>• Normalización de cartera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural</li> <li>• Inclusión Social y Reconciliación</li> <li>• Cultura</li> <li>• Trabajo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAPRE</li> <li>• Banco Agrario</li> <li>• Finagro</li> <li>• Fiduagraria</li> <li>• DPS</li> <li>• ADR</li> <li>• ARN</li> <li>• Fondo Emprender</li> <li>• SENA</li> </ul>

No	Categoría	Subcategoría	Sectores	Entidades / Otros
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Presidencia de la República</li> </ul>	
6	Servicios de comercialización	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comercialización de sistemas agropecuarios, pesqueros y forestales</li> <li>Sellos y valor agregado</li> <li>Implementación de sistemas de información de precios</li> <li>Análisis de mercados y abastecimientos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agropecuaria, Pesquero y de Desarrollo Rural</li> <li>Comercio, Industria y Turismo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural</li> <li>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</li> <li>Superintendencia de Industria y Comercio</li> <li>IMBIMA</li> <li>AUNAP</li> </ul>
7	Actividades no agropecuarias	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emprendimientos de bienes y servicios de turismo</li> <li>Emprendimientos artesanales y manufactureros</li> <li>Pagos por servicios ambientales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comercio, Industria y Turismo</li> <li>Trabajo</li> <li>Inclusión Social y Reconciliación</li> <li>Ambiente y Desarrollo Sostenible</li> <li>Presidencia de la República</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</li> <li>DAPRE</li> <li>Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</li> <li>DPS</li> <li>UAEOS</li> <li>ART</li> <li>ARN</li> <li>CARs</li> </ul>
8	Política pública agropecuaria e instituciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión para la regulación de precios</li> <li>Gestión para la regulación de la importación de productos agropecuarios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comercio, Industria y Turismo</li> <li>Agropecuaria, Pesquero y de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</li> <li>Ministerio de Agricultura y</li> </ul>

No	Categoría	Subcategoría	Sectores	Entidades / Otros
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestión para el acceso a subsidios de insumos agropecuarios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollo Rural</li> <li>• Relaciones Exteriores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollo Rural</li> <li>• Ministerio de Relaciones Exteriores</li> <li>• Superintendencia de Industria y Comercio</li> <li>• ProColombia</li> </ul>
9	Protección al trabajador y empleabilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fomento a la cultura de formalización laboral</li> <li>• Empleabilidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabajo</li> <li>• Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerio de Trabajo</li> <li>• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural</li> <li>• Superintendencia del Subsidio Familiar</li> <li>• Cajas de Compensación Familiar</li> </ul>

Fuente: elaboración propia.

Dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se encuentra la Dirección de Mujer Rural, cuya función principal es coordinar, diseñar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos integrales de desarrollo rural con enfoque territorial, encaminadas a la provisión de bienes públicos rurales, que incidan en el bienestar social y económico de las mujeres rurales. En tal sentido, dicha dependencia orienta a la población beneficiaria para acercarla a la oferta principalmente del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural y orienta a las entidades para facilitar o disminuir las barreras de acceso que potencialmente tienen las personas en la ruralidad por su condición de ser mujeres. Una de las principales herramientas para este fin es el Sistema de Información de Mujer Rural.

Acceso a la Justicia, Convivencia y Cultura de Paz

En relación con los programas y estrategias relacionados con el acceso a la justicia, los procesos de convivencia, reconciliación y cultura de paz, se identifican las siguientes categorías (ver detalle en Tabla 8):

- Fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil e institucionales.
- Infraestructura comunitaria.
- Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH).
- Verdad, justicia, reparación y no repetición.
- Diálogo social - Fortalecimiento a mecanismos de participación.
- Reconciliación, convivencia y no estigmatización.

**Tabla 8. Oferta Principal de Sectores Administrativos relacionados con temas de Justicia, Convivencia y Cultura de Paz**

No	Categoría	Subcategoría	Sectores	Entidades / Otros
1	Fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil e institucionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programas de fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias para la participación, la incidencia, garantía de derechos y prevención de violencias.</li> <li>• Programas de fortalecimiento a la institucionalidad local</li> <li>• Formulación o actualización de los planes de vida, planes de salvaguarda de los territorios colectivos</li> <li>• Programas de fortalecimiento a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclusión Social y Reconciliación</li> <li>• Presidencia de la República</li> <li>• Interior</li> <li>• Función Pública</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerio del Interior</li> <li>• DAPRE</li> <li>• DPS</li> <li>• Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer</li> <li>• ART</li> <li>• ARN</li> <li>• ICBF</li> <li>• UARIV</li> <li>• Procuraduría General de la Nación</li> <li>• ESAP</li> </ul>

No	Categoría	Subcategoría	Sectores	Entidades / Otros
		autoridades étnicas territoriales en gobierno propio		
2	Infraestructura comunitaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Casas de la mujer</li> <li>• Casetas comunales</li> <li>• Casas de justicia</li> <li>• Emisoras comunitarias</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidencia de la República</li> <li>• Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</li> <li>• Interior</li> <li>• Justicia y del Derecho</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerio del Interior</li> <li>• Ministerio de Justicia y del Derecho</li> <li>• Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</li> <li>• DAPRE</li> <li>• Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer</li> </ul>
3	Seguridad y Derechos humanos DDHH y DIH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrategias de prevención, protección seguridad para la ciudadanía</li> <li>• Seguridad y protección líderes sociales</li> <li>• Estrategias prevención a violación derechos humanos</li> <li>• Desminado humanitario</li> <li>• Prevención reclutamiento forzado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interior</li> <li>• Defensa</li> <li>• Educación Nacional</li> <li>• Inclusión Social y Reconciliación</li> <li>• Justicia y del Derecho</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerio del Interior</li> <li>• Ministerio de Defensa</li> <li>• Ministerio de Justicia y del Derecho</li> <li>• Ministerio de Educación Nacional</li> <li>• Policía Nacional</li> <li>• UNP</li> <li>• UARIV</li> <li>• MEN</li> <li>• OACP</li> <li>• ICBF</li> </ul>

No	Categoría	Subcategoría	Sectores	Entidades / Otros
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesos de formación en DDH y DUH</li> <li>• Educación para la paz en los entornos educativos (cátedras, seminarios etc).</li> <li>• Modelos de justicia local y rural.</li> <li>•</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo)</li> </ul>
4	Verdad justicia reparación y no repetición	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecimiento para la participación de las víctimas en el SIVJRNR</li> <li>• Fortalecimiento actualización o creación de planes de reparación colectiva</li> <li>• Reparación vía administrativa a las víctimas</li> <li>• Restitución de tierras víctimas</li> <li>• Programas de acceso a la justicia transicional y restaurativa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclusión Social y Reconciliación</li> <li>• Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural</li> <li>• Presidencia de la República</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jurisdicción Especial para la Paz</li> <li>• Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición</li> <li>• Centro Nacional de Memoria Histórica</li> <li>• UBPD</li> <li>• UARIV</li> <li>• URT</li> <li>• DAPRE</li> <li>• Oficina del Alto Comisionado para la Paz</li> </ul>
5	Dialogo social – Fortalecimiento o a mecanismos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidencia de la República</li> <li>• Interior</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerio del Interior</li> <li>• DAPRE</li> </ul>



No	Categoría	Subcategoría	Sectores	Entidades / Otros
	de participación		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclusión Social y Reconciliación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficina del Alto Comisionado para la Paz</li> <li>• ART</li> <li>• UARIV</li> <li>• Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo)</li> </ul>
7	Reconciliación convivencia y no estigmatización	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conmemoraciones alrededor de la reconciliación</li> <li>• Programas de reincorporación comunitaria</li> <li>• Programas de reintegración comunitaria.</li> </ul> <p>Política pública para la convivencia, reconciliación y construcción de paz</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclusión Social y Reconciliación</li> <li>• Presidencia de la República</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAPRE</li> <li>• Oficina del Alto Comisionado para la Paz</li> <li>• Centro Nacional de Memoria Histórica</li> <li>• ARN</li> <li>• UARIV</li> </ul>

Fuente: elaboración propia.

Una de las estrategias más recientes para mejorar el acceso a la justicia a través de modelos de justicia y de desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos, son los Modelos de Justicia Local y Rural. Dichos modelos son una iniciativa nacional, coordinada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que buscan promover el acceso efectivo a la justicia a través de la gestión integral y la oferta pertinente, con perspectiva poblacional y territorial y con el fin de contribuir con la construcción de paz, haciendo énfasis en las áreas rurales. A finales de 2022, se identificaban 22 modelos instalados en territorios PDET, que prestan servicios alrededor de métodos de resolución de conflictos, servicios de justicia foral, justicia transicional, justicia restaurativa y apropiación de la justicia para la paz.

## Migración

Frente a las estrategias asociadas con los asuntos de migración, en los últimos años, tras el fenómeno de migración de las personas provenientes de Venezuela a Colombia, se dio un incremento en las estrategias y programas desde el Gobierno nacional para atender dicha situación desde diversos sectores, orientados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, autoridad del Gobierno en materia de migración.

A través del Sistema Nacional de Migración, se coordinan las entidades, organizaciones de la sociedad civil, y se desarrollan regulaciones, procesos, planes y programas que contribuyen al diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la Política Integral Migratoria. Las principales responsabilidades formales y las entidades asociadas en materia de migración se identifican en la siguiente tabla:

**Tabla 9. Oferta Principal de Entidades de la Rama Ejecutiva y de otras Ramas del Poder Público relacionadas con temas de Migración**

Entidad	Responsabilidad - Estrategia
Migración Colombia Puestos de Control fronterizos	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Encargada de las fronteras el control de inmigración y la documentación, trabaja a lo largo de todas las zonas fronterizas en los Puestos de control migratorios.</li></ul>
Ministerio de Educación Nacional	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Prestar servicios educativos a la población migrante en el ciclo básica y media.</li><li>▪ Reconocer y convalidar títulos extranjeros</li></ul>
Ministerio del Trabajo – Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Implementación de la Política de migración laboral en consulta con el Min Exteriores y Migración Col.</li></ul>
Oficina de Asistencia e Integración Socioeconómica de la población Migrante (OAIPM)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Implementación coordinada de estrategias de integración entre los organismos nacionales y con los gobiernos locales.</li></ul>
Ministerio de Salud y Protección Social	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gestión de salud pública para inmigrantes venezolanos y retornados colombianos.</li></ul>
Registraduría Nacional del Estado Civil	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Líder del proyecto <b>Primero la Niñez</b></li><li>▪ Otorga cédulas de extranjería</li></ul>
Fiscalía General de la Nación	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Colaboración con la Oficina del Defensor del Pueblo y la Oficina del Inspector General para la Protección de los Derechos Humanos.</li></ul>

Fuente: elaboración propia.

Es de especial relevancia la Unidad interinstitucional de Cooperación Internacional<sup>32</sup> para la Migración proveniente de Venezuela. Dicha instancia está conformada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la OAIPM y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colombia). Se trata de un espacio permanente de articulación y coordinación con los principales actores nacionales y de cooperación internacional en materia de migración, para centralizar la interlocución, concentrar esfuerzos y generar directrices claras en la respuesta, maximizar el impacto de las acciones, desarrollar intervenciones alineadas con las prioridades nacionales y locales, y promover un abordaje integral del fenómeno migratorio.

Entre los principales avances de esta estrategia, se encuentra la expedición del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) que contribuye a que la migración sea segura, ordenada y regular. El ETPV busca proteger a la población migrante de Venezuela que se vio afectada por las recientes crisis de dicho país, permitiendo el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones, acceso a bienes y servicios, como salud y educación, así como la posibilidad de emplearse cumpliendo con las disposiciones legales para tal fin. El Estatuto tiene una vigencia de 10 años y conducirá a los portadores a adquirir el estatus de residente, ya que este mecanismo les permite acreditar tiempo de permanencia en el país para hacer tránsito al régimen migratorio regular mediante una visa de residencia.

La última etapa del proceso del ETPV consiste en el otorgamiento de un Permiso por Protección Temporal (PPT<sup>33</sup>) a aquellas personas que hayan surtido las etapas previas de registro virtual (en el Registro Único de Migrantes Venezolanos), diligenciamiento de la encuesta de caracterización, registro biométrico, y que además hayan sido aprobadas por la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia como susceptibles de ser beneficiarias del Estatuto.

### **1.2.2 Cadena de Valor: Procesos**

En aras de evidenciar los principales esfuerzos desde los sectores mencionados en la sección 1.2.1, se realiza un análisis a través de los programas y sub programas a los cuales se adscriben los proyectos de inversión para lograr ejecutar los recursos de los sectores orientados a resultados.

---

<sup>32</sup> Consultado en Ministerio de Relaciones exteriores. [www.cancilleria.gov.co](http://www.cancilleria.gov.co)

<sup>33</sup> El PPT es un documento de identificación, que permite a su titular acceder a todas las ofertas y servicios ofrecidos en Colombia por parte de entidades públicas y de actores privados, que incluye la afiliación al sistema de seguridad social en Colombia, acceso a oportunidades de empleabilidad y emprendimiento en igualdad de condiciones e inclusión en el sistema financiero.

Desde una perspectiva de gestión pública orientada a resultados<sup>34</sup>, en la siguiente tabla se identifican los principales programas de los Sectores Administrativos identificados **con relación directa** con el Ministerio de Igualdad y Equidad:

*Tabla 10. Principales programas por sector de interés*

Código sector	Nombre sector	Aplicación	Relación	Programas	No. Productos MGA relacionados
02	Presidencia de la República	Nación	Directa	0204- Impulsar el desarrollo integral de las poblaciones con enfoque diferencial desde el sector Presidencia. 0212- Renovación territorial para el desarrollo integral de las zonas rurales afectadas por el conflicto armado	96
11	Relaciones Exteriores	Nación y Territorio	Directa	1103- Política migratoria y servicio al ciudadano	7
17	Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural	Nación y Territorio	Directa	1702- Inclusión productiva de pequeños productores rurales 1704- Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural 1705- Restitución de tierras a víctimas del conflicto armado	9
22	Educación	Nación y Territorio	Directa	2203- Cierre de brechas para el goce efectivo de derechos	73

<sup>34</sup> Información consultada en el catálogo de productos del DNP. Con corte a febrero 2023.

Código sector	Nombre sector	Aplicación	Relación	Programas	No. Productos MGA relacionados
				fundamentales de la población en condición de discapacidad	
37	Interior	Nación	Directa	3701- Fortalecimiento institucional a los procesos organizativos de concertación; garantía, prevención y respeto de los derechos humanos como fundamentos para la paz	56
41	Inclusión Social y Reconciliación	Nación y Territorio	Directa	4102- Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes 4103- Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad 4104- Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar 4199- Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector	288

Código sector	Nombre sector	Aplicación	Relación	Programas	No. Productos MGA relacionados
				Inclusión Social y Reconciliación	
44	Justicia y del Derecho	Nación	Directa	1207- Fortalecimiento de la política criminal del Estado colombiano	9

Fuente: elaboración propia.

Los programas relacionados en la anterior matriz que corresponden al Sector de Presidencia de la República, evidencian por un lado las acciones a desarrollar alrededor de la discapacidad, el enfoque de género con especial énfasis en mujer, y grupos y comunidades étnicas. Por otro lado, las acciones que por competencia puede desarrollar la ART a nivel territorial, de la mano del Ministerio de Igualdad y Equidad.

Con respecto al Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, a pesar de que no existe un programa específico para el desarrollo de acciones en beneficio de las mujeres rurales, y comprendiendo el enfoque transversal sobre toda la oferta del sector, se evidencia que en los tres programas referenciados en la matriz, se encuentran 9 productos específicos que desarrollan acciones cuyos indicadores de resultado están estrictamente relacionados con mujeres rurales.

Frente al sector Interior se evidencia la posibilidad de desarrollar acciones alrededor del fortalecimiento de los procesos de atención a las perspectivas que provienen de Pueblos Indígenas, Pueblos Afrodescendientes, Negros, Raizales, Palenqueros, Indígenas y Rrom y Rrom. Asimismo, un alcance en materia de discapacidad, frente al fortalecimiento tanto de organizaciones como de territorios, e instancias o mecanismos de interlocución entre la sociedad civil y el Estado. Las acciones van desde lineamientos técnicos y de política, pasando por procesos de pedagogía y fortalecimiento de capacidades hasta ejecución de proyectos con estos grupos poblacionales.

Frente a los sectores con **relación indirecta** con el Ministerio de la igualdad y la Equidad, se analizan programas cuyos resultados inciden en la disminución de brechas de desigualdad o de pobreza.

***Tabla 11. Principales programas relacionados con disminución de brechas de desigualdad***

Código Sector	Nombre Sector	Código Programa	Nombre Programa	Aplicación
19	Salud y Protección Social	1905	Salud Pública	Territorio
23	Tecnologías de La Información y las Comunicaciones	2302	Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)	Nación y Territorio
32	Ambiente y Desarrollo Sostenible	3202 3205	Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos Ordenamiento ambiental territorial	Nación y Territorio
33	Cultura	3302	Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano	Nación y Territorio
35	Comercio, Industria y Turismo	3599	Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Comercio, Industria y Turismo	Nación
36	Trabajo	3601 3604	Protección Social Derechos fundamentales del trabajo y fortalecimiento del diálogo social	Nación y Territorio
40	Vivienda, Ciudad y Territorio	4002 4003	Ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico.	Nación y Territorio

Fuente: elaboración propia.

Los programas relacionados en la Tabla 11 evidencian diferentes acciones sectoriales orientadas a la provisión de bienes y a la prestación de servicios básicos a la población, como por ejemplo el acceso a servicios de agua potable y saneamiento básico (Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio) o el acceso a servicios de salud pública (Sector de Salud y Protección Social).

### 1.2.3 Marco Estratégico Vigente

Mediante la Resolución 70/1 del 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), precisando que si bien el desarrollo es un propósito global, su consecución será responsabilidad de cada gobierno, teniendo en consideración las prioridades y particularidades de cada país.

Con base en la Agenda 2030 y sus ODS, el marco nacional de seguimiento a dichos Objetivos se encuentra establecido, principalmente, en el Documento CONPES 3918 aprobado el 15 de marzo de 2018, que corresponde a la: *“Estrategia para la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia”*.

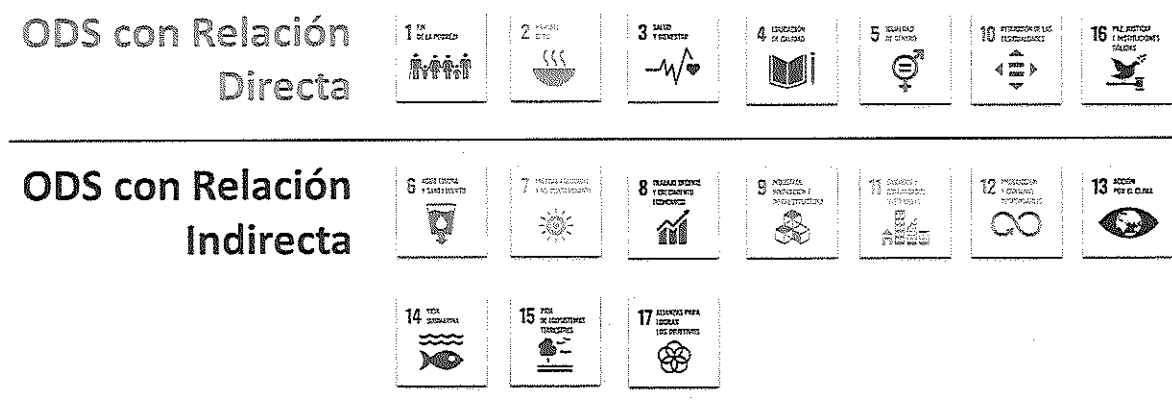
A partir de lo establecido en la Ley 2281 de 2023, es posible identificar los ODS que tienen una relación tanto directa como indirecta con el alcance y objeto del Sector Administrativo y del Ministerio de Igualdad y Equidad.

En tal sentido, dada su alineación con la esfera de personas y con la esfera de paz, justicia e instituciones sólidas de los ODS, principalmente, se identifica la **asociación directa en temas de igualdad y equidad** con los ODS: 1 (Fin de la Pobreza), 2 (Hambre Cero), 3 (Salud y Bienestar), 4 (Educación de Calidad), 5 (Igualdad de Género), 10 (Reducción de las Desigualdades), y 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas).

En complemento a lo anterior, se identifica **una asociación indirecta, en materia de igualdad y equidad**, con los siguientes ODS, que hacen parte de las esferas de prosperidad, planeta y alianzas: 6 (Agua Limpia y Saneamiento), 7 (Energía Asequible y No Contaminante), 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles), 12 (Producción y Consumo Responsables), 13 (Acción por el Clima), 14 (Vida Submarina), 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres), y 17 (Alianzas para Lograr los Objetivos) (ver Ilustración 3).



**Figura 3. ODS con relación directa e indirecta con el alcance y objetivo del Sector Administrativo y del Ministerio de Igualdad y Equidad**



Fuente: elaboración propia.

Es importante señalar que los ODS y sus metas definidas para el caso colombiano constituyen el principal marco estratégico vigente para evidenciar avances y retos en materia de desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental.








De acuerdo con lo anterior, el marco de referencia para la medición de los ODS en Colombia se encuentra definido principalmente en el Documento CONPES 3918 de 2018 así como en el Documento CONPES 3934 de 2018 (“Política de Crecimiento Verde). En tal sentido, la batería de indicadores para medir el progreso de los ODS en Colombia está compuesta por un total de 161 indicadores únicos<sup>35</sup>, los cuales ascienden a 180, dado que algunos indicadores se repiten para diferentes metas ODS.

En términos de medición de las 169 metas globales ODS, en el Documento CONPES 3918 de 2018 se excluyen 22 metas que corresponden a compromisos globales, mientras que 17 tendrán seguimiento financiero y de movilización de recursos. Con ello, el universo de metas globales ODS a considerar en el marco nacional de seguimiento de los ODS es de 130, de las cuales un total de 85 se podrían medir con la batería de 161 indicadores señalada anteriormente. Lo anterior, se explica por la disponibilidad de información y por los compromisos asumidos por diferentes entidades del orden nacional al momento de la formulación y aprobación del Documento CONPES 3918 de 2018.

<sup>35</sup> Las fichas técnicas de todos los indicadores nacionales de ODS así como las series históricas disponibles para la mayoría de ellos pueden ser consultadas en: <https://ods.dnp.gov.co>.

Con el anterior contexto, resulta pertinente el analizar la potencial relación de los ODS con los temas asociados con igualdad y equidad. En tal sentido, se identifica un total de 45 metas globales de ODS (27% del total) asociados con los ODS identificados con relación directa con el Sector Administrativo y con el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, como se evidencia en la siguiente tabla:

**Figura 12. Metas globales de los ODS directamente relacionados con el Sector Administrativo de la Igualdad y la Equidad y con el Ministerio de la Igualdad y la Equidad (Ley 2281 de 2023)**

1  PAZ Y JUSTICIA	2  SEGURIDAD ALIMENTARIA Y AGUA	3  SALUD Y BIENESTAR	4  EDUCACIÓN DE CALIDAD	5  IGUALDAD DE GÉNERO	10  REDUCCIÓN DE LAS DESIGNAJES	16  PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	10.1	16.1
1.2	2.2	3.2	4.2	5.2	10.2	16.2
1.3	2.3	3.3	4.3	5.3	10.3	16.3
1.4	2.4	3.4	4.4	5.4	10.4	16.4
1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	10.5	16.5
1.a.	2.a	3.6	4.6	5.6	10.6	16.6
1.b.	2.b	3.7	4.7	5.a	10.7	16.7
	2.c	3.8	4.a	5.b	10.a	16.8
		3.9	4.b	5.c	10.b	16.9
		3.a	4.c		10.c	16.10
		3.b				16.a
		3.c				16.b
		3.d				

Nota: las metas ODS subrayadas y en negrita corresponden a las 85 metas ODS priorizadas por los CONPES 3918 y 3934 de 2018.


Fuente: cálculos propios con base en Documento CONPES 3918 de 2018.


Con base en lo señalado anteriormente, en el Documento CONPES 3918 de 2018 se definió la hoja de ruta para la implementación de la Agenda 2030 y sus ODS en Colombia. Las metas ODS del Documento CONPES 3918 de 2018 se definieron con el fin de focalizar la atención en temas que pudieran facilitar la movilización de acciones tendientes a jalonar el cumplimiento de los ODS y guardan relación con la búsqueda de mayor igualdad y equidad en el país, propósitos hacia los que se orientan tanto el Sector Administrativo como el Ministerio de Igualdad y Equidad.


Como un referente para dimensionar los retos que se deben asumir en materia de igualdad y equidad en los próximos años, en la siguiente tabla se identifican los ODS

directamente asociados con el Sector Administrativo y con el Ministerio de Igualdad y Equidad, así como las metas ODS –con sus palabras claves asociadas–, los indicadores nacionales con sus respectivas metas hacia el año 2030, y las entidades líderes para la materialización de las metas ODS en Colombia:


**Tabla 13. Detalle de los ODS directamente relacionados con el Sector y el Ministerio de Igualdad y Equidad**

Objetivo	Indicador	Meta 2030	Meta 2020	Entidad responsable		
<div>1</div> <div>FIN DE LA POBREZA</div> <div></div>	1.1	Pobreza Extrema	Porcentaje de población que vive por debajo del umbral internacional de pobreza extrema	5,60%	1,7%	Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS)
			Incidencia de la Pobreza Monetaria Extrema	7,90%	4,0%	
	1.2	Pobreza Multidimensional	Incidencia de la Pobreza Monetaria	27,80%	18,70%	DPS
			Índice la Pobreza Multidimensional	20,20%	8,4%	
	1.3	Protección Social – Atención a Pobres y Vulnerables	Porcentaje de población afiliada al sistema de seguridad social en salud	95,7%	99,0%	Ministerio del Trabajo
			Porcentaje de población ocupada afiliada a Administradora de Riesgos Laborales	34,3%	48,0%	
			Porcentaje de población ocupada cotizante al	36,8%	42,1%	

		Indicador	Unidad	2018	2026	Entidad
			sistema de pensiones			
	1.4	Garantía de Derechos – Pobres y Vulnerables	Hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, formalizadas	0	7.000.000 (2026)	Agencia Nacional de Tierras
	1.5	Resiliencia a Desastres	Mortalidad nacional causada por eventos recurrentes	89	80	Presidencia de la República - Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
			Tasa de personas afectadas a causa de eventos recurrentes	989,79	890,82	
	1.a	Recursos – Pobreza	Sin indicador ni meta a 2030 en CONPES 3918			DPS
	1.b	Marco Normativo – Género – Pobreza	Sin indicador ni meta a 2030 en CONPES 3918			DPS
	2.1	Alimentación Sana y Fin del Hambre	Prevalencia de inseguridad alimentaria en el hogar (moderada o severa)	23,49%	13,90%	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
			Porcentaje de menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva	36,10%	51,0%	
	2.2	Malnutrición	Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años	10,8%	5%	Ministerio de Salud y Protección Social
			Prevalencia de desnutrición	2,3%	0,9%	


			aguda en menores de 5 años			
			Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años	6,83	5,0	
	2.3	Productividad Agrícola e Ingresos de Pequeños Productores	Sin indicador ni meta a 2030 en CONPES 3918			Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
<b>3</b> SALUD Y BIENESTAR 	3.1	Mortalidad Materna	Tasa de mortalidad materna	53,7	32,0	Ministerio de Salud y Protección Social
			Porcentaje de partos atendidos por personal calificado	99,0%	99,0%	
			Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales	88,4%	93,0%	
	3.2	Mortalidad en neonatos y niños menores de 5 años	Tasa de mortalidad neonatal	7,0	6,0	Ministerio de Salud y Protección Social
			Tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año (ajustada)	17,1	15,0	
			Tasa de mortalidad en menores de 5 años (ajustada)	18,73	14	
	3.7	Servicios de	Tasa de	63,9	46,0	Ministerio de

		Salud Sexual y Reproductiva	fecundidad específica en mujeres adolescentes de 15 a 19 años			Salud y Protección Social
			Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años (unidas y no unidas) con actividad sexual reciente que usan métodos anticonceptivos modernos	28,5%	48,6%	
			Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años (unidas y no unidas) con actividad sexual reciente que usan métodos anticonceptivos modernos	61,4%	81,4%	
			Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que son madres o están embarazadas de su primer hijo	17,4%	12,0%	
			Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años con embarazo subsiguiente	20,1%	14,0%	
	3.8	Acceso a Servicios de Salud	Porcentaje de menores de 1 año con tercera dosis	91,4%	95,0%	Ministerio de Salud y Protección

Índice	Medio	Variable	Indicador	Índice	Medio	Entidad
			de pentavalente			Social
			Porcentaje niños y niñas de 1 año con vacunación de triple viral	94,0%	95,0%	
			Porcentaje de población afiliada al sistema de seguridad social en salud	95,7%	99,0%	
	4.1	Educación Primaria y Secundaria (niñez)	Porcentaje de estudiantes que se encuentran en nivel de desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas SABER 5 - Lenguaje	33,5%	44,5%	Ministerio de Educación Nacional
			Porcentaje de estudiantes que se encuentran en nivel de desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas SABER 5 -Matemáticas	28,3%	38,1%	
			Porcentaje de estudiantes que se encuentran en nivel de desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas SABER 9 - Lenguaje	34,0%	44,5%	

			Porcentaje de estudiantes que se encuentran en nivel de desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas SABER 9 - Matemáticas	18,8%	29,7%	
			Tasa de cobertura bruta en educación media	77,8%	95,0%	
	4.2	Acceso a Servicios para la Primera Infancia y Educación Pre-escolar (niñez)	Porcentaje de niñas y niños en primera infancia que cuentan con las atenciones priorizadas en el marco de la atención integral	34,2%	95,0%	Presidencia de la República – Consejería para la Primera Infancia
			Tasa de cobertura bruta en transición	85,9%	100,0%	
			Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que asisten a un hogar comunitario, jardín, centro de desarrollo infantil o colegio.	36,7%	50,0%	
	4.3	Acceso a Educación Técnica, Profesional y Superior	Cobertura en educación superior	49,4%	80,0%	Ministerio de Educación Nacional





Objetivo	Indicador	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	Meta 2030	Responsable
		(adultos)				
	4.4	Competencias Técnicas y Profesionales (jóvenes y adultos)	Sin indicador ni meta a 2030 en CONPES 3918			Ministerio de Educación Nacional
	4.5	Disparidades de Género y Acceso Igualitario a Formación Profesional (personas vulnerables)	Brecha entre cobertura neta urbano-rural en educación preescolar, básica y media	8,2	5,5	Ministerio de Educación Nacional
	4.6	Alfabetización y Aritmética (jóvenes y adultos)	Tasa de analfabetismo para la población de 15 años y más	5,8%	3,0%	Ministerio de Educación Nacional
	4.7	Conocimiento para el Desarrollo Sostenible	Sin indicador ni meta a 2030 en CONPES 3918			Ministerio de Educación Nacional
	4.a	Instalaciones y Entornos Educativos Adecuados (niñez, discapacidad, género)	Porcentaje de matrícula oficial con conexión a internet	74,1%	100,0%	Ministerio de Educación Nacional
	4.b	Becas Enseñanza Superior y Formación (para países en desarrollo)	Sin indicador ni meta a 2030 en CONPES 3918			Ministerio de Educación Nacional
5  IGUALDAD DE GÉNERO	5.1	Discriminación contra Mujeres y Niñas	Porcentaje de municipios que cuentan con mecanismo intersectorial	10,7%	80,0%	Presidencia de la República – Consejería Presidencial para la Equidad

		Temas de Interés	Temas de Interés			
			para el abordaje de las violencias de género			de la Mujer (CPEM)
	5.2	Violencia y Explotación Sexual contra Mujeres y Niñas	Porcentaje de mujeres que han sido forzadas físicamente por el esposo o compañero a tener relaciones o actos sexuales	7,6%	5,0%	Presidencia de la República – CPEM
			Porcentaje de mujeres que han sido forzadas físicamente por otra persona diferente a su esposo o compañero a tener relaciones o actos sexuales	4,5%	2,5%	
			Porcentaje de mujeres, alguna vez unidas, que han experimentado alguna violencia física por parte del esposo o compañero	31,9%	27,0%	
			Porcentaje de mujeres que han experimentado alguna violencia física por una persona diferente al esposo o	13,0%	10,0%	

Indicador	Nº	Descripción	Unidad de Medida	Meta	Valor	Observaciones
			compañero			
			Porcentaje de mujeres, alguna vez unidas, que reportaron violencia psicológica por parte de su pareja	64,1%	50,0%	
			Tasa de homicidio de mujeres	4,4	2,9	
	5-3	Prácticas Nocivas contra Mujeres y Niñas	Porcentaje de mujeres entre 20 y 24 años que estaban casadas o mantenían una unión estable antes de cumplir los 18 años	20,6%	17,7%	Presidencia de la República – CPEM
			Porcentaje de mujeres entre 20 y 24 años que estaban casadas o mantenían una unión estable antes de cumplir los 15 años	4,0%	3,1%	
	5-4	Protección de los Servicios del Cuidado y el Trabajo Doméstico	Brecha del tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados por hombres y mujeres	74,1%	Sin meta	Presidencia de la República – CPEM
			Brecha de la valoración	11,9%	Sin meta	

			económica del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)			
	5.5	Participación e Igualdad de Oportunidades (Mujeres)	Porcentaje de mujeres en cargos directivos del Estado Colombiano	43,5%	50,0%	Ministerio del Interior
			Porcentaje de mujeres candidatas del total de personas candidatas	36,6%	50,0%	
	5.6	Acceso a Servicios de Salud Sexual y Reproductiva	Tasa de fecundidad específica en mujeres adolescentes de 15 a 19 años	63,9	46,0	Ministerio de Salud y Protección Social
			Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años con embarazo subsiguiente	20,1%	14,0%	
			Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años (unidas y no unidas) con actividad sexual reciente que usan métodos	28,5%	48,6%	

			anticonceptivos modernos			
			Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años (unidas y no unidas) con actividad sexual reciente que usan métodos anticonceptivos modernos	61,4%	81,4%	
			Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que son madres o están embarazadas de su primer hijo	17,4%	12,0%	
	5.a	Igualdad de Derechos al Acceso a Recursos (Mujeres)	Brecha de ingreso mensual promedio entre hombres y mujeres	20,4%	15,0%	Presidencia de la República – CPEM
	5.b	TIC – Empoderamiento de las Mujeres	Porcentaje de mujeres que usan teléfono celular	86,7%	93,0%	Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
			Porcentaje de mujeres que usan internet	55,2%	94,0%	
			Porcentaje de mujeres que usan terminales	51,6%	99,0%	
	5.c	Marco Normativo – Igualdad de Género y Empoderamiento (Mujeres y Niñas)	Sin indicador ni meta a 2030 en CONPES 3918			Presidencia de la República – CPEM
	10.1	Crecimiento de	Tasa de	2,7%	3,5%	DPS

		Políticas de Ingresos	Indicador	2017	2018	
		Ingresos de la Población Más Pobre	crecimiento de los ingresos per cápita en el 40% de los hogares más pobres de la población			
			Coefficiente de GINI	0,522	0,480	
	10.2	Inclusión Social, Económica y Política	Brecha de pobreza extrema urbano-rural	3,7	2,6	DPS
	10.3	Igualdad de Oportunidades y Resultados	Sin indicador ni meta a 2030 en CONPES 3918			DPS
	10.4	Políticas para mayor Igualdad	Valor de ingresos laborales como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)	33,5%	35,0%	Ministerio de Trabajo
	10.7	Migración y Movilidad	Sin indicador ni meta a 2030 en CONPES 3918			Ministerio de Relaciones Exteriores
	10.c	Remesas de Migrantes	Sin indicador ni meta a 2030 en CONPES 3918			Ministerio de Hacienda y Crédito Público
	16.1	Reducción de Formas de Violencia y Tasas de Mortalidad	Tasa de homicidio	26,5	16,4	Ministerio de Defensa
			Tasa de víctimas directas de homicidio y de desaparición forzada registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV)	0,85	0	
			Porcentaje de	11,60%	10,4%	

Indicador	Código	Objetivo Estratégico	Indicador	Meta Base	Meta 2030	Responsable
			hurto a personas			
			Tasa de violencia interpersonal	263,1	209,6	
	16.2	Fin al Maltrato, Explotación, Trata, Violencia y Tortura contra los Niños	Sin indicador ni meta a 2030 en CONPES 3918			Ministerio de Defensa
	16.3	Promoción del Estado de Derecho e Igualdad de Acceso a la Justicia	Indemnizaciones otorgadas a víctimas del conflicto armado interno	588.400	1.984.635	Ministerio de Defensa
			Víctimas con atención o acompañamiento psicosocial en modalidad individual, familiar, comunitaria y/o grupal	84.913	1.462.500	
	16.6	Instituciones Eficaces y Transparentes	Sin indicador ni meta a 2030 en CONPES 3918			Departamento Administrativo de la Función Pública
	16.7	Adopción de Decisiones Inclusivas, Participativas y Representativas	Sin indicador ni meta a 2030 en CONPES 3918			Ministerio del Interior
	16.10	Acceso a la Información y Protección de Libertades Fundamentales	Porcentaje de sujetos obligados incluidos en el Formulario Único Reporte de Avances de la	0,0%	70,0%	Presidencia de la República – Secretaría de Transparencia

Objetivo	Indicador	Meta	Entidad	Responsable	Observaciones
			Gestión (FURAG) que avanza en la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública		
16.b	Leyes y Políticas No Discriminatorias para el Desarrollo Sostenible	Sin indicador ni meta a 2030 en CONPES 3918		Ministerio de Justicia y del Derecho	

Fuente: elaboración propia con base en Documento CONPES 3918 de 2018 y DNP (2022).

Lo ilustrado en la anterior tabla puede resumir la estrategia que como país se tiene para hacerle frente a la reducción de la pobreza, la reducción de las desigualdades y la búsqueda de mayor equidad en Colombia. En particular, se destaca el rol de entidades como el Ministerio de Salud y de Protección Social, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Departamento Administrativo de Prosperidad Social así como del Sector Administrativo de Presidencia de la República en la promoción del logro de los ODS en Colombia.

Los temas que lideran las entidades mencionadas anteriormente coinciden con el alcance y funciones previstas para el Ministerio de Igualdad y Equidad, al tiempo que se identifican 14 metas globales de ODS para las cuales no se definieron ni indicadores ni metas en el Documento CONPES 3918 de 2018 y que podrían ser lideradas desde el Sector Administrativo de Igualdad y Equidad en los próximos años, como por ejemplo las metas ODS relacionadas con la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas (meta ODS 16.7) o en materia de adoptar medidas para alcanzar mayor igualdad de oportunidades y de resultados en el país (meta ODS 10.3).

#### 1.2.4 Análisis de Capacidades



## Tecnológicas

La función moderna de tecnologías de información y comunicaciones debe de ser entendida bajo un enfoque de transversalidad y que aporte al cumplimiento de la misionalidad institucional en las entidades del Gobierno.

En perspectiva de lo anterior, y para confluir con los lineamientos generales, desde los cuales se ha iniciado la estructuración del Ministerio de Igualdad y Equidad; se analizaron desde un alto nivel diferentes dominios TIC, de algunas entidades del Gobierno nacional que entre sus funciones abarcan el diseño e implementación de políticas públicas con enfoque poblacional, de sujetos especiales de derecho, y que pretenden derribar barreras históricas de acceso a bienes, servicios y oportunidades para las personas y comunidades más excluidas e insertas en ciclos de vulnerabilidad y abandono.

Para efectos de este análisis se tomarán como ejemplo las entidades adscritas al sector de Inclusión Social y Reconciliación, ya que son entidades complementarias con el Ministerio de la Igualdad y Equidad, en el propósito de fijar rutas de atención y articular los esfuerzos interinstitucionales, partiendo de las capacidades ya instaladas y operativas del Sector de Inclusión Social y Reconciliación en el Gobierno Nacional.

- *Relación Presupuestal y Estructura Orgánica*

Partiendo del análisis realizado y de la existencia de Oficinas o Direcciones TIC en entidades del Gobierno nacional que diseñan, planifican e implementan políticas públicas con enfoque poblacional y diferencial, a continuación se relacionan algunas entidades públicas, en cuya estructura organizacional se prevé la atención en materia de tecnologías de información y comunicaciones y sus presupuestos asignados.

**Tabla 14. Estructura orgánica vs Presupuesto asignado**

Entidad del Gobierno nacional	Estructura orgánica función TIC	Presupuesto de inversión asignado 2023
ICBF	Dirección de Información y Tecnología con reporte al Director(a) General de la Entidad	\$68.692.500.000
DPS	Oficina de Tecnologías de Información con reporte al Director(a) General de la Entidad	\$6.000.000.000
UARIV	Oficina de Tecnologías de Información	\$30.341.344.654

Entidad del Gobierno nacional	Estructura orgánica función TIC	Presupuesto de inversión asignado 2023
	con reporte al Director(a) General de la Entidad	

Fuente: elaboración propia con base en SPI-DNP 2023

Respecto de la asignación presupuestal, la ejecución de los recursos y estructura orgánica de cada una de la direcciones u oficinas TIC, se destaca lo siguiente:

- Para apalancar la función de tecnología, cada una de las entidades cuenta con un proyecto de inversión, con el cual ejecutan los programas y proyectos de análisis, diseño e implementación de soluciones tecnológicas.
- Cada una de las entidades cuenta con recursos asociados al rubro de funcionamiento, con el cual despliegan sus funciones operativas de tecnologías de información.
- Con el fin de complementar el rubro de tecnologías de información, algunos programas misionales de las entidades identificadas realizan inversiones en TIC, para equilibrar las necesidades que en la mayoría de los casos no son plenamente cubiertas por el presupuesto asociado a tecnologías de información, bien sea por inversión o por funcionamiento.
- En las entidades analizadas, la función de tecnologías de información se despliegan mediante la conformación de oficinas y direcciones de tecnologías de información, las cuales reportan de manera directa a los directores o directoras generales de las entidades, y a su vez, a los responsables de las jefaturas, direcciones u oficinas TIC, y también hacen parte de los comités directivos e institucionales en cada una de las entidades.
- *Identificación de Habilitadores Tecnológicos*

Con el propósito de contar con un panorama de los habilitadores tecnológicos que gestionan información de las poblaciones sujeto de atención por parte de las entidades analizadas y que pueden confluir con la misionalidad del Ministerio de Igualdad y Equidad, se relacionan los principales habilitadores tecnológicos que se encuentran en producción a la fecha, en las entidades del sector mencionado:

**Tabla 15. Habilitadores tecnológicos identificados**

Entidad del Gobierno o Nacional	Habilitador tecnológico	Objetivo	Población Objeto
ICBF	CUENTAME	Sistema de información para el registro y seguimiento a la atención de beneficiarios del ICBF.	Niños, niñas y adolescentes sujetos de atención del instituto.
	SIM	Sistema de información misional para el registro de las acciones realizadas para la prestación de los servicios ICBF.	Niños, niñas y adolescentes sujetos de atención del instituto.
DPS	SIFA	Sistema de información de transferencias monetarias condicionadas, en donde se gestionan los beneficiarios al programa de Familias en Acción.	Familias en situación de pobreza y pobreza extrema con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.
	SIJA	Sistema de información de transferencias monetarias, en donde se gestionan los beneficiarios al programa de Jóvenes en Acción.	Jóvenes entre 14 y 28 años focalizados.
	Devolución IVA	Sistema de información en donde se gestionan los beneficiarios al programa.	Hogares focalizados.
	Ingreso Solidario	Sistema de información en donde se gestionan los beneficiarios del programa.	Hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y en condición de vulnerabilidad económica.
	Colombia Mayor	Sistema de información en donde se gestionan los beneficiarios del programa.	Adultos mayores.
	KOKAN	Sistema de información en donde se gestionan los beneficiarios a los programas de inclusión productiva y seguridad alimentaria.	Población en condición de vulnerabilidad en pobreza y pobreza extrema. Hogares de comunidades indígenas y afrocolombianas de

Entidad del Gobierno o Nacional	Habilitador tecnológico	Objetivo	Población Objeto
			especial protección constitucional. Víctimas de la violencia.
	Infraestructura social y Hábitat	Sistema de información en donde se gestionan los proyectos de infraestructura social y productiva	Entidades territoriales.
	UNIDOS	Sistema de información en donde se gestiona los beneficiarios de la estrategia UNIDOS.	Población en condición de pobreza y pobreza extrema.
UARIV	VIVANTO	Sistema de información de consulta de información consolidada de las víctimas de la violencia	Víctimas de la violencia.
	SGV	Sistema de gestión para las víctimas en donde se registra y gestiona la información de las víctimas de la violencia.	Víctimas de la violencia.
	RUV	Sistema de información de registro único de víctimas de conflicto.	Víctimas de la violencia.

Fuente: elaboración propia

Respecto de los habilitadores tecnológicos y la gestión de información, se destaca lo siguiente:

- Existen habilitadores tecnológicos (sistemas de información) que ayudan en la misionalidad de las entidades y son construidos a la medida, de acuerdo con los requerimientos y enfoques de tipos de atención.
- Los sistemas de información identificados son catalogados como legados<sup>36</sup> y

<sup>36</sup> Los legados son sistemas de información altamente acoplados a las necesidades específicas de las entidades, que han venido operando desde hace varios años en dichas entidades y que siguen evolucionando según los cambios y prioridades que se vayan dando en la entidad. Es importante precisar que no se trata de sistemas comerciales sino de sistemas institucionalizados en las entidades.

brindan flexibilidad a las entidades para su evolución y cambios, de acuerdo con nuevos lineamientos de política pública.

- Varios de los sistemas de información descritos, cuentan con un componente orientado a la focalización poblacional o para los sujetos de atención de cada entidad.
- Los registros almacenados en varios de los sistemas de información pueden contener y compartir datos asociados a los mismos beneficiarios con perspectivas de atención diferenciales.
- El gobierno de los datos, su calidad, seguridad y tratamiento, está bajo la responsabilidad de cada una de las entidades gestoras y propietarias de la información y de los registros administrativos almacenados en los sistemas de información.
- La infraestructura tecnológica de cada una de las entidades analizadas, es definida y gestionada de manera autónoma, según los requerimientos, capacidades necesarias y presupuestos asignados.
- A nivel de decisiones entorno a las tecnologías a utilizar por cada una de las entidades analizadas, se preserva la autonomía y se privilegia la toma de decisiones sobre las inversiones en TIC, según los planes estratégicos y tecnologías de información con los que cuentan cada una de las entidades.

### Presupuestales

En el Gobierno Nacional el gasto para reducir las brechas de igualdad y equidad está disperso en múltiples sectores, bajo líneas programáticas que, siendo complementarias, actúan de manera separada. Esta desarticulación sustenta la necesidad de una institucionalidad que aporte lineamientos, articulando y coordinando la oferta institucional, a la vez que ejecutando acciones específicas desde el Gobierno nacional alrededor de la igualdad y la equidad.

Para entender cómo está disperso todo el presupuesto relacionado con la igualdad y la equidad en el Presupuesto General de la Nación, se presenta, a continuación, un mapa de gastos cuyo propósito es identificar el presupuesto que se encuentra programado en las entidades nacionales y que guarda relación con las funciones y los ámbitos de competencia del Ministerio de Igualdad y Equidad definidos en el artículo 5 de la Ley 2281 de 2023. Este presupuesto, de ser ejecutado de manera articulada y coordinada, podría tener un mayor impacto en las poblaciones y territorios marginados.

Son 17 los Sectores que contemplan inversiones relacionadas con igualdad y equidad con un presupuesto asignado en 2023 cercano a los \$15,6 billones. Se observa que el 97,5% de los recursos del Presupuesto General de la Nación asociados a las temáticas

y poblaciones que determina la Ley 2281 de 2023 se concentran en solo cuatro sectores, que son Inclusión Social y Reconciliación (91,2%), Agricultura y Desarrollo Rural (3,4%), Hacienda (1,7%) e Interior (1,1%).

**Tabla 16. Recursos identificados para Igualdad y Equidad por sector, monto y participación porcentual (cifras en pesos corrientes)**

Sector	Monto identificado	Participación %
Inclusión Social y Reconciliación	14.237.054.895.023	91,2%
Agricultura y Desarrollo Rural	525.388.436.127	3,4%
Hacienda	269.509.505.692	1,7%
Interior	170.389.241.333	1,1%
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición	92.655.954.379	0,6%
Salud y Protección Social	83.780.412.068	0,5%
Presidencia de la República	83.116.262.144	0,5%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	40.107.990.927	0,3%
Trabajo	35.581.867.493	0,2%
Rama Judicial	27.983.891.940	0,2%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	11.000.000.000	0,1%
Educación	9.758.577.956	0,1%
Justicia y del Derecho	6.880.000.000	0,04%
Cultura	6.448.457.924	0,04%
Registraduría	5.268.606.821	0,03%
Fiscalía	3.901.000.000	0,02%
Relaciones Exteriores	700.000.000	0,004%
Total general	15.609.525.099.827	100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DNP, MHCP. Cifras en pesos corrientes. Incluye gastos de inversión y fondos sin personería jurídica.

En lo que se refiere a la participación de las poblaciones, es importante destacar que algunos proyectos atienden diferentes categorías de la Ley 2281 de 2023 mediante la cual se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad. Dentro de este análisis, el 48,5% de los recursos se concentran en programas para la niñez, infancia y adolescencia, que en términos de atención no educativa se asocian al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF.

Asimismo, se identifica el presupuesto de un producto específico del PGN, relacionado con la entrega de recursos (transferencias) a la población en condición de pobreza y pobreza extrema (30%) y Adultos Mayores (11,6%). De ahí que, una primera conclusión sea la importancia del relacionamiento entre el Ministerio de Igualdad y Equidad con la entidad que hoy coordina ese presupuesto, el Departamento para la Prosperidad Social -DPS. En el marco del ejercicio, también es evidente la participación de recursos para Pueblos Afrodescendientes, Negros, Raizales, Palenqueros, Indígenas y Rrom (5,8%).

Las anteriores cuatro categorías (participación de las poblaciones, población en condición de pobreza y pobreza extrema, adultos mayores, y Pueblos Étnicos) representan en total el 95,9% de los recursos identificados con \$15 billones.

En ese orden de ideas, es importante destacar que con la información disponible, algunas poblaciones no se logran identificar en el ejercicio como son los habitantes de calle y la población LGBTIQ+, lo que también permite orientar los principales esfuerzos del Ministerio de Igualdad y Equidad hacia una población que hoy no cuenta con proyectos específicos en el PGN para atender sus necesidades.

**Tabla 17. Recursos identificados para Igualdad y Equidad por población principal o temática (cifras en pesos corrientes)**

Poblaciones	Monto identificado	Participación
Niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad	7.575.767.845.643	48,5%
Miembros de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema	4.690.021.180.126	30%
Adultos mayores	1.812.314.615.465	11,6%
Pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y Rrom	912.985.882.610	5,8%
Varias poblaciones*	252.457.049.791	1,6%
Jóvenes	208.914.000.000	1,3%
Mujeres en todas sus diversidades	65.214.424.759	0,4%
Campesinos y campesinas	40.000.000.000	0,3%
Personas con discapacidad	32.311.751.433	0,2%
Cambio climático	11.000.000.000	0,1%
Migrantes	8.538.350.000	0,1%
<b>Total general</b>	<b>15.609.525.099.827</b>	<b>100,0%</b>

\*Gastos que no se destinan a una población específica pero que pueden intervenir en cualquiera de las otras poblaciones. Fuente: Elaboración propia a partir de datos DNP, MHCP. Cifras en pesos corrientes. Incluye gastos de inversión y fondos sin personería jurídica.

A partir de una propuesta de agregados temáticos relacionados con la misionalidad del Ministerio de Igualdad y Equidad, se presenta un detalle general de los gastos identificados bajo esta clasificación donde, para los servicios entregados a la población se destinan cerca de \$6,8 billones, es decir un 44% del total identificado que se priorizan principalmente a la atención integral de la primera infancia por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, el fortalecimiento de la infraestructura social y hábitat del Departamento para la Prosperidad Social -DPS y la implementación de programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas de la Agencia Nacional de Tierras -ANT.

En segundo lugar, el eje temático de pobreza, con una participación del 38% sobre el total de los recursos identificados en materia de igualdad y equidad, son orientados especialmente a programas de transferencias condicionadas y no condicionadas, y de atención al adulto mayor.

**Tabla 18. Recursos identificados para Igualdad y Equidad por ejes temáticos**  
(Cifras en pesos corrientes)

Eje temático	Monto identificado	Participación
Servicios entregados a la población	6.846.689.695.340	44%
Pobreza	5.944.332.590.518	38%
Prevención o protección	2.311.146.547.195	15%
Lineamientos de enfoques diferenciales en políticas públicas	220.459.823.401	1%
Fortalecimiento procesos organizativos / participación	203.584.691.940	1%
Cambio climático	51.000.000.000	0,3%
Atención a la discapacidad	32.311.751.433	0,2%
<b>Total general</b>	<b>15.609.525.099.827</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DNP, MHCP. Cifras en pesos corrientes. Incluye gastos de inversión y fondos sin personería jurídica.

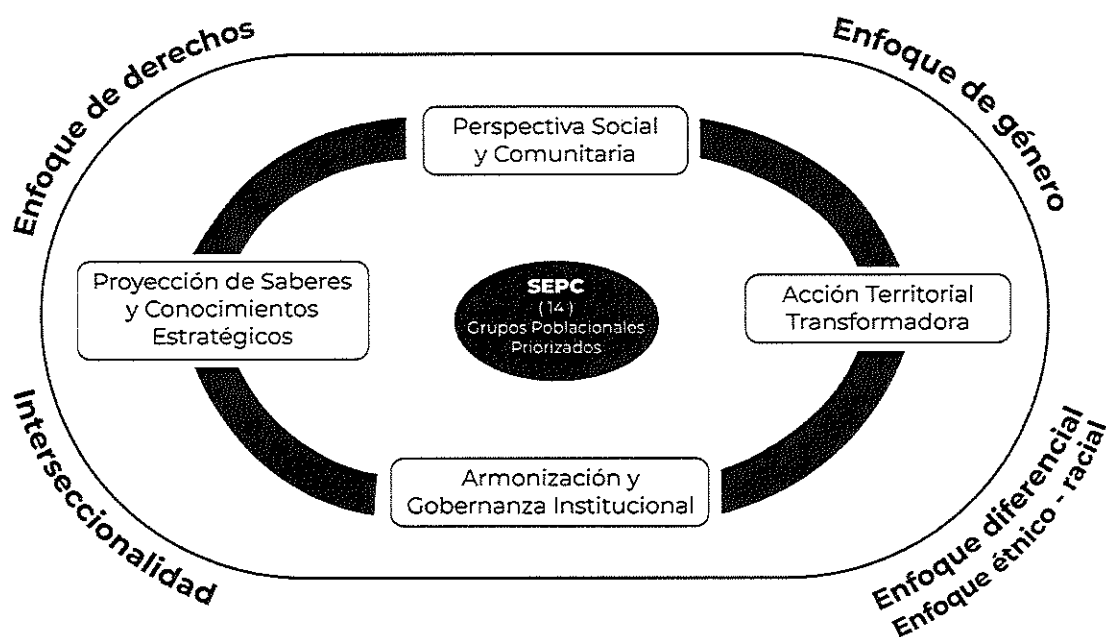


## 2. DISEÑO DE LA PROPUESTA

### 2.1 CADENA DE VALOR: RESULTADO

Se realizaron múltiples actividades entre la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Con estos insumos se diseñaron el Modelo de Operación (Ilustración 5), la Cadena de Valor (Ilustración 6) y el mapa de Procesos (Ilustración 7) del Ministerio de Igualdad y Equidad y del sector.

*Ilustración 4. Modelo de operación del Ministerio de Igualdad y Equidad*



Fuente: elaboración propia.

El Modelo de Operación (Ilustración 4) representa, en el nivel exterior, los enfoques transversales para el Ministerio: el de derechos, el de género, la interseccionalidad, el enfoque diferencial y el étnico-racial. Más adentro están representados cuatro procesos principales. El primero es la Proyección de Saberes y Conocimientos Estratégicos, por medio de los cuales se gestiona el conocimiento y se articula y

coordina la generación de información y datos que permitan entender las dimensiones de las desigualdades e inequidades, cómo interactúan entre sí, cuáles son los vacíos de conocimiento y de aplicación de políticas y cuáles son las estrategias que funcionan para el cierre de brechas de desigualdad e inequidad. Este proceso implica poner a conversar a saberes y conocimientos de distintos marcos epistemológicos que permitan un abordaje amplio de las diversidades que le competen a este ministerio.

El segundo macroproceso es el de la Perspectiva Social y Comunitaria, el cual se debe distinguir de mecanismos de participación, los cuales se concluyeron que debían seguir siendo resorte del Ministerio del Interior. Este proceso permite incluir las perspectivas de pueblos y comunidades, tanto para que dialoguen con los saberes y conocimientos sobre las desigualdades e inequidades, como para que orienten las transformaciones de los territorios y la manera como el Ministerio se armoniza con otros sectores y entidades territoriales.

El tercer macroproceso es la Acción Territorial Transformadora. A través de este proceso se busca cumplir las funciones de ejecución de planes, programas y proyectos del Ministerio, con un enfoque territorial. La llegada de estas acciones a los territorios se construirán a través de saberes y conocimientos, que junto con la perspectiva social y comunitaria, permitan la formulación de soluciones adecuadamente focalizadas y territorializadas de manera interseccional.

El cuarto macroproceso es la Armonización y Gobernanza Interinstitucional. Varias funciones del Ministerio de Igualdad y Equidad requieren acciones de articulación y coordinación entre sectores y con entidades territoriales. También requieren análisis y avances en los marcos normativos, los cuales requerirán de capacidades específicas de interacción con entes legislativos en el orden nacional y territorial.

Aplicando estos cuatro procesos se diseñó una cadena de valor (Ilustración 6), que permite anticipar los impactos que puede tener este Ministerio. Uno de los principales impactos del Ministerio sería el incremento de niveles de calidad de vida que permitieran afirmar que se está consiguiendo vivir en condiciones más dignas. La segunda es la conexión que se propone entre el cierre de brechas de desigualdad e inequidad, el aumento de la cohesión social y la consecución de la paz total. El tercer impacto principal sería el avance en la garantía de los derechos de las personas, los cuales están fundamentados en principios de igualdad y equidad.

***Figura 5. Cadena de Valor del Ministerio de Igualdad y Equidad***



Fuente: Elaboración propia

La Cadena de Valor del Ministerio de Igualdad y Equidad (Figura 5) se sustenta en los siguientes componentes:

### 1. Entradas o Insumos.

Las principales entradas o insumos para el Ministerio de Igualdad y Equidad son los 14 grupos poblacionales del ámbito de competencias del Ministerio. Cada grupo poblacional cuenta con una profunda carga conceptual que hace del Ministerio un espacio administrativo único donde se tendrá que abordar problemáticas complejas que históricamente habían sido relegadas a la periferia de las sociedad. Otro insumo son los enfoques del Ministerio, los cuales le confieren otro nivel de complejidad y obligan a la carga conceptual a interactuar para resultar en soluciones complejas que puedan encontrar nuevas soluciones a problemas crónicos y huérfanos.

### 2. Procesos definidos para el Ministerio.

Los procesos principales definidos para el Ministerio de Igualdad y Equidad son la Proyección de Saberes y Conocimientos Estratégicos, la Perspectiva Social y Comunitaria, la Acción Territorial Transformadora y la Armonización y Gobernanza Institucional; estos procesos serán descritos a mayor profundidad en la Sección 2.2.

### 3. Productos.

La oferta institucional del Ministerio tendrá como principal producto el cierre de brechas de desigualdad e inequidad, así como la eliminación de las discriminaciones. El Ministerio también ofrecerá como productos la intervención integral y efectiva en los territorios; políticas, planes, programas y proyectos priorizados y focalizados utilizando saberes y conocimientos estratégicos; la promoción y fortalecimiento de capacidades para la participación y el diálogo social, incluyendo asistencia técnica para la igualdad territorial; el apoyo a alianzas público populares y comunitarias y la capacidad de generar mecanismos de coordinación, articulación e incidencia en los marcos normativos para lograr el cierre de brechas, entre las que se incluyen las de ingresos (e.g. reducción de pobreza) y la de acceso a recursos (e.g. agua potable y saneamiento básico).

**4. Efectos.**

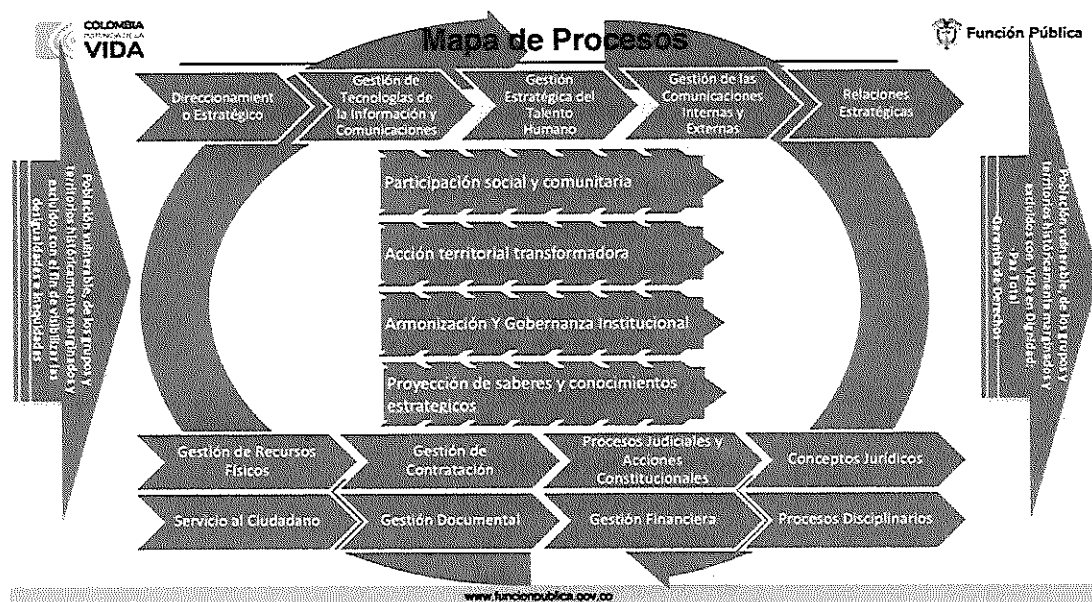
Se pretende lograr una distribución más igualitaria y equitativa de las oportunidades y los recursos. A su vez, que algunas condiciones de vulneración y falta de garantía de los derechos de las personas se reduzcan (e.g. menos personas en situación de calle, erradicación del racismo y la discriminación). Las acciones se esforzarán por la erradicación de formas de violencia basada en género, la integración social y el cierre de brechas de acceso a recursos –especialmente con un enfoque territorial y entre áreas urbanas y rurales. A través de la adaptación igualitaria al cambio climático se implementarán soluciones de agua y saneamiento básico, entre otras, para prevenir que los estragos que cause el cambio climático aumenten las brechas de desigualdad, tal como se viene anticipando.

**5. Impactos.**

Los impactos proyectados del Ministerio de Igualdad y Equidad están en el corazón de la iniciativa por una paz total, entendiendo que las desigualdades e inequidades están asociadas con la falta de cohesión social, que a la larga desencadena en violencia. El Ministerio también propende por conseguir la garantía de los derechos de los grupos poblacionales de su ámbito de competencias. Esta materialización de los derechos resulta en las condiciones de dignidad de la vida que son el fin último de la entidad.

## **2.2 CADENA DE VALOR: PROCESOS**

*Figura 6. Mapa de Procesos*



Fuente: Elaboración Propia

Los procesos que llevará a cabo el Ministerio de Igualdad y Equidad tendrá el mapa de procesos presentado en la Ilustración 7. Estos procesos mantienen el modelo de operación de manera en que el Despacho de la Ministra o el Ministro dará las directrices y se encargará de la gestión de los Saberes y Conocimientos Estratégicos, de liderar la Armonización y Gobernanza interinstitucionales; mientras tanto, los Viceministerios liderarán la atención a la Perspectiva Social y Comunitaria, y las direcciones serán las encargadas de ejecutar la Acción Territorial Transformadora. Los cuatro macroprocesos ocurrirán en las Direcciones Territoriales. El Despacho se encargará, a través de sus oficinas, de garantizar la interseccionalidad de las acciones y construcción de políticas que se diseñen desde los Viceministerios y Direcciones.

MACROPROCESO	PROPÓSITO	DEPENDENCIA LÍDER
Proyección de Saberes y Conocimientos Estratégicos	Gestión de datos, saberes y conocimientos para la generación de insumos, diagnósticos y análisis que permitan la formulación de políticas, planes, programas y proyectos aplicando los enfoques del Ministerio,	Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos

	especialmente la interseccionalidad	
Armonización y Gobernanza Institucional	Relacionamiento con otros sectores, con entes territoriales y con otras ramas del poder, para establecer la agenda de igualdad y equidad en la formulación de políticas y marcos normativos.	Despacho de la Ministra y Oficina Jurídica
Perspectiva Social y Comunitaria	Incorporación de las voces, priorizaciones y recomendaciones de la ciudadanía para los demás procesos del Ministerio.	Viceministerios
Acción Territorial Transformadora	Puesta en marcha, ejecución y despliegue territorial de las acciones que lleva a cabo el Ministerio, así como las acciones conseguidas a través de gestiones de articulación y coordinación intersectorial	Departamentos

### 2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Actualmente, de conformidad con el artículo 11 de la ley 2281 del 4 de enero de 2023, por medio de la cual se creó el Ministerio de Igualdad y Equidad, la estructura interna preliminar de la entidad, es la siguiente:

1. Despacho de la Ministra o el Ministro.
  - 1.1. Oficina de Control interno.
  - 1.2. Oficina Asesora de Planeación.
  - 1.3. Oficina Asesora Jurídica.
  - 1.4. Oficina Asesora de Comunicaciones.

- 1.5. Oficina Asesora de Control interno Disciplinario.
- 1.6. Oficina de Tecnologías y Sistemas de información.
- 1.7. Direcciones Departamentales.
- 2. Despacho de la Viceministra o el Viceministro.
- 3. Despacho de la Viceministra o el Viceministro.
- 4. Despacho de la Viceministra o el Viceministro.
  - Direcciones misionales.
- 5. Secretaría General.
  - 5.1. Subdirección de Talento Humano.
  - 5.2. Subdirección Administrativa y Financiera.
  - 5.3. Subdirección de Contratación.
- 6. Órganos de Asesoría y Coordinación.
  - Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
  - Comité de Control Interno.
  - Comisión de Personal.

Para garantizar el flujo del modelo de operación que se defina para el Ministerio y para darle nombre a las dependencias que se encargarán de las funciones y procesos del Ministerio, el Presidente de la República ajustará esta estructura en uso de sus facultades permanentes consagradas en el artículo 189 numerales 16 y 17 de la Constitución Política. La facultad del Presidente de la República para modificar la estructura inicial de este Ministerio de esta estructura inicial fue evaluada por la Oficina Jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual emitió concepto favorable que se adjunta en los Anexos.

La estructura a proponer debe responder a necesidades latentes en el territorio nacional para cada una de las poblaciones objeto del Ministerio, algunas de las cuales presentadas a continuación, a manera de ejemplo.

## **Mujeres**

La autonomía significa para las mujeres, contar con la capacidad y con las condiciones concretas para tomar libremente decisiones que afectan sus vidas, según la definición del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL. La autonomía económica en particular, comprende para las mujeres la capacidad de generar recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado, oportunidades económicas en igualdad de condiciones que los hombres. También considera el uso del tiempo y la contribución de las mujeres en la economía.

La necesidad de fortalecer la institucionalidad para la autonomía económica de las mujeres responde a las brechas y barreras que se presentan para el acceso de las

mujeres a oportunidades económicas con el fin de avanzar en la garantía de derechos económicos de las mujeres en toda su diversidad.

En el ámbito laboral y de empleabilidad, las mujeres trabajadoras se concentran en sectores económicos y ocupaciones de menor productividad y menores niveles de ingresos; existe la segregación vertical y las brechas salariales, las mujeres reciben 12.1% menos ingresos por la remuneración de su trabajo que los hombres. Los hombres participan más que las mujeres en el mercado laboral formal con una tasa global de participación del 76.7%, frente al 51,6% que registra el DANE para las mujeres. La tasa de desempleo para las mujeres es 5,1 puntos mayor que la de los hombres. La población Fuera de la Fuerza del Trabajo en Colombia son en total 14.2 millones de personas, de las cuales 9.9 millones son mujeres, es decir casi el 70%.

Las brechas en la ruralidad son más amplias entre hombres y mujeres, así: La tasa global de participación fue de 79,6% para los hombres frente al 41,1% de las mujeres, marca una diferencia de 38,5 puntos porcentuales. La tasa de desempleo los hombres presentan una tasa del 5,8% y las mujeres de 14,9%, presentándose una diferencia de menos 9.1 puntos porcentuales. En América Latina para el 2017 por cada 100 hogares empobrecidos donde la cabeza de hogar es un hombre, hay 113 hogares empobrecidos donde la jefatura es ejercida por una mujer.

Para el índice de pobreza extrema, por cada 100 hogares con jefatura de hombres hay 108 de con jefatura de mujeres. Teniendo en cuenta el registro de los datos, es probable que la pandemia del COVID 19 haya profundizado estas cifras, en virtud que el mayor impacto económico de la crisis de salud global lo recibieron las mujeres. Por otro lado, la incidencia de la pobreza monetaria es mayor en los hogares con jefatura femenina, En 2021, mientras que 43 % de los hogares con jefatura femenina estaban en pobreza monetaria, 37 % de los hogares con jefatura masculina se encontraban en esta situación. Las anteriores cifras y datos dan soporte al concepto de feminización de la pobreza, resumido en la sobre representación de las mujeres en la franja de la población más vulnerable, empobrecida y rezagada del país y la región.

En general, existen también evidencia documentada de las brechas para el éxito de los emprendimientos liderados por mujeres, que se resumen en déficits en la implementación de metodologías de acompañamiento innovadores, el frágil posicionamiento de liderazgos y referentes de éxito de emprendimientos liderados por mujeres y la baja “sofisticación” tecnológica en los procesos productivos y comerciales. También se registra una ausencia o debilidad de las redes de apoyo institucionales y de cooperación, así como un sesgo en la oferta de capacitación para el fortalecimiento de los emprendimientos dirigida a contabilidad flujo de caja, elaboración de plan de



negocios y poca oferta con énfasis comercialización, marketing y aplicaciones tecnológicas. Aún así, el acceso de las mujeres a esta oferta es también limitado.

### **Personas en actividades sexuales pagas**

Para las personas en ejercicio de actividades sexuales pagas es necesario un espacio institucional permitirá la coordinación intersectorial requerida para impulsar medidas legislativas y reglamentarias de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La Corte se ha manifestado al respecto en varias sentencias y ha exhortado al Estado a que cree medidas que permitan proteger y garantizarles sus derechos a las personas que ejercen estas actividades, cuyos derechos suelen ser nulos o precarios.

Las personas en estas actividades tienen un déficit en la garantía de sus derechos sociales y las tutelantes suelen ser mujeres, cabeza de familia, desempleadas que “han acudido a esta alternativa en medio de la necesidad apremiante de resolver necesidades urgentes para ellas y sus hijos menores de edad, las cuales no pueden esperar, tal como sucede con la alimentación” (T-310 de 2022). De manera que, al ser sujetos de especial protección en una situación de vulnerabilidad, es deber del Estado compensar esa desigualdad a través de acciones afirmativas asociadas a la política social y económica, y ratificar la intención de construir un país con justicia social y libre de violencias, estereotipos y prejuicios.

### **Población LGBTIQ+**

Las violencias y desigualdades motivadas por prejuicio hacia las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas (OSIEGNH) en el país no cesan y han variado en cifras durante los últimos años. Con una amplia posibilidad de sub-registros, se encuentra que en el año 2022 al menos se registraron 148 casos de homicidios presuntamente relacionados con violencias por prejuicios.

Esta cifra hace referencia a casos de homicidios, feminicidios y transfeminicidios en los cuales 49 de ellos corresponden a personas con experiencia de vida trans, 47 de ellos a hombres gais, 14 a mujeres lesbianas, 10 a hombres bisexuales, 4 a mujeres bisexuales, 15 a otras identidades y 6 permanecen sin especificar. Además, se identificaron 104 casos de violencia policial, 3.527 amenazas y 1.725 casos de discriminación y hostigamiento. Lo anterior, da un total de 5501 casos de violencia a razón de OSIEG no hegemónicas en Colombia durante el año 2022 . Otro informe de organizaciones sociales identificó los mismos 148 homicidios por prejuicio durante el

2022 . Del total nacional, se encontró que el 56,1% de las víctimas tenían entre 27 y 59 años y 8 de los casos fueron perpetrados contra personas dedicadas a actividades sexuales pagas.

Según información de la Defensoría del Pueblo , en el año 2022 se acompañaron y guiaron 394 casos de violencia hacia personas OSIEGNH en relación a actos de violencia por prejuicio. De estas personas, 164 fueron mujeres trans, 123 hombres gais, 61 mujeres lesbianas, 21 personas bisexuales, 23 hombres trans y 2 personas intersexuales. Estas atenciones se centraron en casos de violencia física (94 casos), psicológica (211 casos), violencia sexual, (27 casos) y violencia económica/patrimonial (30 casos). Cabe mencionar que, de los casos atendidos, el 91.4% fueron personas de Colombia, un 8.4% de Venezuela y el 0.3% de Perú. En los años previos, entre 2019 y 2020, Colombia Diversa identificó 443 amenazas, 333 homicidios y 284 casos de violencia policial contra personas OSIEGNH.

Lo anterior deja en evidencia el estado de desprotección en que se encuentran las personas con OSIEGNH. Las medidas implementadas por parte del Estado hasta el momento no han sido suficientes para garantizar una vida digna, seguridad y bienestar para esta población. Por lo cual, se hace necesario poner en marcha un observatorio estatal que pueda dar seguimiento a casos, instar al fortalecimiento institucional en relación con los procesos de investigación, acompañar a las víctimas y trabajar en conjunto con instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil para la garantía y acceso a la justicia. Esto se suma a la necesidad de crear mecanismos articulación para atención de las violencias por prejuicio para evitar el subregistro de casos y prevenir próximos escenarios de violencias contra este grupo poblacional, lo cual se contempló en el Plan nacional de desarrollo.

A los datos anteriormente mencionados se suma que las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas encuentran a una serie de barreras para el acceso a derechos básicos como educación, empleo, salud, participación, nombre, familia, entre otros. La protección a la defensa de los derechos humanos es el deber de todos los Estados, especialmente la protección de los derechos de niños, niñas, niños y adolescentes con OSIEGNH.

La garantía en el acceso a derechos y oportunidades es una necesidad y, por ende, es clave poder contar con un espacio de representación y articulación con entidades nacionales, territoriales y sociedad civil. Históricamente se ha hablado sobre la población OSIEGNH desde una visión de subalternidad, desconociendo sus experiencias de vida y potencialidades. Por ende, es de suma relevancia que, en el Ministerio de Igualdad y Equidad, donde efectivamente se trabajará por la igualdad de

derechos y accesos, se cuente con una dependencia enfocada en los derechos de las personas con orientaciones sexuales y identidades de género no hegemónicas.

## **Personas con discapacidad**

Según la ley 1145 de 2007, mediante la cual se crea el Sistema Nacional de Discapacidad – SND, Colombia ha clasificado a la población con discapacidad en los siguientes 7 tipos: discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad física, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial, discapacidad múltiple, y Sordoceguera. Según el censo de población y vivienda de 2018, Colombia tiene 49.8 millones de habitantes, de los cuales 3.1 millones tienen algún tipo de dificultad para realizar actividades básicas diarias, y el 4.07% de ellos presenta mayor severidad.

Desde la Constitución Política de Colombia se reconoce la necesidad de proteger y garantizar, en igualdad de condiciones, los derechos de las personas con discapacidad. Desde la ratificación que hace Colombia en El 2009, mediante la ley 1346, a la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, se ha avanzado en la puesta en marcha de sus disposiciones, creando un marco normativo amplio y complejo en materia de discapacidad.

Según el Departamento Nacional de Planeación, el avance legislativo conseguido es un paso significativo para derribar obstáculos que históricamente enfrentaron las personas con discapacidad. La experiencia de las organizaciones, entidades nacionales e internacionales, coinciden en reconocer que el país cuenta con una institucionalidad, normatividad y política pública sólida para asumir los retos de la agenda de derechos de la población con discapacidad, a tono con los estándares en derechos humanos contemporáneos. Ello se refleja en la existencia de lineamientos, legislación, actos administrativos, mecanismos, actividades, recursos, programas e instituciones, incluyendo el Sistema Nacional de Discapacidad (SND) y su grupo técnico (GES), documentos de política social (CONPES 80 de 2004 y 166 de 2013), un programa presidencial, unos presupuestos asignados y proyectos en curso.

La complejidad y la evolución en la manera de asumir y abordar la discapacidad a nivel mundial ha generado la conjunción de múltiples actores que, en principio busca una respuesta integral desde el Estado. Sin embargo, esta misma multiplicidad de actores obliga la existencia de un ente central coordinador que, con un nivel jerárquico, oriente y articule las acciones, responsabilidades y modelos de intervención que sean coherentes con el reconocimiento de la discapacidad como parte de la diversidad humana.

A pesar de que Colombia ha ido trascendiendo en pro de adecuar su institucionalidad para hacer efectivo el goce de los derechos de las personas con discapacidad, los esfuerzos realizados por los gobiernos nacionales han dejado en evidencia la necesidad de contar con una mayor competencia, en la toma de decisiones y aplicación de medidas necesarias que garanticen la convergencia de acciones de las diferentes entidades, para lograr los estándares que aseguren el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.

## Cuidado

Según las proyecciones del DANE-CENSO (2018) en Colombia hay 16.892.816 millones de personas que requieren cuidado o apoyo para su desarrollo diario. En este universo se encuentran los siguientes grupos poblacionales:

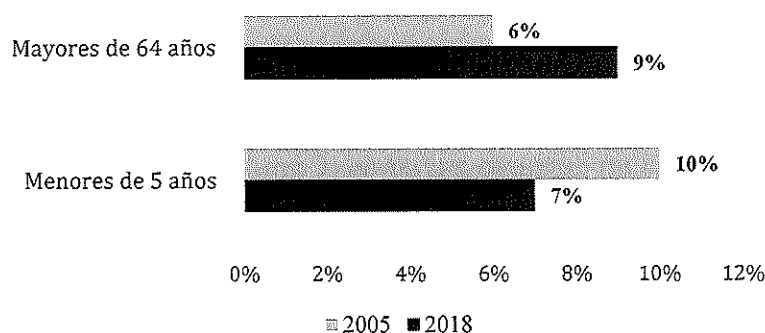
*Tabla 19. Población que requiere cuidado o apoyo para su desarrollo diario*

POBLACIÓN	NÚMERO DE PERSONAS
Total niñas, niños y adolescentes	9.983.605
-Primera Infancia (0 - 4)	3.037.781
-Infancia (5 - 9)	3.335.240
-Adolescencia (10 - 14)	3.610.584
Total personas con discapacidad	2.872.881
Total personas mayores de 65 años	4.036.330
<b>TOTAL</b>	<b>16.892.816</b>

Fuente: DANE-CENSO (2018)

A esto debe sumarse que el país enfrente la terminación del bono demográfico, lo que trae grandes retos en materia de cuidado, dado que cada vez la población mayor representa un porcentaje mayor dentro de la población total del país:

### Porcentaje de menores de 5 años y mayores de 64 años años 2005 y 2018



Fuente: DANE-CENSO (2018)

Sin embargo, la satisfacción de un o una cuidadoras de estas personas se realiza principalmente a través del trabajo de cuidado no pago de las mujeres más vulnerables del país, como consecuencia de las deficiencias en la oferta pública y los altos costos de los servicios privados de cuidado.

De acuerdo a las cifras del DANE (ECV,2021) y ENUT,2021), en el país hay más de 19 millones de mujeres que realizan a diario trabajos domésticos y de cuidado sin ninguna remuneración, de las cuales 7 millones lo hacen a tiempo completo y como actividad principal. En el país las mujeres destinan en promedio 7 horas y 44 minutos a estos trabajos sin ninguna remuneración mientras que los hombres destinan 3 horas y 6 minutos, es decir, 4 horas menos al día. Dadas estas sobrecargas de trabajo de cuidado las mujeres sufren de *pobreza de tiempo*.

Sumado a esto, persiste una cultura patriarcal donde el 69% de los hombres y el 66% de las mujeres siguen convencidos de la idea de que “*las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres*” (DANE-ENUT,2021). Transformar estos imaginarios asociados al género es una tarea fundamental para equilibrar las demandas de cuidado que hay en la sociedad.

Una de las causas probadas de la *feminización de la pobreza* es la *pobreza de tiempo* a la que se ven sometidas la mayoría de mujeres en el mundo. En Colombia casi 3 de cada 10 mujeres mayores de 15 años no cuenta con ingresos propios, a diferencia de 1 de cada 10 hombres. La mitad de las mujeres en edad de trabajar está fuera del mercado laboral. La tasa de desempleo de las mujeres es mayor a la de los hombres, particularmente para las jóvenes de 18 a 24 años. A pesar de ser mayoría en la población, su incorporación al mercado laboral es limitada y se enfrenta a fuertes

desigualdades: brecha salarial del 12,1%; solo un 2,4% son patronas o empleadoras mientras el 62% son trabajadoras por cuenta propia o empleadas; 60% se encuentra en la informalidad; y solo el 37% de las ocupadas cotizan a pensión (DANE, CPEM, ONU MUJERES, 2020).

Las mujeres tienen derecho a la autonomía económica y a la igualdad en el mercado laboral. De acuerdo al Foro Económico Mundial, de no intervenir esta situación, la brecha de género tardará en cerrarse 257 años (Como se cita en DANE, CPEM, ONU MUJERES, 2020). Ante esta realidad, Naciones Unidas y múltiples organismos internacionales han hecho un llamado a establecer programas estatales que permitan redistribuir los tiempos de cuidado de forma corresponsable para allanar el camino que permita aumentar la autonomía económica de las mujeres. El ODS 5.4 señala la necesidad de “Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia”.

Por este motivo el Gobierno Nacional aprobó mediante la Ley 2281 de 2023 la creación del Sistema Nacional de Cuidado (artículo 6) con el objetivo de promover una nueva organización social de los cuidados en el país y garantizar el bienestar de las personas que requieren cuidado al mismo tiempo que los derechos de las personas cuidadoras. Así mismo, la Ley 2294 de 2023 aprobó los artículos 72, 84 y 106, junto con las bases del Plan Nacional de Desarrollo, para garantizar la implementación de este Sistema en el sector urbano y rural del país, a través de: (i) la creación de una oferta institucional robusta para las personas que requieren cuidado y que cuidan; (ii) un modelo de gobernanza que incluya a los sectores responsables de las políticas sociales del Estado; (iii) un modelo territorial que permita materializar el sistema en los territorios a través de alianzas público-populares para los cuidados comunitarios; (iv) una estrategia de cambio cultural para la construcción de masculinidades cuidadoras; (v) un fondo como mecanismo de financiación; entre otros componentes del Sistema.

### **2.3.1 Análisis de Capacidades Tecnológicas**

Bajo la concepción y necesidades para el Ministerio de Igualdad y Equidad, es importante detallar los aspectos o componentes necesarios que debería tener en cuenta la gestión de tecnologías de información, con el fin de garantizar un marco de trabajo adecuado y que privilegie la toma de decisiones para la implementación de las tecnologías precisas y acorde a los retos de política pública y de proyección del nuevo Ministerio de Igualdad y Equidad.

Entre los aspectos a considerar en la implementación corporativa para la gestión TIC en el nuevo ministerio, se tiene:

1. Definir un proyecto de Inversión TIC.
2. Constituir la Oficina o Dirección TIC.
3. Definir un modelo de operación de TIC.
4. Definir esquemas de interoperabilidad.
5. Estructurar las funciones de tecnologías de información.
6. Definir un esquema de gestión de TIC.

A continuación, se describen los alcances de los anteriores ítems.

### Definir un proyecto de Inversión TIC

Basado en el funcionamiento del Estado colombiano, se propone la definición y conceptualización de un proyecto de inversión propio para la función de tecnologías de información del Ministerio de Igualdad y Equidad, contemplando bajo la metodología de marco lógico la definición del árbol de problemas, centrado en la gestión, articulación e interoperabilidad de diferentes fuentes de información para la generación de valor público. Lo anterior, buscando la solución a las posibles asimetrías de información que se puedan estar presentando debido al uso de habilitadores tecnológicos específicos y puntuales en cada una de las entidades que enfocan sus esfuerzos en parte de la población objetivo del Ministerio.

Para el planteamiento del proyecto de inversión se recomienda acoger los lineamientos brindados por el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, en cuanto a la aplicación de la política pública de gobierno digital<sup>37</sup>, así:

- Marco de arquitectura empresarial.
- Marco de interoperabilidad.
- Servicios ciudadanos digitales.
- Seguridad y privacidad de la información.
- Protección y tratamiento de los datos personales.
- Gestión estratégica de tecnología de información.

La estimación presupuestal del proyecto de inversión se dará en razón a las funciones asignadas y la estructura necesaria para la operación de la gestión tecnológica en el Ministerio.

---

<sup>37</sup> Decreto 767 del 2022 por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

### Constituir la Oficina o Dirección TIC

Acogiendo las mejores prácticas y recomendaciones dadas desde el Departamento Administrativo de Función Pública y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones<sup>38</sup>, se propone la creación de una instancia de direccionamiento estratégico y operación de tecnologías de información y comunicaciones, mediante la puesta en marcha de una oficina o dirección TIC, que dependa directamente del despacho ministerial, haciendo parte del comité directivo del Ministerio e incorporando la estrategia y gestión tecnológica como componente esencial en el diseño y definición del nuevo Ministerio. Dicha instancia debe encargarse de liderar los procesos de transformación digital pública y de la implementación de las acciones de gobierno digital y agenda digital del nuevo Ministerio.

Esta oficina contará con un modelo de operación de TIC y gobierno de información que recojerá las capacidades ya generadas e implementadas en diferentes entidades del Gobierno nacional y que de alguna manera dan respuesta a la misionalidad, funciones y que hacer del nuevo Ministerio, buscando la articulación de esfuerzos con las entidades aliadas.

### Definir un esquema de gestión de TIC

Se definirá un esquema de gestión basado en procesos, los cuales se soportan con una acción efectiva para la incorporación de modelos de gestión de la demanda. La definición del esquema de gestión podría basarse en mejores prácticas y recomendaciones de marcos de trabajo como lo es el marco de trabajo para la gestión de objetivos de control de TI (COBIT<sup>39</sup>).

El cual en su versión 5.0 contempla la generación de valor público con TI y esquematiza desde la estrategia TIC, pasando por cada uno de los procesos transversales para llegar a la entrega de bienes y servicios basados en tecnologías de información y comunicaciones; con la medición y el retorno coherente para los tomadores de decisiones.

---

<sup>38</sup> Decreto 415 de 2016 por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto número 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

<sup>39</sup> Tomado de página web <https://www.isaca.org/resources/cobit>



### 2.3.2 Presupuestales

El artículo 9 de la Ley 2281 de 2023 establece que el Sector Administrativo de Igualdad y Equidad estará integrado por el Ministerio de Igualdad y Equidad y las demás entidades que adscriba o vincule a la Ley, conforme el artículo 42 de la Ley 489 de 1998. Además, el artículo 12 concede al Presidente de la República facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza material de ley dirigidas a integrar el Sector de Igualdad y Equidad.

#### Fuente de recursos

De acuerdo con lo previsto en el artículo 352 de la Constitución Política y en los artículos 1 y 2 del Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto -EOP), el presupuesto del Ministerio de Igualdad y Equidad se rige por las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Presupuesto que le sean aplicables. Lo anterior en la medida en que se trata de una entidad del orden nacional.

La *fuentes* de los recursos del *Ministerio de Igualdad y Equidad* se da a partir del siguiente contexto normativo:

- El artículo 2 de la Ley 2281 de 2023 *"por medio de la cual se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad y se dictan otras disposiciones"*, establece su **naturaleza y denominación**: *Créase el Ministerio de Igualdad y Equidad, como un organismo principal del sector central de la Rama Ejecutiva en el orden nacional, rector del Sector Administrativo de Igualdad y Equidad y de sus entidades adscritas o vinculadas, (...).*
- El artículo 8 de la Ley 2281 de 2023, determina que el **Patrimonio** del Ministerio de Igualdad y Equidad estará conformado por: i) las sumas que se apropien en el Presupuesto General de la Nación -PGN, ii) los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título y iii) las sumas de los bienes muebles e inmuebles que le sean donados o cedidos por entidades públicas o privadas, nacionales e internacionales.
- El Decreto 111 de 1996 *"por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto"* en su artículo 3º identifica el Presupuesto General de la Nación como el primer nivel de cobertura del EOP compuesto por los presupuestos de los establecimientos públicos del orden nacional y el presupuesto nacional que comprende a su vez las ramas legislativa y judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la organización electoral, y la rama ejecutiva del nivel nacional.

- En materia del gasto presupuestal, y respecto a la clasificación de las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público clasifica como **secciones presupuestales y unidades ejecutoras** a los órganos públicos del orden nacional que lo conforman y del cual hace parte el Ministerio de Igualdad y Equidad.

En este orden de ideas, el Ministerio de Igualdad y Equidad será financiado con recursos de tipo *Nación* del Presupuesto General de la Nación y la fuente específica dependerán de las asignaciones y priorizaciones de gasto que realice el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en cuanto a recursos corrientes, otros recursos del tesoro, préstamos de destinación específica, donaciones y/o fondos especiales.

#### Tipo de gastos

El presupuesto de gastos o ley de apropiaciones, con la cobertura definida en el artículo 3 del EOP, incluye los gastos que se prevé ejecutar bajo el PGN en determinada vigencia fiscal, distinguiendo entre gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de inversión a nivel de programas y subprogramas.

Una vez se encuentre en etapa de operación, la **programación de los gastos** del Ministerio de Igualdad y Equidad se adelantará en el marco del artículo 13 de la Ley 2281 de 2023, los cuales dependerán de los estudios sobre el funcionamiento de la entidad y se asignarán de acuerdo con la disponibilidad fiscal del país y la existencia de recursos para tal propósito, garantizando así el mínimo impacto fiscal.

La programación de los gastos de funcionamiento se deberá desarrollar en concordancia con los procesos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Capítulo 3 (Programación del Anteproyecto y Proyecto de Presupuesto General de la Nación) del Decreto 1068 de 2015; y para el caso de los gastos de inversión, aquellos definidos por el Departamento Nacional de Planeación en el Título 6 (Seguimiento a proyectos de inversión pública) del Decreto 1082 de 2015.

En cuanto a los **gastos de funcionamiento**, se realizó una estimación de costos de la planta a nivel central, por regionales y el total general. Adicionando un valor estimado del 60% de gastos adicionales de funcionamiento, factor comúnmente usado para entidades públicas del orden nacional, el total anual de \$128.113 millones anuales.

**Tabla 20. Estimación de gastos de funcionamiento**

Nivel	Costo anual	TOTAL +60% GASTOS FUNCIONAMIENTO (COP, millones)
TOTAL CENTRAL	\$ 67847	\$ 108555
TOTAL REGIONALES	\$ 12249	\$ 19599
TOTAL GENERAL	\$ 80096	\$ 128153

Cifras en millones de pesos

Ahora bien, en lo que respecta a los **gastos de inversión** del Ministerio de Igualdad y Equidad, éstos estarán orientados específicamente al cumplimiento de su objeto y funciones definidas en los artículos 3 y 4 de la Ley 2281 de 2023, haciendo un especial énfasis en los ámbitos de competencia (artículo 5) y en la creación del Sistema Nacional de Cuidado (artículo 6). Para este propósito, el Ministerio avanza en la formulación de programas y proyectos específicos que amplíen cobertura y cubran de manera prioritaria la atención de población que actualmente no está siendo atendida por alguna entidad del orden nacional y los cuales serán ser puestos a consideración del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la programación del Presupuesto General de la Nación.

#### Mecanismos de financiación

Teniendo en cuenta que el Ministerio de Igualdad y Equidad es una entidad recientemente creada bajo la Ley 2281 de 2023, esta no cuenta una estructura programática, proyectos de inversión vigentes ni gastos de funcionamiento asignados hasta tanto no se reglamente su operación. En este mismo sentido, la posibilidad de financiamiento de plantas temporales tendrá ocasión de análisis cuando los programas y proyectos se encuentren en fase de planeación, programación y ejecución presupuestal.

Ahora bien, para adelantar las gestiones de financiación para la puesta marcha del Ministerio de Igualdad y Equidad y su incorporación al PGN, se podrán tramitar -una vez se encuentre reglamentado el sector y la entidad- las operaciones presupuestales contenidas en la ley 819 de 2003 y los Decretos 111 de 1996, 1068 de 2015 y 1082 de 2015, que permiten financiar la entidad tanto en la etapa de ejecución como de programación del PGN. Las operaciones clasificadas como ejecución permitirían financiar el Ministerio de Igualdad y Equidad en la vigencia 2023 y las de programación para 2024 con su incorporación en el Marco de Gasto de Mediano Plazo y el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Cada operación debe adelantarse de manera coordinada con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, atendiendo los requisitos presupuestales, técnicos y de planificación que exige cada uno.

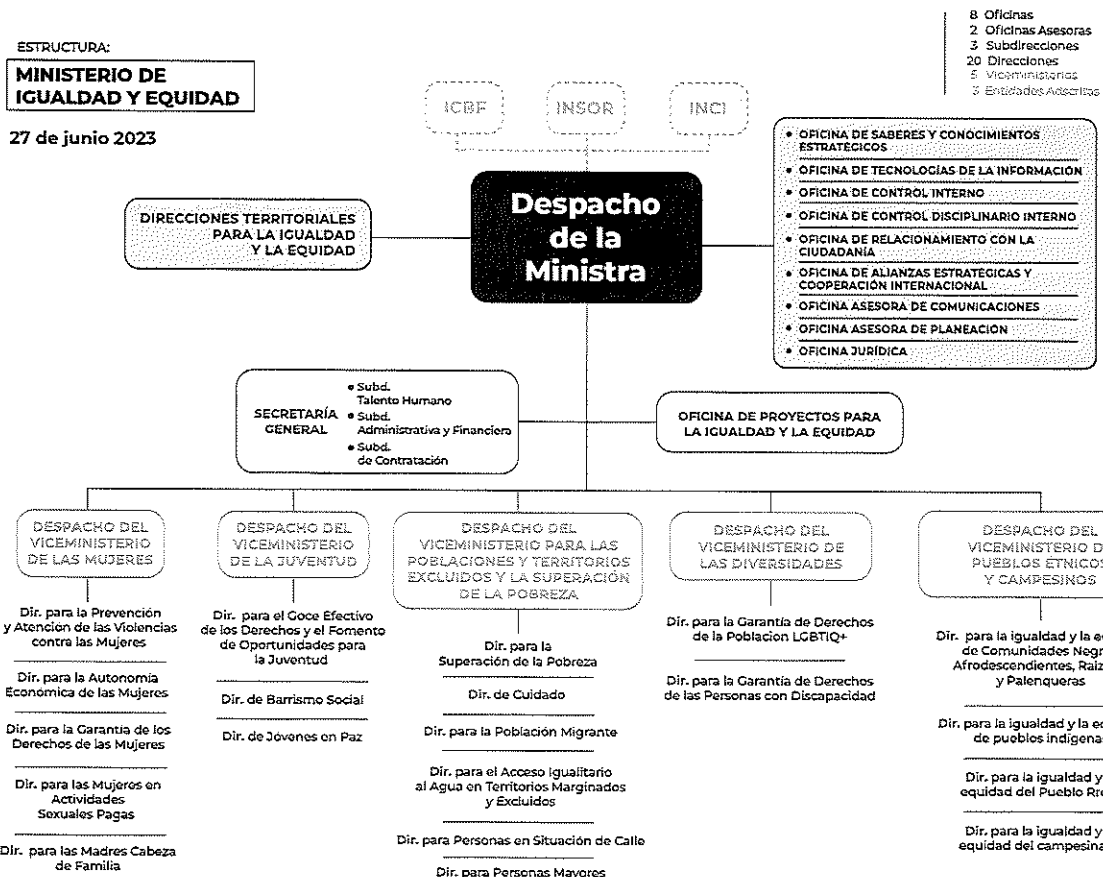
**Tabla 21. Descripción de operaciones presupuestales en el marco del PGN**

Operación presupuestal	Ejecución	Descripción
Distribución	Ejecución	Es una operación a través de la cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o el Departamento Nacional de Planeación distribuye recursos de funcionamiento y recursos asignados a un proyecto de inversión determinado, sin cambiar su destinación, a otros proyectos.
Incorporación	Ejecución	Es una operación presupuestal que surge por la suscripción de convenios interadministrativos o contratos celebrados entre entidades del presupuesto nacional.
Adición por donación	Ejecución	Se refiere a la recepción de recursos provenientes de asistencia o cooperación internacional de carácter no reembolsable, que deben ser incorporados en el PGN.
Ubicación	Ejecución	Es el trámite que adelanta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante el cual, por resolución o decreto según el caso, ubica en su lugar las partidas que han sido incorporadas en secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza o que por decisión normativa se requiera.
Modificación a la ley de	Ejecución	Cuando se requiere aumentar apropiación del presupuesto nacional, se pueden adelantar

Tipo de documento	Estrategia	Descripción
PGN vigente		proyectos de ley sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, conforme los artículos 79 y 80 del Estatuto Orgánico de Presupuesto – EOP.
Anteproyecto de presupuesto	Programación	Corresponde al proceso de elaboración del PGN para la siguiente vigencia fiscal, el cual inicia con la elaboración del anteproyecto de presupuesto, el Plan Operativo Anual de Inversiones, el Marco de Gasto de Mediano Plazo, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y termina con la sanción de la ley del PGN y su respectivo decreto de liquidación.

### 2.3.3 Estructura Organizacional

*Figura 7. Estructura organizacional*



Fuente: elaboración propia.

Cada una de las dependencias administrativas que se van a reglamentar están en armonía con lo que estableció el legislador en la medida en que refleja su mandato, a través de la asignación de funciones particulares para su ejecución. Además, van a contribuir efectivamente a la garantía de los derechos y la superación de brechas de desigualdad de las poblaciones que son objeto de competencia del Ministerio de Igualdad y Equidad.

Por consiguiente, con el propósito de que el Ministerio de Igualdad y Equidad entre en funcionamiento y cumpliendo con lo establecido por el legislador, es necesario expedir una nueva normativa, la cual es objeto de esta memoria justificativa, para adoptar la estructura del Ministerio de Igualdad y Equidad. Esto, de acuerdo al estudio de diseño institucional que permite el cumplimiento de sus funciones. Esta estructura

va permitir la ejecución de las labores asignadas por el legislador y va a dotar al Ministerio de las dependencias administrativas necesarias para ello.

### **Sobre el Sector Administrativo de Igualdad y Equidad**

Para desarrollar su objeto, el Ministerio de Igualdad y Equidad debe contribuir a la protección de los derechos de los sujetos de especial protección constitucional, población vulnerable y de grupos históricamente discriminados o marginados en todo el país. Por ello, en la Ley se identificaron catorce (14) poblaciones en situación de vulnerabilidad: 1) mujeres en todas sus diversidades; 2) población LGBTIQ+; 3) pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y Rrom; 4) campesinos y campesinas; 5) jóvenes; 6) miembros de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema; 7) personas con discapacidad; 8) habitantes de calle; 9) población en territorios excluidos; 10) mujeres cabeza de familia; 11) adultos mayores; 12) familias, 13) niñez; y 14) población migrante regular, irregular, refugiados, en tránsito y retornados.

El diagnóstico consistió en una revisión de 23 de los 24 sectores administrativos existentes (a excepción del Sector de Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia), conformados por 18 Ministerios y 5 Departamentos Administrativos, 112 entidades y sus dependencias, y 121 instancias de coordinación y asesoría. En cada Sector Administrativo se identificaron funciones, objetivos generales y poblaciones de competencia de cada entidad. Asimismo, se usaron como fuentes de información los Decretos Únicos Reglamentarios, los Decretos de Estructura y los de Funciones Generales. Como producto de este estudio, se identificaron las entidades pertenecientes a estos sectores que tienen una relación directa con el Sector Administrativo de Igualdad y Equidad.

Las entidades que fueron identificadas por el grupo de trabajo que se deben adscribir para la adecuada conformación del Sector Administrativo de Igualdad y Equidad son: (i) el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF-, (ii) el Instituto Nacional para Sordos –INSOR-, y (iii) el Instituto Nacional para Ciegos –INCI-en razón al ámbito de competencias y las funciones establecidas en la Ley 2281 de 2023.

En este mismo sentido, es necesario que el Ministerio de Igualdad y Equidad se integre a las instancias de coordinación y articulación institucional e intersectorial que existen en el marco de la oferta social del Estado. Estos son mecanismos que permiten desarrollar y articular políticas públicas con mayor eficacia y solventar problemas asociados a su ejecución. Estas instancias son: (i) el Consejo Nacional de Política, (ii) la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (iii) la Comisión

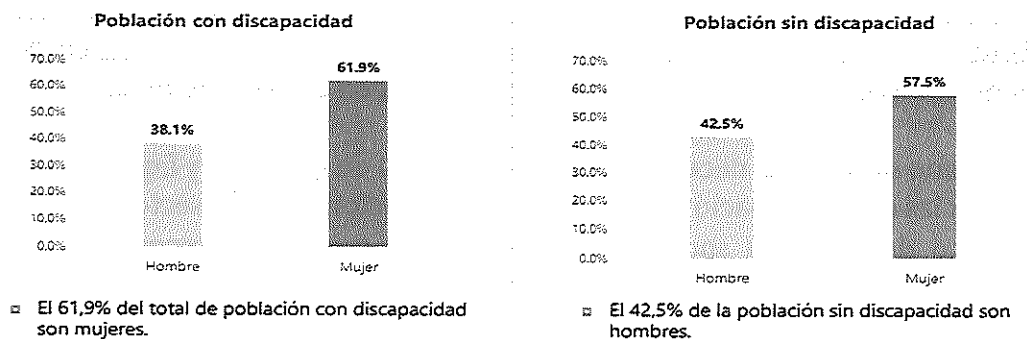
Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, (iv) el Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la Violencia Sexual y Atención Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas del Abuso Sexual, (v) el Consejo Nacional de Discapacidad –CND-, (vi) el Consejo Nacional del Adulto Mayor, (vii) el Consejo Nacional de Políticas Públicas de la Juventud y, (viii) el Comité Nacional de Convivencia Escolar.

Por consiguiente, con el propósito de conformar el Sector y en virtud de las facultades extraordinarias y precisas para expedir normas con contenido material de ley que confirió el Congreso al Presidente de la República en el artículo 12 de la Ley 2281 de 2023, es necesario expedir una nueva normativa, la cual es el objeto de esta memoria justificativa.

Adicionalmente, la entidad cabeza del Sector Administrativo es el Ministerio de Igualdad y Equidad, por lo que la conformación del sector supone también una pieza jurídica clave para su puesta en marcha y para la ejecución de las funciones asignadas por el legislador a esta entidad, lo cual contribuye de forma esencial al desarrollo de sus propósitos.

**El Instituto Nacional para Ciegos –INCI– y el Instituto Nacional para Sordos–INSOR– quedarán adscritos al Sector Administrativo de Igualdad y Equidad.** Según el DANE, se estima que para el año 2022, hubo un aproximado de 2.5 millones de personas en situación de discapacidad en Colombia. La caracterización por género se presenta a continuación:

**Figura 8 - Caracterización de la población en situación de discapacidad por género, Ene-May 22**

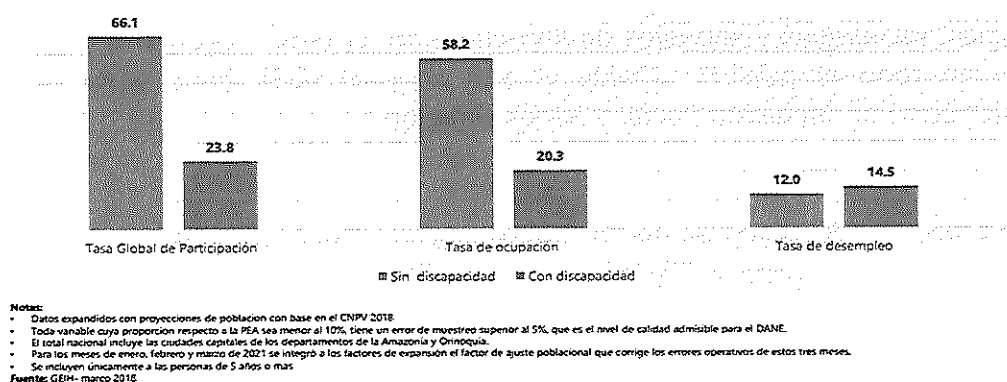


**Fuente:** Retomado del DANE. Septiembre 2022



En particular, las mujeres en Colombia representan la mayor parte de la población en situación de discapacidad. Mientras los hombres representan un 38,1% de esta población, las mujeres representan el 61,9%; una diferencia de 23 puntos porcentuales. La situación de empleo para las mujeres en situación de discapacidad es la siguiente:

**Figura 9 - Situación del empleo de las personas en situación de discapacidad, Feb – Abr 22**



**Fuente:** Retomado del DANE. Septiembre 2022

Varias brechas de desigualdad afectan a las personas con discapacidad. Una de ella es la brecha laboral, cifra que impacta directamente en todos los indicadores de ingresos y de capacidades monetarias. Para la población con discapacidad se evidencia una diferencia de 43 puntos porcentuales entre la tasa global de participación de las personas con o sin discapacidad, 38 puntos porcentuales de brecha entre la tasa de ocupación de las personas con y sin discapacidad, además de una tasa de desempleo mayor.

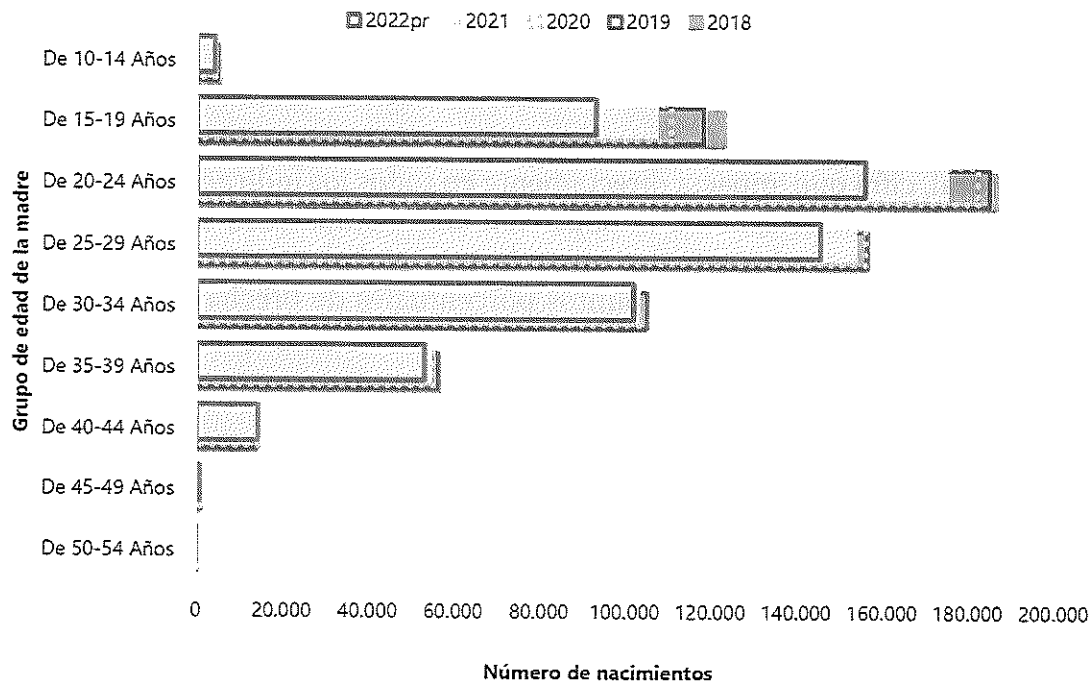
El Instituto Nacional para Ciegos –INCI- y el Instituto Nacional para Sordos –INSOR-, son establecimientos públicos de carácter técnico y asesor, que actualmente pertenecen al Sector Educación y apoyan al Ministerio de Educación Nacional en la elaboración de lineamientos pedagógicos, lingüísticos y uso de tecnologías para la inclusión social de la población con discapacidad auditiva y visual en el sistema educativo.

Dado que el numeral 7 del artículo 5 de la Ley 2281 de 2023 incluyó a las personas con discapacidad en el ámbito de competencias del Ministerio de Igualdad y Equidad, y que las brechas de desigualdad que inciden en las personas con discapacidad incluyen múltiples aspectos que interactúan de manera compleja, adscribir al INCI y al INSOR

al Sector Administrativo de Igualdad y Equidad permitirá un abordaje integral de los derechos de las personas con discapacidad.

**El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF quedarán adscrito al Sector Administrativo de Igualdad y Equidad.** El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- “es la entidad del Estado colombiano que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, infancia y adolescencia, el fortalecimiento de los jóvenes y las familias en Colombia. Brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos. Esta entidad llega a cerca de 3 millones de colombianos con sus programas, estrategias y servicios de atención con 33 sedes regionales y 215 centros zonales en todo el país”.<sup>40</sup> Desde el año 2013, el ICBF hace parte del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación.

***Ilustración 10 – Número de nacimientos según grupos de edad quinquenal de la madre (Total, nacional, Años 2018-2022pr)***



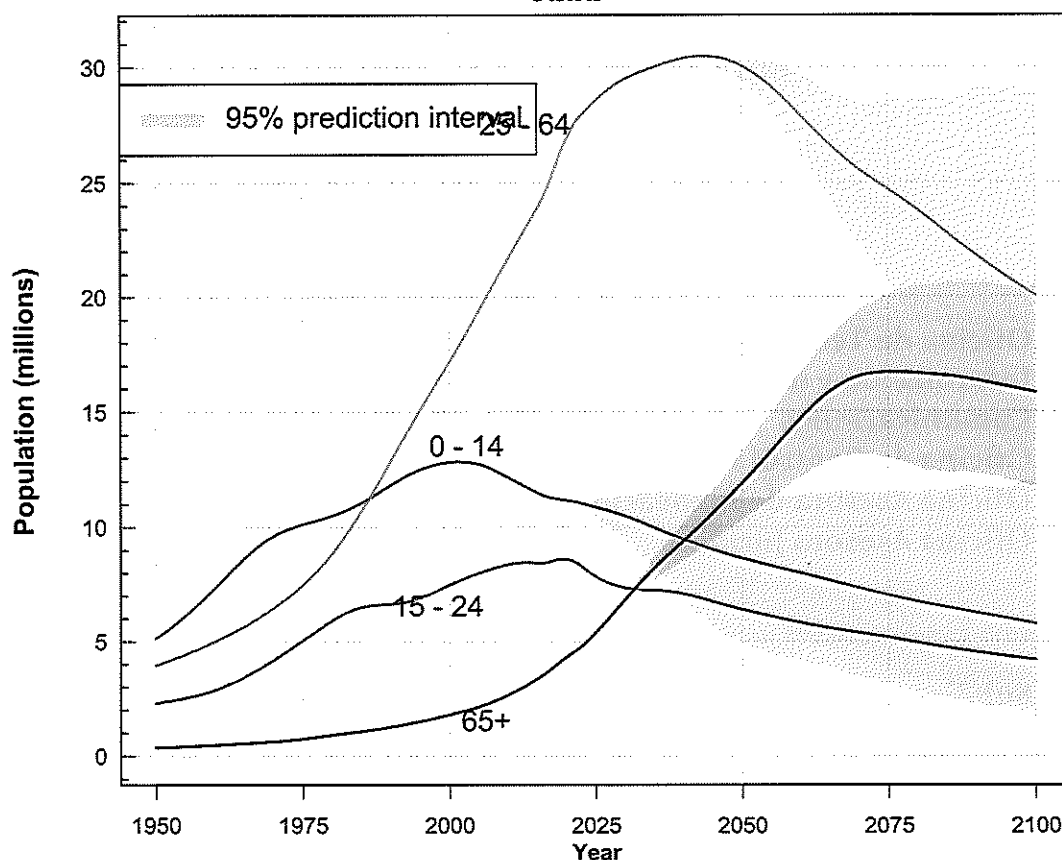
**Fuente:** Retomado del DANE. Estadísticas Vitales, marzo de 2023.

<sup>40</sup> Extraído de: <https://www.icbf.gov.co/instituto>.

La misionalidad del ICBF se articulará de manera permanente con el Sector Administrativo de Igualdad y Equidad para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Cuidado, para prevenir las brechas de desigualdad que siguen generándose por los embarazos de niñas y adolescentes y para garantizar la adecuada coordinación con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

De otro lado, debido a que la reducción de las tasas de natalidad y el aumento de las expectativas de vida cerrarán próximamente el bono demográfico por el aumento de los cuidados a las personas mayores (Ilustración 4) y siendo la niñez, la juventud, las familias y las personas mayores algunas de las poblaciones del ámbito de competencias del Ministerio de Igualdad y Equidad, es necesario que el ICBF se adscriba al Sector Administrativo de Igualdad y Equidad para lograr una articulación permanente en la que el Ministerio, como cabeza de sector, oriente las políticas a estas poblaciones ante el escenario de una transición demográfica acelerada.

**Figura 11 – Proyección poblacional nacional para Colombia, por grupos de edad**



**Fuente:** Naciones Unidas. World Population Prospects 2022. Disponible en:  
<https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Line/170>

### **Sobre la Estructura Interna del Ministerio de Igualdad y Equidad**

La siguiente tabla describe, de manera general, las dependencias del Ministerio. Para mayor mayor detalle respecto a las funciones de cada dependencia, consultar el Acto Administrativo de Estructura del Ministerio que se encuentra en el material Anexo.

**Tabla 22. Estructura interna del Ministerio de Igualdad y Equidad**

Ministerio de Igualdad y Equidad		
1	Despacho del Ministerio	
1.1	Oficina de Formulación de Proyectos para la Igualdad y la Equidad	Esta oficina de alto nivel se va a encargar de la formulación de los proyectos con el enfoque de igualdad y equidad
1.2	Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos	Es una oficina que se encargará de evaluar, controlar y hacer seguimiento a las políticas del ministerio, que se cumplan, que los proyectos se ejecuten y medir si los indicadores de desigualdad e inequidad e informar si estos han disminuido.
1.3	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	<ul style="list-style-type: none"><li>Son de creación legal (artículo 11 numerales 1.1 al 1.7 de la Ley 2281 “Por medio del cual se crea el ministerio de igualdad y equidad y se dictan otras disposiciones” )</li><li>Estas oficinas son comunes en toda organización o entidad del estado</li></ul>
1.4	Oficina de Control Interno	
	Oficina Asesora de Planeación	
	Oficina Asesora Jurídica	
2.	Secretaría General	
	Subdirección Administrativa y Financiera	Estas oficinas se encargan de contratación y ordenación del gasto, administración del talento humano y de temas administrativos del ministerio
	Subdirección de Contratación	
	Subdirección de Talento Humano	
3.	Viceministerio de las Mujeres	Se crea para darle representación

		<p>en la estructura a las mujeres (población objeto de atención del ministerio).</p> <p>Su función es crear políticas orientadas a la promoción de los derechos de las mujeres en su diversidad, la prevención y eliminación de las violencias contra las mujeres, así como de las barreras económicas, sociales y políticas o de discriminación, incorporando los enfoques de derecho, género, étnico racial, territorial, diferencial e interseccional</p>
	<b>Dirección para la Prevención de las Violencias contra las Mujeres</b>	<p>Esta dirección aplicara enfoques de género y diferenciales destinados a enfrentar, prevenir y eliminar las diversas formas de violencia contra la mujer, teniendo en cuenta las necesidades y demandas de las víctimas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.</p> <p>Tomar acciones contra la trata de mujeres con fines de prostitución, pornografía, explotación sexual, trabajo forzoso, esclavitud, servidumbre involuntaria o servidumbre por deudas.</p> <p>Atención en salud y justicia para las mujeres.</p>
	<b>Dirección para la Autonomía Económica de las Mujeres</b>	<p>Está dirigida a la implementación de políticas que apliquen el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de</p>

		<p>igual valor, entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina.</p> <p>Promover la remuneración de las labores de cuidado que realizan las mujeres</p> <p>Acceso a servicios financieros para las mujeres</p>
	<b>Dirección para la Garantía de los Derechos de las Mujeres</b>	Esta dirección buscara el enfoque de género en el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de políticas, planes y programas a cargo de las entidades de los niveles nacional, departamental, distrital y municipal que promuevan la participación de las mujeres
4	<b>Viceministerio de la Juventud</b>	<p>Se crea para darle representación a los jóvenes, que son objeto de atención del ministerio.</p> <p>Su función principal será la implementación de las políticas públicas para la mejora de las condiciones sociales, económicas y culturales de la juventud, en igualdad y equidad,</p>
	<b>Dirección para el Goce Efectivo de los Derechos de la Juventud</b>	Esta dirección se crea para formular, ejecutar y hacer seguimiento a planes y programas que permitan identificar, prevenir y atender situaciones de violencia, discriminación, exclusión y vulneración de derechos que afecten a los jóvenes.

Nº	Denominación	Descripción
	Dirección para el Fomento de Oportunidades para la Juventud	
5	<b>Viceministerio para las Poblaciones y los Territorios Excluidos, y la Superación de la Pobreza</b>	Se crea para la formulación de políticas, lineamientos y estrategias orientadas a la atención de personas migrantes y al cuidado de calidad para personas con algún nivel de dependencia en condiciones de vulnerabilidad o extrema pobreza, incorporando los enfoques de derecho, género, étnico racial, territorial, diferencial e interseccional
	Dirección para la Superación de la Pobreza	<p>Esta dirección tiene como función principal formular, articular y ejecutar las políticas, planes, programas, estrategias, lineamientos y proyectos para la superación de la pobreza y la pobreza extrema de las poblaciones y territorios excluidos.</p> <p>Dirigir y coordinar interinstitucional e intersectorialmente la oferta social del Estado para la superación de la pobreza, pobreza extrema, pobreza monetaria, pobreza multidimensional y la estabilización socioeconómica</p>
	Dirección de Cuidado	Esta dirección está acorde 12 (núm. 12 artículo 4 y artículo 6 de la Ley 2281 de 2023) con el Sistema Nacional de Cuidado para el reconocimiento de la labor de cuidar en los diferentes ciclos de la vida (niñez, vejez, población en situación de discapacidad)

	Dirección para la Población Migrante	<p>Esta dirección atiende a la población migrante regular, irregular, refugiado, en tránsito y retornado (núm. 14 del artículo 5 de la Ley 2281 de 2023).</p> <p>Tiene como función principal formular, adoptar, dirigir y ejecutar planes, programas, estrategias y proyectos para definir, gestionar y focalizar la oferta social de las entidades del orden nacional en el territorio para la atención inmediata y humanitaria; y la integración socioeconómica y productiva de la población migrante regular, irregular, refugiada, en tránsito y retornada en el país</p>
6	<b>Viceministerio de las Diversidades</b>	<p>Tiene como función la inclusión de la perspectiva social y comunitaria en la formulación y ejecución de las políticas relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad y de la población LGBTIQ+, en concordancia con los preceptos constitucionales y la normativa aplicable.</p>
	Dirección para la prevención de las Violencias y la Discriminación y para el Goce Efectivo de Derechos de la Población LGBTIQ+	<p>Esta dirección atiende a la población LGTBIQ+ numeral 2 del artículo 5 de la Ley 2281 de 2023.</p> <p>Esta dirección tiende a la población en situación de discapacidad (núm. 7 del artículo 5 de la Ley 2281 de 2023) y promoverá la igualdad de trato y oportunidades para las personas LGBTIQ+, en cooperación con las entidades del Estado y</p>



		agentes privados, prevenir y erradicar la violencia y discriminación.
	Dirección para la prevención de las Violencias y la Discriminación y para el Goce Efectivo de Derechos de las Personas con Discapacidad	Generar políticas y programas para la inclusión social y el acceso a los servicios de cuidado y atención integral de las personas con discapacidad
	<b>Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinado</b>  Dirección para la Igualdad y la Equidad del Campesinado	Tendrá como función principal formulación de políticas y lineamientos orientados al reconocimiento, protección, desarrollo y promoción de los derechos de los pueblos Negros, Afrodescendientes, Palenqueros, Raizales, Indígenas, Rrom y campesinos incorporando los enfoques de derecho, género, étnico racial, territorial, diferencial e interseccional con perspectiva social y comunitaria.
	Dirección para la Igualdad y la Equidad de Personas Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras	Esta dirección atiende a la comunidad étnica, quienes ya tienen una dirección similar en el Ministerio del interior, pero tendrá como finalidad la mejora de las condiciones sociales, económicas y culturales de los pueblos Negros, Afrodescendientes, Palenqueros, Raizales, Indígenas, RROM y campesinos en igualdad y equidad (núm. 3 del artículo 5 de la Ley 2281 de 2023).
	Dirección para la Igualdad y la Equidad del Pueblo Rrom	
	Dirección para la Igualdad y la Equidad de los Pueblos Indígenas	

Con el propósito de evitar duplicidad de funciones entre el Ministerio de Igualdad y Equidad y otros sectores del Gobierno Nacional, para este estudio técnico se realizó un mapeo institucional de todos los sectores para identificar las funciones que por competencia según la ley 2281 de 2023, las cuales fueron expuestas

en las reuniones sectoriales para que modifiquen sus respectivos decretos reglamentarios, tras la organización de la arquitectura institucional por la conformación del nuevo Sector Administrativo de Igualdad y Equidad.

El resultado de ese análisis se encuentra consignado en los Anexos y tiene el **potencial de servir como insumo para los estudios técnicos que se requieren para modificar los actos administrativos de conformación de sector y de estructura y funciones de las dependencias de otros sectores.**

El Ministerio de Igualdad y Equidad busca reducir la fragmentación de la política pública social del Estado colombiano como una medida para superar las brechas de desigualdad que persisten en amplios sectores de la población colombiana. La fragmentación de la política pública se origina, entre otros elementos, en el diseño de la administración nacional, dado que históricamente la oferta social y la política pública se ha desarrollado a través de diferentes dependencias ubicadas en diferentes los Sectores Administrativos que componen el orden nacional del gobierno y no se han coordinado administrativamente de manera eficaz para la superación de las brechas de desigualdad. En parte, porque los desarrollos anteriores en términos de política pública social se han especializado en servicios o en sectores de la población, sin pensar en el desarrollo de una política pública integral a través de la concentración de múltiples cadenas de valor en un solo sector administrativo y liderada por una sola cabeza de sector.

Una muestra de la fragmentación de la política pública social es la existencia de diferentes dependencias que a pesar de su importancia para la superación de brechas de desigualdad, se encuentran dispersas en diferentes entidades. Los altos valores de desigualdad para Colombia, que la ubican entre los países más desiguales de Latinoamérica y del mundo, evidencian que la dispersión administrativa está entregando resultados que ameritan un ajuste de estrategia.

Hay varias dependencias actuales dispersas en el Gobierno nacional que, en aras de la unificación temática estratégica, deben pasar al Sector Administrativo de Igualdad y Equidad: la Consejería Presidencial de la Juventud, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la gerencia de inclusión de personas con discapacidad, la gerencia de diversidad sexual y derechos LGBTIQ+, la gerencia justicia étnico-racial e igualdad de trato y la gerencia de política de cuidado, que están respectivamente a cargo de la Presidencia de la República y la Vicepresidencia de República.

Una revisión y análisis exhaustivo de las funciones que hoy tienen a su cargo las entidades y organismos de diferentes sectores de la Administración Pública que cumplen labores de protección a los grupos más vulnerables, permiten concluir que:

- Aunque existen diferentes entidades públicas con funciones para atender y garantizar los derechos de las poblaciones más vulnerables, es manifiesta la falta de implementación práctica y de impacto de tales funciones en la situación real de los grupos más excluidos.
- Estudios y evaluaciones (Autos 005 y 004 de 2009 y Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional) evidencian la debilidad institucional en la implementación de políticas públicas en favor de las poblaciones de especial protección constitucional.
- Los mecanismos, sistemas, instancias, planes y programas existentes para garantizar los derechos de las poblaciones se encuentran dispersos en cabeza de diferentes entidades. No existe unidad de coordinación o un solo organismo o entidad a cargo de la articulación para el cumplimiento de las políticas y la eficacia y eficiencia de su seguimiento. Bajo este contexto, es necesario garantizar una estrategia integral encaminada a generar transformaciones estructurales en el corto, mediano y largo plazo.
- No existe una política que aborde directamente el derecho a la igualdad con una aplicación práctica a partir del mandato constitucional y que implemente de manera sistemática medidas en favor de las poblaciones más vulnerables.
- Se evidencia una ausencia y debilidad institucional, lo que ha generado incumplimiento o cumplimiento parcial de órdenes estructurales de la Corte Constitucional.
- Es esencial fortalecer las capacidades de incidencia, interlocución y coadyuvancia del empoderamiento social y político de estos grupos poblacionales. La participación y concertación con organizaciones y movimientos que representen las demandas de las poblaciones vulnerables debe ser transversal en los diferentes sectores de la administración pública, tales como educación, salud, trabajo, entre otros.
- Es importante fortalecer el trabajo descentralizado, priorizando el enfoque territorial.

Las dependencias antes mencionadas han desarrollado cadenas de valor para atender las necesidades y garantizar los derechos de las poblaciones objeto. Sin embargo, para

minimizar la fragmentación de la política pública es necesario que estas dependencias sean integradas al Ministerio de Igualdad y Equidad para que puedan articularse dentro del Sector Administrativo y desarrollar una dinámica de funcionamiento bajo las líneas base de actuación del Sector.

La integración, bajo estos criterios, permite que una mayor articulación de la política pública social del Estado y, como consecuencia, una posible mejora en los impactos de la política pública. En esa medida, no es solo un tema de posible duplicidad de funciones entre el Ministerio de Igualdad y Equidad con el funcionamiento de estas dependencias, que es un problema jurídico importante, sino que también supone la apuesta por articular una política pública social con la potencia administrativa suficiente para superar las brechas de desigualdad que persisten en la sociedad colombiana.

Por otro lado, está el caso de la Subdirección para la Superación de la Pobreza que hace parte del Departamento Administrativo de la Prosperidad – DPS. A diferencia de las consejerías y las gerencias, el DPS se ha especializado en la construcción de una cadena de valor para atender diferentes poblaciones objeto, en particular las víctimas del conflicto armado y los sectores de la población con menos ingresos. En esa medida, ha desarrollado importantes políticas públicas, por ejemplo, en términos de reparación de las víctimas y de transferencias monetarias para los sectores con menos ingresos que han construido una cadena de valor importante y que ya han desarrollado dinámicas de funcionamiento para responder ante la considerable demanda de servicios que tiene afrenta el sector, por ejemplo, por el alto número de víctimas.

A pesar de la importancia que tiene la Subdirección para la Superación de la Pobreza dentro del DPS, la entidad se ha centrado y especializado en el desarrollo de transferencias condicionadas como principal medida de política pública para consolidar una cadena de valor. Sin embargo, con la puesta en marcha del Ministerio de Igualdad y Equidad y con la conformación de Sector Administrativo de Igualdad y Equidad, el fenómeno de la pobreza se va a abordar como uno de los principales problemas generadores y perpetuadores de brechas de desigualdad y, como consecuencia, las medidas de política pública y las cadenas de valor que buscan transformar este problema se abordarán de manera integral usando los enfoques de género, étnico-racial, territorial, de derechos, interseccional y diferencial.

En esa medida, las transferencias van a continuar a cargo del DPS, que tiene especialización y efectividad para desarrollar estas políticas, sin embargo, la integración de la Subdirección para la Superación de la Pobreza al Ministerio de Igualdad y Equidad se justifica en que la capacidad institucional que ha acumulado esta dependencia sirve como un punto de inicio para abordar el fenómeno de la

pobreza que aprovecha, entre otras cosas, su memoria institucional y sus capacidades instaladas pero las adapta y complementa con nuevas líneas de acción en el marco de un nuevo Sector Administrativo que tiene en su centro la superación de las brechas de desigualdad. En esa medida, el Sector Administrativo de Prosperidad Social continua con un proceso de especialización y mejora de sus capacidades, al tiempo que el Ministerio de Igualdad y Equidad se beneficia en términos de capacidad pública para el desarrollo de las políticas públicas.

En suma, las dependencias mencionadas en su integración al Ministerio de Igualdad y Equidad, así como las entidades que se encontraban adscritas a otros sectores administrativos y que ahora harán parte del Sector Administrativo de Igualdad y Equidad, ofrecen oportunidades estratégicas para superar la fragmentación institucional en la oferta social y política pública y, al mismo tiempo, permiten utilizar las capacidades institucionales para desarrollar mejor las políticas públicas necesarias para superar las brechas de desigualdad.

#### 2.3.4 Talento Humano

##### 1. Planta de personal Ministerio de Igualdad y Equidad

Para atender los nuevos retos y desafíos del Ministerio de Igualdad y Equidad se propone la siguiente planta:

**Tabla 23. Planta de personal – Ministerio de Igualdad y Equidad**

NIVEL	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	GRADO	No
Directivo	Ministro	0005	N/A	1
Directivo	Viceministro	0020	N/A	5
Directivo	Secretario General de Ministerio	0035	22	1
Directivo	Director Técnico	0100	20	20
Directivo	Jefe de Oficina	0137	20	8
Directivo	Subdirector Administrativo y Financiero	0150	18	1
Directivo	Subdirector Técnico	0150	18	2
Directivo	Director Territorial	0042	13	32
Asesor	Asesor	1020	12	22
Asesor	Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones	1045	15	1
Asesor	Jefe de Oficina Asesora de Planeación	1045	15	1

NIVEL	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	GRADO	No
Profesional	Profesional Especializado	2028	15	196
			17	112
Profesional	Profesional Universitario	2044	10	79
			08	74
Técnico	Técnico Administrativo	3124	14	64
			16	47
Asistencial	Auxiliar Administrativo	4044	18	63
Asistencial	Conductor Mecánico	4103	20	8
Asistencial	Secretario Ejecutivo del Despacho de Ministro	4212	26	2
Asistencial	Secretario Ejecutivo del Despacho del Viceministro	4215	24	5

El total de la planta de personal se describe a continuación, donde se incluye la planta para las direcciones regionales.

Total empleos del nivel directivo	70
Total empleos del nivel asesor	24
Total empleos del nivel profesional	461
Total empleos del nivel técnico	111
Total empleos del nivel asistencial	78
<b>Total</b>	<b>744</b>

La planta del Ministerio de Igualdad y Equidad se puede detallar por cada dependencia de la manera que se presenta a continuación.

**Tabla 24. Discriminación Planta de personal – Ministerio de Igualdad y Equidad**

Dependencia	Directivo	Asesor	Profesional	Técnico	Asistencial	Total empleos
Despacho de la Ministra	1	8	7	-	4	20
Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos	1	9	6	1	1	18

Oficina de Proyectos para la Igualdad y Equidad	1	-	13	-	1	15
Oficina de Relacionamento con la Ciudadanía	1	-	6	2	3	12
Oficina Jurídica	1	-	22	1	1	25
Oficina de Alianzas Estratégicas y Cooperación Internacional	1	-	7	-	1	9
Oficina de Tecnologías de la Información	1	-	6	7	1	15
Oficina de Control Interno	1	-	7	-	1	9
Oficina de Control Disciplinario Interno	1	-	5	-	1	7
Oficina Asesora de Planeación	-	1	10	-	1	12
Oficina Asesora de Comunicaciones	-	1	12	2	1	16
Direcciones Territoriales para la Igualdad y Equidad	32	-	32	64	-	128
Despacho del Viceministerio de las Mujeres	1	1	17	-	3	22
Dirección para la Prevención y Atención de las Violencias contra las Mujeres	1	-	10	1	1	13
Dirección para la Autonomía Económica de las Mujeres	1	-	8	1	1	11
Dirección para la Garantía de los	1	-	8	1	1	11

Derechos de las Mujeres						
Dirección para las Mujeres en Actividades Sexuales Pagas	1	-	9	1	1	12
Dirección para las Madres Cabezas de Familia	1	-	6	1	1	9
Despacho del Viceministerio de la Juventud	1	1	16	-	3	21
Dirección para el Goce Efectivo de los Derechos y el Fomento de Oportunidades para la Juventud	1	-	11	1	1	14
Dirección de Barrismo Social	1	-	4	1	1	7
Dirección de Jóvenes en Paz	1	-	4	1	1	7
Despacho del Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza	1	1	13	-	3	18
Dirección para la Superación de la Pobreza	1	-	9	1	1	12
Dirección de Cuidado	1	-	9	1	1	12
Dirección para la Población Migrante	1	-	9	1	1	12
Dirección para el Acceso Igualitario al Agua en Territorios Marginados y Excluidos	1	-	6	1	1	9



Dirección para Personas en Situación de Calle	1	-	6	1	1	9
Dirección para Personas Mayores	1	-	6	1	1	9
Despacho del Viceministerio de las Diversidades	1	1	16	-	3	21
Dirección para la Garantía de Derechos de la Población LGBTIQ+	1	-	12	1	1	15
Dirección para la Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad	1	-	7	1	1	10
Despacho del Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos	1	1	16	-	3	21
Dirección para la Igualdad y la Equidad de Comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras	1	-	9	1	1	12
Dirección para la Igualdad y la Equidad de Pueblos Indígenas	1	-	11	1	1	14
Dirección para la Igualdad y la Equidad del Pueblo Rrom	1	-	9	-	1	11
Dirección para la Igualdad y la Equidad del Campesinado	1	-	8	-	1	10
Secretaría General	1	-	9	-	1	11

Subdirección Administrativa y Financiera	1	-	40	8	22	71
Subdirección de Contratación	1	-	19	2	1	23
Subdirección de Talento Humano	1	-	21	6	3	31
<b>Totales</b>	<b>70</b>	<b>24</b>	<b>461</b>	<b>111</b>	<b>78</b>	<b>744</b>

## ANEXOS

6. Base de datos con lista de países que tienen institucionalidad que se asemeja a la del Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia.
7. Documento de análisis sectorial de funciones que presentan duplicidades con las del Ministerio de Igualdad y Equidad.
8. Base de datos con información pormenorizada de la planta del Ministerio de Igualdad y Equidad.
9. Base de datos con análisis de cargas para la planta del Ministerio de Igualdad y Equidad.

## BIBLIOGRAFÍA

- Banco Mundial. 2020. Inclusión Social en Uruguay. Washington, DC: Banco Mundial. Licencia: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGOs.
- Barcena, Alicia y Prado, Antonio (2016). El Imperativo de la Igualdad – Por un Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. CEPAL. S XXI Editorial.
- Bases de datos del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).
- BID. (2015). Construyendo gobiernos efectivos: logros y retos de la gestión pública para resultados en América Latina y el Caribe. Washington, D.C.: División de Capacidad Institucional del Estado.
- BID. (2018). Mejor gasto para mejores vidas: Cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Blank, S. (2016). The Mission Model Canvas – An Adapted Business Model Canvas for Mission-Driven Organizations. Obtenido de [steveblank.com](https://steveblank.com/2016/02/23/the-mission-model-canvas-an-adapted-business-model-canvas-for-mission-driven-organizations/): <https://steveblank.com/2016/02/23/the-mission-model-canvas-an-adapted-business-model-canvas-for-mission-driven-organizations/>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Middleton Stone, M. (2006). The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature. *Public Administration Review*, 44-55.
- CEPAL (2022). CEPALSTAT: <https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?theme=1&lang=es> consultado en febrero de 2023.
- CEPAL. (2017). Institucionalidad social en América Latina y el Caribe. Santiago: Naciones Unidas.
- Chiavenato, I. (2006). Introducción a la Teoría General de la Administración (Séptima Edición ed.). México D.F.: McGraw-Hill Interamericana Editores.
- Christensen, T., & Lægreid, P. (2012). Welfare Reform and "Wicked issues" From coupling to de-coupling. N.D.: Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future (COCOPS).
- CLAD. (2020). Carta iberoamericana de innovación en la gestión pública. Andorra: XIX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de la Administración Pública y Reforma del Estado. 08 de octubre de 2020.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. Plataforma virtual para la difusión de conocimiento sobre desarrollo social de América Latina y el Caribe. Recuperado del 21 de febrero de 2023 en: <https://dds.cepal.org/redesoc/ministerios>.
- Congreso de la República (1998). Ley 489 de 1998 “por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. Consultado en: <https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=186#:~:text>

- =LEY%20489%20DE%201998%20%28Diciembre%2029%29%20%E2%80%9CPor%20la,la%20Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.%E2%80%9D
- Congreso de la República (2023). Ley 2281 de 2023 “por medio de la cual se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad y se dictan otras disposiciones”. Consultado en: <https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=200325>
- Congreso de la República. (2023). Ley 2281 de 2023 "por medio de la cual se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad y se dictan otras disposiciones".
- Constitución Política de Colombia (1991).
- Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión. (17 de octubre de 2013) Sentencia T-736/2013. [MP Alberto Rojas Ríos]
- Corte Constitucional, Sala Plena. (19 de septiembre de 2001) Sentencia C- 992/2001. [MP Rodrigo Escobar Gil]
- Corte Constitucional, Sala Plena. (2 de marzo de 2016) Sentencia C-104/16. [MP Luis Guillermo Guerrero Pérez]
- Corte Constitucional, Sala Plena. (4 de marzo de 2021) Sentencia C- 047/2021. [MP Antonio José Lizarazo Ocampo]
- Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión. (2 de diciembre de 2015) Sentencia T-747/2015. [MP Myriam Ávila Roldán]
- Crea, T. M. (2017). Social service systems for vulnerable children and families in low-and middle-income countries: Establishing definitions and key components. *International Journal of Social Welfare*.
- DAFP. (2014). Rediseño Institucional de entidades públicas. Bogotá, D.C.: DAFP.
- DAFT, R. L. (2011). Teoría y Diseño organizacional. México: Cengage Learning.
- DANE. (2020). Guía para la inclusión del Enfoque Diferencial e Interseccional en la producción estadística del Sistema Estadístico Nacional (SEN). Obtenido de [www.dane.gov.co](http://www.dane.gov.co): <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/enfoque-diferencial-e-interseccional>
- DNP (2015). Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector administrativo de planeación nacional”
- DNP (2016). Manual de Inversión Pública Nacional. Obtenido de <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pbblicas/EC-Mo1%20Manual%20de%20Modificaciones%20Presupuestales.Pu.pdf>
- DNP (2022). Informe Anual de Avance en la Implementación de los ODS en Colombia 2021. Bogotá D.C.: DNP. Obtenido de: [https://assets.ctfassets.net/27p7ivvbl4bs/7myPrzLxNgtrIVoZZ9PLS6/4fcaa686e86371ab12de75c69f382571/2021-12-29\\_Informe\\_final\\_2021.pdf](https://assets.ctfassets.net/27p7ivvbl4bs/7myPrzLxNgtrIVoZZ9PLS6/4fcaa686e86371ab12de75c69f382571/2021-12-29_Informe_final_2021.pdf).
- DNP (2023). Metodología General Ajustada para la formulación de proyectos de inversión pública en Colombia. Obtenido de [https://mgaayuda.dnp.gov.co/Recursos/Documento\\_conceptual\\_2023.pdf](https://mgaayuda.dnp.gov.co/Recursos/Documento_conceptual_2023.pdf)

- DNP. (2016). Manual de Inversión Pública Nacional. Obtenido de <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pbblicas/EC-Mo1%20Manual%20de%20Modificaciones%20Presupuestales.Pu.pdf>
- DNP. (2023). Metodología General Ajustada para la formulación de proyectos de inversión pública en Colombia. Obtenido de [https://mgaayuda.dnp.gov.co/Recursos/Documento\\_conceptual\\_2023.pdf](https://mgaayuda.dnp.gov.co/Recursos/Documento_conceptual_2023.pdf)
- EATON, T. (2017). We Need Intentional UX Design More Than Ever. Obtenido de [uxplanet.org: https://uxplanet.org/successful-ux-design-is-intentional-design-73398a91ced](https://uxplanet.org/successful-ux-design-is-intentional-design-73398a91ced)
- Gobierno de Chile – Ministerio de Planificación (n.d.). Políticas Sociales y los Objetivos del Milenio.
- Horwath, J., & Morrison, T. (2007). Collaboration, integration and change in children's services: Critical issues and key ingredients. *Child Abuse & Neglect*, 55–69.
- Johnson, J. (2017). Definition – What is Process Consistency? Obtenido de [tallyfy.com: https://tallyfy.com/process-consistency/](https://tallyfy.com/process-consistency/)
- Jones, G. (2015). Teoría Organizacional: Diseño y Cambio en las organizacional. México: Pearson Prentice Hall.
- Jones, G. (2015). Teoría Organizacional: Diseño y Cambio en las organizacional. México: Pearson Prentice Hall.
- Mazzucato, M. (2017). Mission-oriented innovation policy. Obtenido de [marianamazzucato.com: https://marianamazzucato.com/research/mission-oriented-innovation-policy/](https://marianamazzucato.com/research/mission-oriented-innovation-policy/)
- McKinsey & Company. (2021). Organization Design. Obtenido de [mckinsey.com: https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/how-we-help-clients/organization-design](https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/how-we-help-clients/organization-design)
- McKinsey Center for Government. (2018). Delivering for citizens: How to triple the success rate of government transformations. McKinsey & Company.
- MEJÍA Luis Fernando y NÚÑEZ Jairo (2022). ¿Qué hacer en desigualdad? FEDESARROLLO. Bogotá.
- MHCP/DANE/CGR/BR. (2018). Clasificación de entidades del sector público colombiano para la elaboración de Estadísticas de Finanzas Públicas. Bogotá, D.C.: Comisión intersectorial de estadísticas de finanzas públicas (CIEFP).
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público (1996). Decreto 111 de 1996 "por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP)"
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2015). Decreto 1068 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público"
- OCDE-BID. (2016). Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2017. Paris: OCDE.

- OCDE. (2011). Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas. París: OCDE.
- OECD-BID. (2020). Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2020. Obtenido de [publications.iadb.org: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Panorama\\_de\\_las\\_Administraciones\\_Públicas\\_América\\_Latina\\_y\\_el\\_Caribe\\_2020.pdf](https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Panorama_de_las_Administraciones_Públicas_América_Latina_y_el_Caribe_2020.pdf)
- OECD-OPSI. (Octubre de 2019 de 2019). Designing for a mission-oriented government in Estonia. Obtenido de [oecd-opsi.org: https://www.oecd-opsi.org/mission-oriented-government-in-estonia/](https://www.oecd-opsi.org/mission-oriented-government-in-estonia/)
- OECD. (2018). Investing in integrity for productivity. Obtenido de [oecd.org: Obtenido de www.oecd.org: https://www.oecd.org/gov/ethics/investing-in-integrity-for-productivity.pdf](https://www.oecd.org/gov/ethics/investing-in-integrity-for-productivity.pdf)
- Osborne, S. P. (2006). The New Public Governance? *Public Management Review*, 8(3), 377-387.
- Palma, J. y Urzúa, R. (2005). Políticas contra la pobreza y ciudadanía social: el caso de "Chile Solidario".
- Presidencia de la República. (2015). Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional".
- Restrepo Darío I. y Peña G. Camilo (2021). Hacia el cambio estructural territorial de la economía colombiana. En RESTREPO Darío I. y VILLABONA Jairo O (Editores) (2021). Cambio de rumbo: hacia una Colombia incluyente, equitativa y sustentable. Universidad Nacional de Colombia.
- Rovira, R. (2016). La pobreza en Chile y su superación como problema de Estado: Un análisis de los discursos presidenciales de la concertación.
- Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (2016). Equidad e Inclusión Social: superando desigualdades hacia sociedades más inclusivas. Disponible en: [http://www.oas.org/docs/inclusion\\_social/equidad-e-inclusion-social-entrega-web.pdf](http://www.oas.org/docs/inclusion_social/equidad-e-inclusion-social-entrega-web.pdf).
- Senge, P. (2011). La quinta disciplina el arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje. Buenos Aires: Ediciones Granica.
- Solano Cornejo, D. (2007). La transversalidad y transectorialidad en el sector público. Recuperado el 24 de Abril de 2017, de [siare.clad.org: http://siare.clad.org/fulltext/0056804.pdf](http://siare.clad.org/fulltext/0056804.pdf)
- Spurlin, S. (2019). Designing the Intentional Organization. Obtenido de [medium.com: https://medium.com/the-ready/designing-the-intentional-organization-6abc29b9b4a2](https://medium.com/the-ready/designing-the-intentional-organization-6abc29b9b4a2)
- Stanford, N. (2015). Guide to Organisation Design. Creating high-performing and adaptable enterprises. London: The Economist Newspaper Ltd; Profile Books Ltd; 2nd edition.

- Teece, D. J. (2018). Simplified schema of dynamic capabilities, business models, and strategy. Obtenido de [www.davidjteece.com](http://www.davidjteece.com): <https://www.davidjteece.com/dynamic-capabilities>
- UNDP. (2019 de Noviembre de 2010). Measuring Capacity. Obtenido de [undp.org](http://www.undp.org/capacity): <http://www.undp.org/capacity>
- Wheelen, T. L., & Hunger, D. J. (2013). Administración estratégica y política de negocios (Vol. Decimotercera edición). Pearson.
- Winkworth, G., & White, M. (2011). Australia's Children 'Safe and Well'? Collaborating with Purpose Across Commonwealth Family Relationship and State Child Protection Systems. *The Australian Journal of Public Administration*, 70(1), 1-14.
- Yeung, A., & Ulrich, D. (2019). Reinventing the organization. Harvard Business Review Press.

